



**UNIVERSIDAD NACIONAL
“PEDRO RUIZ GALLO”
ESCUELA DE POSTGRADO**



MAESTRÍA EN DERECHO

**“EL HÁBEAS CORPUS CONTRA LAS RESOLUCIONES
JUDICIALES EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL”**

TESIS

**PRESENTADA PARA OPTAR EL GRADO DE
MAESTRO EN DERECHO CON MENCIÓN EN
CONSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD**

AUTOR:

Abog. WALTER MIRANDA RAMOS

ASESOR:

M.Sc. MIGUEL ARCANGEL ARANA CORTEZ

LAMBAYEQUE – PERÚ

2017

“EL HÁBEAS CORPUS CONTRA LAS RESOLUCIONES JUDICIALES EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL”

MIRANDA RAMOS, Walter
AUTOR

Dr. ARANA CORTEZ, Miguel Arcángel
ASESOR

Presentada a la “Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional
Pedro Ruiz Gallo” para optar el Grado de **MAESTRO EN
DERECHO** con mención en **CONSTITUCIONAL** y **GOBERNABILIDAD**.

APROBADO POR:

Dr. JOSÉ MARÍA BALCAZAR ZELADA
PRESIDENTE DEL JURADO

Dr. RAFAEL HERNÁNDEZ CANELO
SECRETARIO DEL JURADO

M. Sc. CARLOS CEVALLOS DE BARRENECHEA
VOCAL DEL JURADO

LAMBAYEQUE- PERÚ, MARZO DEL 2017.

DEDICATORIA:

A mi padre Mamerto Miranda Peña por su enseñanza y ejemplo de honestidad y dignidad, el sacrificio y la perseverancia, y **a mi madre** Zacaria Ramos Patricio, quien con la misma cualidad, desde el cielo ilumina mi camino, que han permitido la obtención de uno de mis primeros objetivos académicos: Ser Maestro en Derecho Constitucional y Gobernabilidad.

AGRADECIMIENTOS:

A la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz y Gallo, y su plana docente, por haberme brindado realizar mis estudios de Maestría en mención Derecho Constitucional y Gobernabilidad, que me permite realizar este primer logro importante en mi vida profesional.

Al Dr. Miguel Arcángel Arana Cortez, asesor de tesis, por su paciencia y brillante orientación y su incesante motivación.

A toda mi familia por su inagotable tolerancia, y a todos los que incondicionalmente me apoyaron en la materialización de la presente obra.

ÍNDICE

	PÁGINA
Dedicatoria	
Agradecimientos	
Índice	
Resumen (español)	
Abstract (inglés)	
Introducción	1

CAPITULO I ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1. Ubicación o Delimitación.....	3
1.2. Surgimiento del Problema.....	4
1.3. Manifestación y características del problema.....	5
1.3.1. Planteamiento del problema.....	5
1.3.2. Formulación y delimitación del problema.....	6
1.3.3. Justificación e importancia del estudio.....	6
1.3.4. Objetivos.....	7
1.3.5. Hipótesis.....	7
1.3.6. Variables.....	8
1.4. Descripción metodológica.....	8
1.5. Marco metodológico.....	9
1.5.1. Diseño de contrastación de hipótesis	9
1.5.2. Población y muestra	9
1.5.3. Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	10
1.5.4. Análisis estadístico de los datos.....	10

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES.....	11
2.2. RESEÑA HISTÓRICA DE HÁBEAS CORPUS.....	11
2.2.1. La Antigua Grecia.....	11
2.2.2. Roma.....	12
2.2.3.- Legislación Foral Española.....	13
2.2.4. Inglaterra.	14
2.2.4.1. La Carta Magna Inglesa.....	14
2.2.4.2. Bill Of Rights.....	17
2.2.5. Estados Unidos de Norteamérica.....	17
2.2.5.1. El Bill Of Rights Of Virginia.....	18
2.2.6. Francia.....	20
2.2.6.1. La Revolución Francesa.....	20
2.2.7. América Latina.....	23
2.3. EL HÁBEAS CORPUS EN LA LEGISLACIÓN PERUANA.	24
2.3.1. Evolución legislativa.	24
2.3.2. La Ley de 1897.	25
2.3.3. Las Leyes de 1916.....	26
2.3.4. Constitución de 1920.	27
2.3.5. El Código de Procedimientos en Materia Criminal de 1920.	28
2.3.6. La Constitución de 1933.	29
2.3.7. El Código de Procedimientos Penales de 1940.....	31
2.3.8. El Decreto Ley N° 17083.	33
2.3.9. Constitución Política del Perú de 1979.....	33
2.3.10. Ley N° 23506 - Ley de Hábeas Corpus y Amparo.	34
2.3.11. La Constitución Política del Perú de 1993.....	36
2.3.12. Ley N° 28237 – Código Procesal Constitucional.....	37
2.4. MARCO CONCEPTUAL.....	40
2.4.1. Etimología.	40

2.4.2. Definición.	40
2.4.2.1. Concepción Restringida de su Ámbito de Protección.....	44
2.4.2.2. Concepción Amplia de su Ámbito de Protección.....	44
2.4.3.- FINALIDAD.	44
2.4.4. CARACTERÍSTICAS.....	46
2.4.4.1. Sumariedad.....	46
2.4.4.2. Subsidiaridad.....	46
2.4.4.3. Informalidad.....	47
2.4.5. NATURALEZA JURÍDICA.....	47
2.4.6. TIPOS DE HABEAS CORPUS.	48
2.5.- EL PROCESO DE HABEAS CORPUS.	53
2.5.1. Legitimación.....	53
2.5.2. Demanda.....	53
2.5.3. Competencia.....	54
2.5.4. Forma.	55
2.5.5. Procedimientos Urgentes.	55
2.5.6. Normas Especiales de Procedimiento de Hábeas Corpus.....	57
2.5.7. Resoluciones.....	58
2.5.7.1. Contenido de la sentencia estimatoria.....	59
2.5.7.2. RECURSOS IMPUGNATORIOS.....	59
2.5.7.2.1. Recurso de apelación.	59
2.5.7.2.2. Recurso de Agravio Constitucional.	60
2.5.7.2.3. Recurso de Queja.....	60

CAPÍTULO III

HÁBEAS CORPUS CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES

3.1. Cuestiones preliminares.	61
3.2. El hábeas corpus contra Resoluciones Judiciales en la Ley N° 23506 y su ley complementaria, la Ley N° 25398.....	62
3.2.1. Proceso regular.	62

3.2.2 Proceso irregular.....	63
3.3.- Proceso irregular en el que procede el hábeas corpus.....	63
3.4.- Debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva	65
3.4.1. El Debido proceso.....	66
3.4.2. Tutela jurisdiccional efectiva	69
4.- El Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales en el Código Procesal Constitucional.....	71
5.- El Hábeas Corpus no solo debería proceder Contra Resoluciones Judiciales firmes.....	76
6.- Hábeas Corpus y los Estados de Excepción.....	78
7.- Habeas Corpus y la Jurisdicción Internacional.....	80

CAPITULO IV

RESOLUCIONES JUDICIALES

Definición.....	82
Decretos.....	83
Autos.....	83
La Sentencia.....	84
Motivación.....	86
Impugnación.....	92
Estructura Básica.	94

CAPITULO V

LIBERTAD INDIVIDUAL

5.1. LIBERTAD INDIVIDUAL.....	97
5.1.1. Definición.....	97
5.1.2. La libertad personal como derecho fundamental.	98
5.1.3. Las excepciones constitucionales.....	101
5.1.4. Detenciones legales y detenciones arbitrarias.....	102
5.1.4.1. Detención preventiva policial.	102
5.1.4.2. Operativos y detenciones arbitrarias.....	103

5.2. DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA.....	104
5.2.1.- Orígenes.	106
5.2.2.- Desarrollo.	107
5.2.3. Definiciones.	107
5.2.4. Jurisprudencia.	108
5.2.5. Artículo 2º inc.24. Derecho a la libertad y seguridad personales.....	109

CAPÍTULO VI

DERECHOS CONSTITUCIONALES CONEXOS

6. Derechos Constitucionales Conexos.	110
6.1. Derechos Fundamentales Sustantivos Conexos la Libertad Personal.	113
6.2. Derechos Fundamentales Procesales Conexos a la Libertad Personal.	115
6.3.- Sobre Los Derechos Conexos a la Libertad en las Sentencias Peruanas.	124
6.4. DERECHOS HUMANOS.....	126
6.4.1. Principios de los Derechos Humanos.....	126
6.4.2. Las Generaciones de los Derechos Humanos.....	129

CAPÍTULO VII

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

7.1.- ANÁLISIS.....	131
7.1.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.....	132
7.1.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS.....	140
7.1.3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.....	141
CONCLUSIONES.....	146
RECOMENDACIONES.....	147
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	148
ANEXOS.....	152

RESUMEN

El estudio titulado “El Hábeas Corpus contra las Resoluciones Judiciales en el Tribunal Constitucional”, formuló el problema: ¿En qué medida tienen eficacia en el Tribunal Constitucional los procesos de Habeas Corpus contra Resoluciones Judiciales, interpuestos en protección de la libertad individual y los derechos constitucionales conexos?. 2010 – 2012, trazándose como objetivo general: Analizar en qué medida, el Tribunal Constitucional deniega los procesos de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales, como objetivos específicos: Analizar las razones, por los que el Tribunal Constitucional, en un alto porcentaje declara infundadas e improcedentes, los procesos de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales.

Se formuló la hipótesis: “Los Procesos de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales interpuestos en protección de la libertad individual y los derechos constitucionales conexos en el Tribunal Constitucional, tienen mínima eficacia. Como población de estudio se analizó 351 sentencias de Hábeas Corpus, que constituye la muestra representativa de los casos resueltos y publicadas por el Tribunal Constitucional, en su página web, durante los años 2010 a 2012. Hipótesis que ha quedado demostrado, por cuanto, según los instrumentos de medición aplicados, las sentencias de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales, al ser resueltos en definitiva por el Tribunal Constitucional, en el 93% son denegados.

Se propone, que el carácter firme de la resolución que vulnera la tutela procesal efectiva y la libertad personal no debería ser exigible en caso de que la vulneración sea manifiesta, así como analizar con sumo cuidado los criterios de procedencia de hábeas corpus de los artículos 2º y 4º, y las causales de improcedencia del artículo 5º del Código Procesal Constitucional, para tener éxito al interponer el Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales en defensa y protección de la libertad individual y los derechos constitucionales conexos.

ABSTRACT

The study entitled "Habeas Corpus against judgments in the Constitutional Court ", formulated the problem: To what extent have efficacy in the Constitutional Court processes Habeas Corpus against Judgements, brought in protecting individual freedom and rights related constitutional?. 2010 - 2012, Euplius general objective: Analyze the extent to which the Constitutional Court denies habeas corpus proceedings against judicial decisions, as specific objectives : To analyze the reasons why the Constitutional Court , in a high percentage declared unfounded and irrelevant the process of Habeas Corpus against Judgements .

The hypothesis was formulated: "The habeas corpus appeals against judgments in protecting individual freedom and related constitutional rights in the Constitutional Court, have minimal effectiveness. As a study population of 351 sentences of Habeas Corpus, which is the representative sample of the resolved cases and issued by the Constitutional Court, on its website, for the years 2010 to 2012. This hypothesis has been demonstrated analyzed, because, according applied measurement instruments, judgments of habeas corpus against judicial decisions to be resolved ultimately by the Constitutional Court, 93% are denied.

It is proposed that the definitive nature of the decision which undermines the effective judicial protection and personal freedom should not be payable if the violation is manifest, and to analyze carefully the criteria of origin of habeas corpus in Articles 2 and 4th, and the grounds for invalidity of Article 5 of the Code of the Constitution, to succeed to bring the Habeas Corpus against judgments in defense and protection of individual freedom and related constitutional rights.

INTRODUCCIÓN

La Tesis denominada “EL HÁBEAS CORPUS CONTRA LAS RESOLUCIONES JUDICIALES EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL”, expone los resultados de la investigación del por qué el Tribunal Constitucional del Perú, en un alto porcentaje, deniega o desestima los procesos de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales, interpuesto en defensa y protección de la libertad individual y los derechos constitucionales conexos.

En la investigación, se estableció que del total de 2,915 sentencias de hábeas corpus publicadas por el Tribunal Constitucional del Perú, durante los años 2010 a 2012, 30 son sentencias de hábeas corpus sobre la libertad individual; y 2,885 son sentencias de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales, de lo que aplicando el diseño de una muestra probabilística, conocido como error estándar (Kish, 1965), se obtuvo como muestra 351 sentencias, que viene a ser la población de estudio.

Se utilizó la TÉCNICA de ANÁLISIS DOCUMENTAL, con lo que se analizó las sentencias de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales, publicadas por el Tribunal Constitucional del Perú en su página web, durante los años 2010, 2011 y 2012, para lo cual se elaboró INSTRUMENTOS, como la Ficha de Registro de Datos, Tablas y Figuras de Datos, validada con prueba estadístico.

Se obtuvo como resultado de estudio, que los procesos de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales, al ser resueltos por el Tribunal Constitucional, el 93 % son desestimados, es decir, el 19% infundadas, el 74% improcedentes, el 5% nulos, y sólo el 2% son declarados fundados; siendo las razones de la desestimación, que no hay sentencia firme, no se ha acreditado la vulneración de derechos, uso indebido del hábeas corpus,

carecen de sustento, sentencia de Tribunal Constitucional son inimpugnables, no existe etapa probatoria, no se ha interpuesto contra sentencia firme, sustracción de materia, y no están referidos al contenido constitucionalmente protegido, respectivamente.

Es oportuno mencionar, la Tesis responde a la necesidad de demostrar el por qué los procesos de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales, en defensa de la libertad individual y los derechos constitucionales conexos, al ser resueltos por los jueces constitucionales o jueces penales del Poder Judicial, casi en su totalidad, de plano deniega, y cuando llega al Tribunal Constitucional, en el 93 % de los casos, declara infundados o improcedentes.

Se confía, que cada uno de los miembros del Jurado, sabrá compulsar éste análisis minucioso de “EL HÁBEAS CORPUS CONTRA LAS RESOLUCIONES JUDICIALES EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL”, en la medida de que la pretensión ha sido motivada por un amplio deseo de contribución con la ciencia del derecho, especialmente, en el proceso constitucional de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales.

La Tesis desarrollada se encuentra estructurada en “INTRODUCCIÓN” y VII Capítulos; el primero, está referido al “ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO”; el segundo, desarrolla el “MARCO TEÓRICO”; el tercero, aborda “EL HABEAS CORPUS CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES”; el cuarto, enfoca “RESOLUCIONES JUDICIALES”; el quinto, de “LA LIBERTAD INDIVIDUAL”; el sexto, los “DERECHOS CONSTITUCIONALES CONEXOS”, y el séptimo presenta “ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS”. Finalmente, se presenta las conclusiones y recomendaciones, con las correspondientes fuentes bibliográficas consultadas, tanto de estudiosos nacionales e internacionales entendidos en la materia.

EL AUTOR

CAPITULO I

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO

- 1.1. Ubicación o delimitación.
- 1.2. Surgimiento del problema.
- 1.3. Manifestación y características del problema.
- 1.4. Descripción Metodológica.

1.1. UBICACIÓN O DELIMITACIÓN.

En Perú, a partir de la vigencia de la Constitución Política del Estado de 1993, ante el pronunciamiento del órgano jurisdiccional (Resoluciones Judiciales) sean autos o sentencias, es frecuente observar que, como respuesta inmediata de su disconformidad, es la interposición del Hábeas Corpus contra las Resoluciones Judiciales.

Indistintamente en el lugar donde se interpone el Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales, los jueces penales o jueces constitucionales del Poder Judicial, de plano declaran improcedente o infundada la demanda de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales, lo que es impugnado vía Recurso extraordinario de Agravio Constitucional (RAC), para ser resuelto por el Tribunal Constitucional.

La presente investigación, por la naturaleza del tema, y teniendo en cuenta que la norma que lo regula es de ámbito y aplicación nacional, su objeto de estudio y análisis es de este carácter, para cuyo efecto se ha

tenido en cuenta, la legislación nacional e internacional, la doctrina, y la jurisprudencia nacional.

En cuanto a la ubicación temporal del objeto de estudio, por razones metodológicas, se ha analizado las sentencias de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales, publicadas por el Tribunal Constitucional del Perú, en su página Web, de los años 2010 a 2012.

1.2. SURGIMIENTO DEL PROBLEMA.

A partir de la entrada en vigencia de la Carta Política de 1993, al agregarse los derechos constitucionales conexos, se dio un viraje notorio en el planteamiento de Hábeas Corpus, que solo protegía los derechos individuales en forma específica, pues, en adelante se observa una indiscriminada interposición de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales.

Cuando, la demanda de Habeas Corpus contra Resoluciones Judiciales, declaradas improcedentes o infundadas por los jueces del Poder Judicial, llega al Tribunal Constitucional, este órgano jurisdiccional constitucional, máximo interprete y guardián de la Constitución, con frecuencia, al pronunciarse sobre los Hábeas Corpus interpuestas contra Resoluciones Judiciales, en un alto porcentaje desestiman, es decir, declaran improcedentes o infundadas, convirtiéndose en ineficaz en mayor medida la garantía constitucional planteada; realidad que es un problema, cuyas razones (*ratio decidendi*) se ha indagado con el presente estudio.

1.3. MANIFESTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA.

De lo expuesto, es factible establecer que la regla es que, cuando se interpone el proceso de Habeas Corpus contra Resoluciones Judiciales, en defensa de la libertad individual y los derechos constitucionales conexos, el Juez del Juzgado Constitucional o el Juez Penal del Poder Judicial, casi en su totalidad, de plano deniega, y cuando llega al Tribunal Constitucional, en el 93% de los casos desestima, es decir, declara infundadas(19%) e improcedentes(74%), cuyas razones, se explica en el presunto estudio.

1.3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

La Constitución Política del Perú de 1979, en su artículo 295, definía el concepto de Hábeas Corpus como: “La acción y omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual, da lugar a la acción de habeas corpus”¹, de lo que se infiere que, el hábeas corpus, principalmente protegía el derecho a la libertad individual de la persona.

La Constitución Política del Perú de 1993, en su artículo 3º incorpora la protección de derechos conexos², de allí que en su artículo 200 inciso 1 establece que “La acción de hábeas corpus, que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos”.

¹ Constitución Política del Perú de 1979. Ediciones Carpesa. Librería Atlas. pág. 61.

² La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado Democrático de Derecho y de la forma Republicana de Gobierno.

A partir de la entrada en vigencia de esta Carta Política, se dio un viraje notorio en el planteamiento de Hábeas Corpus, que solo protegía los derechos individuales en forma específica, pues, en adelante se observa una indiscriminada interposición de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales; sin embargo, el Tribunal Constitucional, en el 93% desestima, por lo que se planteó el problema con fines de encontrar una respuesta y proponer alternativas de solución.

1.3.2. FORMULACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.

El problema se formuló de la siguiente manera:

¿En qué medida tienen eficacia en el Tribunal Constitucional los procesos de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales, interpuestos en protección de la libertad individual y los derechos constitucionales conexos? 2010 - 2012.

1.3.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO.

La presente investigación tiene por finalidad, el encontrar las razones, el por qué, el Tribunal Constitucional como máximo interprete y guardián de la Constitución y en última instancia, en un alto porcentaje de Hábeas Corpus planteados contra Resoluciones Judiciales en defensa de la libertad individual y los derechos constitucionales conexos desestima, es decir, declara improcedentes o infundados; lo que va permitir proponer alternativas de solución para una correcta y adecuada formulación del Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales en la protección de la libertad individual y los derechos constitucionales conexos, de ahí la justificación e importancia del estudio, pues, va servir de guía y de mucha utilidad a los justiciables, a los abogados, a los magistrados y a toda la comunidad jurídica nacional.

1.3.4. OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL:

Analizar en qué medida, el Tribunal Constitucional desestima los procesos de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales, interpuestos en protección de la libertad individual y los derechos constitucionales conexos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- a) Analizar las razones, por los que el Tribunal Constitucional, en un alto porcentaje declara infundadas, los procesos de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales, interpuestos en protección de la libertad individual y los derechos constitucionales conexos.
- b) Analizar las razones, por los que el Tribunal Constitucional, en un alto porcentaje declara improcedentes, los procesos de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales, interpuestos en protección de la libertad individual y los derechos constitucionales conexos.

1.3.5. HIPÓTESIS:

La hipótesis formulada en la presente investigación, es la siguiente:

Los procesos de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales interpuestos en protección de la libertad individual y los derechos constitucionales conexos en el Tribunal Constitucional, tienen mínima eficacia. 2010 - 2012.

1.3.6. VARIABLES.

Variables independientes:

V1 = Los procesos de hábeas corpus.

V2 = Resoluciones judiciales.

Variables dependientes:

V3 = Libertad Individual

V4 = Derechos constitucionales conexos

1.4. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA.

Por la naturaleza y características del problema objeto de estudio, se ha creído conveniente usar la siguiente metodología de investigación:

1.4.1. Método Descriptivo; el que nos ha permitido hacer una descripción detallada y sistemática de las instituciones y figuras jurídicas objeto del estudio, así como de sus antecedentes correspondientes.

1.4.2. Método Explicativo; permitiéndonos explicar el objeto de estudio y así poder determinar en qué medida se puede conocer las razones por los que Tribunal Constitucional desestima en alto porcentaje los procesos de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales, interpuestos en protección de la libertad individual y los derechos constitucionales conexos.

1.4.3. Método Analítico; este nos ha permitido realizar un análisis in extenso de las sentencias de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales, publicadas por el Tribunal Constitucional, en su página Web de los años 2010 a 2012, que es materia de la presente investigación.

1.4.4. Método Inductivo; permitiéndonos del estudio de las figuras genéricas de la población para arribar a concreciones específicas en la muestra.

1.4.5. Método Deductivo, que nos ha permitido realizar estudios y fórmulas generales y universalmente aplicables a cada institución o figuras jurídicas materia del estudio.

1.5. MARCO METODOLÓGICO

1.5.1. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

Con respecto al tipo de diseño, debo precisar que es de carácter descriptivo y explicativo, por cuanto se trata de determinar las particularidades, rasgos o características de ciertos fenómenos, hechos o personas, y también en alguna medida trata de explicar e identificar las relaciones, conexiones o efectos que se dan entre dos o más fenómenos o variables.

1.5.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

En cuanto a la **población**, ésta se circunscribe a realizar una medición de la ineficacia de los recursos de Hábeas Corpus contra las Resoluciones Judiciales en defensa de los derechos a la libertad individual y los derechos constitucionales conexos, resueltos por el Tribunal Constitucional y publicadas en su página web durante los años 2010 a 2012, que en total son 2,885 sentencias.

Y con relación a la **muestra**, ésta consta de 351 Sentencias o Resoluciones de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales resueltas por el Tribunal Constitucional, y publicadas en su página web, durante los años 2010 a 2012, que se ha obtenido aplicando el diseño de una muestra probabilística, conocido como error estándar (Kish, 1965), se obtuvo como muestra 351 sentencias, que viene a ser la población de estudio.

1.5.3. MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.

Los MATERIALES consultados han sido de carácter bibliográfico y corresponden a autores nacionales como extranjeros

La TÉCNICA utilizada ha sido el ANÁLISIS DOCUMENTAL.

Se utilizó las FICHAS (Técnica del fichaje) formato:

Autor Título Lugar, editorial, año	Materia Contenido
Texto	

Para la RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN O DE COMPILACIÓN DE DATOS se empleó fuentes de información, tales como la observación de la problemática generada en torno a las sentencias denegadas o desestimadas (fuente de información primaria) así como de libros, revistas, internet, etc. (información secundaria).

1.5.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS

En cuanto al análisis estadístico, cabe precisar que se usó la estadística de carácter descriptiva, esto es que se organizó y se resumió los datos obtenidos mediante el análisis documental a aplicarse.

En esta clase de estadística se empleó porcentajes, los mismos que han servido para presentar los variables y probar las hipótesis.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

“EL HÁBEAS CORPUS CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL”

2.1 ANTECEDENTES.

2.1.1. De la revisión de la página Web de las diferentes universidades de nuestro país, estudio similar al presente, pero de diferente enfoque, se ha ubicado la TESIS para optar el grado académico de Doctor en Derecho, en la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el título de “El Hábeas Corpus y las Resoluciones del Tribunal Constitucional”, del autor Jaime Víctor Zelada Bartra. Año 2003.

2.1.2. Aparte de lo indicado en el punto anterior. No se ha encontrado otros estudios similares al presente.

2.2. RESEÑA HISTÓRICA DE HÁBEAS CORPUS.

2.2.1. LA ANTIGUA GRECIA.

El Hábeas Corpus, como idea de la libertad, aparece por primera vez en la cultura griega, cuyos políticos, historiadores, literatos y filósofos, hicieron de ella algo fundamental para el desarrollo de la polis, aunque por las inevitables limitaciones que tuvieron, sólo llegó a defender a las clases económica o socialmente dominantes. Por otro lado, al valor casi sagrado que tenía la libertad entre los griegos, el pensamiento político tendió a exaltar en forma desproporcionada el papel del Estado, subordinando al

individuo frente a aquel, aunque todo ello estaba envuelto en un contexto ético religioso que lo diferencia claramente de cualquier modelo contemporáneo³.

2.2.2. ROMA.

La aparición del derecho romano significó el inicio de una protección jurídica de la libertad del hombre, pero siempre dentro de las limitaciones propias de la época. En Roma el concepto de amparo de la libertad se formaliza con la Institución de los Tribunales de la Plebe, funcionarios inviolables con facultades de velar las decisiones de los magistrados y de ejercer el *ius auxilii* para defender a los plebeyos de las acciones injustas de los patricios. Posteriormente vienen las Leyes de Valerio Publícola, que prohíben las penas corporales contra los ciudadanos que han apelado al fallo del pueblo y la custodia *libera* que excluye toda prisión preventiva. Todos estos recursos tuvieron su culminación por así decirlo en el *Interdicto de Homine Libero Exhibendo* en la época del Imperio (533 D.C) que resume y sintetiza el aporte del derecho romano a la protección jurídica de la libertad⁴.

Es evidente que el interdicto (institución de derecho privado) es un aspecto de defensa de la propiedad, que el *dominium*, pues las personas en el derecho romano podían ser objeto de propiedad. Sin embargo, lo que se pedía en el interdicto era sobre todo “exhibir” el cuerpo: no interesaba otra cosa tratándose de una acción posesoria. Además, defendía solamente al hombre libre, es decir, sólo alcanzaba a una parte de la población. Resultó así el *interdicto* de alcance restringido, negando a los que no eran libres. Además, se utilizaba contra actos arbitrarios de los particulares, no de la autoridad. No obstante estas limitaciones, este Interdicto marca el inicio de una serie de instrumentos legales destinados a la protección jurídica de la libertad personal⁵.

³ GARCIA BELAUNDE, Domingo. El Habeas Corpus en el Perú. pág. 2.

⁴ GARCIA BELAUNDE, Domingo. Ob. Cit. pág. 2.

⁵ GARCIA BELAUNDE, Domingo. Ob. Cit. pág. 5.

2.2.3.- LEGISLACIÓN FORAL ESPAÑOLA.

Carlos Sánchez Viamonte, citado por Domingo García Belaúnde, en su obra “El Habeas Corpus en el Perú”, señala: “En España, la legislación más antigua es el Fuero de León del año 1188, que proclamaba la libertad como un derecho reconocido al individuo como fruto de un pacto civil entre el reino y don Alfonso IX”. En este documento, la libertad aparece en forma negativa, es decir, como una limitación de los gobernantes, constituyendo una prerrogativa que a su favor debía ser observada por el Rey⁶.

López de Haro, citado por Segundo V. Linares Quintana, en la obra de Domingo García Belaúnde en su obra “El Habeas Corpus en el Perú”, señala: “La manifestación de las personas (Fuero de Manifestación de Personas) que funcionó en el Reyno de Aragón, consistía en apartar a la autoridad de su acción contra la persona, previniendo toda arbitrariedad o tiranía a favor de los aragoneses. Se demandaba por quien, preso o detenido, sin proceso o por juez incompetente, recurría al justicia contra la fuerza de que era víctima, y en su virtud, en ciertos casos, quedaba libre un día, aunque en lugar seguro, y si examinado el proceso, debía seguirse el presunto reo era custodiado en la cárcel de los manifestados, donde al amparo del Justicia, esperaba sin sufrir violencia al fallo que recayera. Ese procedimiento garantizaba a las personas en su integridad y en su libertad”⁷.

Es decir, la manifestación era una de las libertades que se gozaba en el reyno, como recurso contra todo exceso de poder, se solicitaba al Justicia quien disponía lo conveniente, con facultad de sancionar a los que resistían su mandato⁸.

⁶ GARCIA BELAUNDE, Domingo. Ob. Cit. pág. 5.

⁷ GARCIA BELAUNDE, Domingo. Ob. Cit. pág. 6.

⁸ GARCIA BELAUNDE, Domingo. Ob. Cit. pág. 6.

El Fuero de Viscaya, emanado de la Asamblea General del Reyno del 5 de abril de 1526, era un reconocimiento por escrito de privilegios, franquicias y libertades existentes o que por tal acuerdo fueron reconocidos. Así se daban prohibiciones de aplicar tormento, de confiscar bienes, aún los pertenecientes a los malhechores, precisando: “Que, ningún prestamero merino, ni ejecutor alguno, sea osado de prender a persona alguna, sin mandamiento de juez competente, salvo en caso de *infraganti* delito. Si así sucediese y, Juez competente ordenara su libertad, se le suelte cualquiera que sea la causa o deuda porque esté preso (Ley 26 título XI)⁹.

2.2.4. INGLATERRA.

El sistema inglés fue pródigo en declaraciones de derechos. La más antigua, es la Carta de Libertades que Enrique I adoptó en el año 1100, que se refiere a casos muy concretos, aunque no contiene reporte alguno sobre la libertad corporal. El Decreto de Clarendon de 1166, parece ser el origen del Jurado compuesto de doce miembros, considerado como de las más importantes garantías de la administración de justicia¹⁰.

2.2.4.1. LA CARTA MAGNA INGLESA.

En **1215**, los Barones del Reino hicieron una Petición al **Rey Juan sin Tierra**, a fin de poner freno a sus actos arbitrarios. En uno de sus artículos (Nro. 29) se decía:

“No se podrá apresar corporalmente al hombre libre; sin el juicio de sus pares o sin el concurso de las leyes de la tierra; el hombre libre no podrá ser aprisionado ni despojado de sus tierras ni declarado fuera de la ley,

⁹ GARCIA BELAUNDE, Domingo. Ob. Cit. pág. 7.

¹⁰ GARCIA BELAUNDE, Domingo. Ob. Cit. pág. 8.

ni desterrado ni destruido de ninguna forma, ni el Rey podrá imponerle un castigo”¹¹.

El Rey Juan sin Tierra, tuvo que acceder a firmar lo que es conocido como “*Magna Charta Libertarum; seu concordia inter regem Johanem et Barones pro Concessione libertatum ecclesiae et regnie Anglais*”, un 15 de junio de 1215, en la pequeña Isla de Runnymede, en medio del río Támesis, no muy lejos de Londres” tal como dice H.H.A. Cooper¹².

El texto en versión castellano sería lo siguiente: “Ningún hombre libre será arrestado, o detenido en prisión, o privado de su tenencia libre, o declarado fuera de la ley, o desterrado o molestado de cualquier forma, y no procederemos contra él ni enviaremos a nadie en su contra, si no es por el juicio legal de sus pares o por la ley del país”¹³.

La Carta previó una serie de libertades, con respecto a las actividades del hombre libre en diversos aspectos relacionados con el comercio, los impuestos, etc. Este documento - que es el punto de partida de todo el constitucionalismo moderno – tuvo una gran repercusión, y aunque fue varias veces violado por el Rey Juan, y suspendido otras tantas veces por la corona inglesa en periodos agitados de su historia, fue reafirmado en diversas oportunidades como modelo al que debía aspirar la comunidad británica¹⁴.

A decir del maestro Domingo García Belaunde, es interesante notar que en sus primeros tiempos el Hábeas Corpus era utilizado sobre todo como un medio procesal contra las detenciones efectuadas por los particulares, pero en el reinado de Enrique VII (1485-1509) surgieron las primeras tentativas de utilizarlo contra la Corona.

¹¹ GARCIA BELAUNDE, Domingo. Ob. Cit. pág. 8.

¹² GARCIA BELAUNDE, Domingo. Ob. Cit. pág. 8.

¹³ GARCIA BELAUNDE, Domingo. Ob. Cit. pág. 9.

¹⁴ GARCÍA BELAUNDE, Domingo Ob. Cit. pág. 9.

Jorge XIFRA HERAS, en su obra Curso de Derecho Constitucional, citado por Domingo García Belaunde señala: “Posteriormente por la Ley de 1641 (16 Car.1, c.10) se abolió la Cámara Estrellada. Ahí se señaló que desde la Carta Magna existía una constante preocupación de parte de los Reyes por defender al hombre en su libertad y prerrogativas, pues, hasta el siglo XVI, todos los reyes debían jurar la Carta Magna, que quedara eclipsada durante la época de los Tudor (1485-1603) para reaparecer como símbolo del partido parlamentario y contrapeso del derecho divino en tiempo de Jacobo I”¹⁵.

No obstante, estas normas no habían sido observadas en algunas Cortes, en especial por la Cámara Estrellada, estableciendo que cualquier persona que fuera detenida por cualquier Corte que ejerciera jurisdicción similar a la *Star Chamber*, o bajo el control del Rey o de su Consejo Privado, estaría protegido por el *Court Of King’s Bench* o del *Common Pleas*, por el mandato de Hábeas Corpus y en tal caso la Corte debería decidir sobre la legalidad de la detención en el plazo de tres días¹⁶.

En 1679, en Inglaterra, durante el reinado de Carlos II, el Parlamento aprobó la primera Ley de Hábeas Corpus, con el fin de la libertad de la persona que se encontraba detenida indebidamente (Habeas Corpus Act. 31 Car. II, c.2). Dicha Ley empezaba así: “Cuando una persona sea portadora de un Hábeas Corpus dirigido a un Sheriff, carcelero o cualquier otro funcionario en favor de un individuo puesto bajo su custodia y dicho Hábeas Corpus sea presentado a los susodichos funcionarios o se les deje en la cárcel, quedan obligados a declarar la causa de la detención a los tres días de la presentación...”¹⁷.

Esta ley no trajo nada nuevo; fue más bien el perfeccionamiento procesal de una institución muy antigua, a tal extremo que llegó a establecer

¹⁵ GARCÍA BELAUNDE, Domingo. Ob. Cit. pág.11.

¹⁶ GARCÍA BELAUNDE, Domingo. Ob. Cit. pág. 12.

¹⁷ GARCÍA BELAUNDE, Domingo. Ob. Cit. pág. 12.

pena y sanciones muy severas, para quien, juez o funcionario, se negase a su trámite sin buenas razones para ello¹⁸.

2.2.4.2. BILL OF RIGHTS.-

Documento de gran importancia es el Bill of Rights de **1689**, aprobado diez años después, que se conoce como “una ley que declara los derechos y libertades del súbdito y que dispone la sucesión de la Corona” en la cual, tras diversas quejas del Parlamento contra los desafueros cometidos por el gobierno de Jacobo II, establecen una serie de declaraciones para “que se reivindiquen y se afirmen sus antiguos derechos y libertades” proclamando la libertad de los súbditos de llevar peticiones al Rey, la libre elección y reunión del Parlamento, la libertad de expresión y especialmente aquel que prohíbe a la Corona suspender las leyes o su cumplimiento (artículos 1 y 2)¹⁹.

La última ley importante, en materia de Hábeas Corpus data de 1 de julio de 1816 (56 Geo, c, 100) que sirvió para perfeccionar la legislación anterior y dispuso que el *Writ* de Hábeas Corpus sea utilizado no solamente en causas penales como establecía la Ley de 1679, sino para cualquier tipo de prisión indebida realizada por persona particular, cualquiera que fuese su naturaleza²⁰.

2.2.5. ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.

Un documento de gran trascendencia en lo que respecta a las libertades, es la famosa Declaración de Derechos formulada por los representantes del buen pueblo de Virginia (*the good people of Virginia*) el 12 de junio de 1776. Ahí se proclama que todos los hombres son por naturaleza libres e independientes y tienen ciertos derechos inherentes (*inherent rights*), que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial deben

¹⁸ GARCÍA BELAUNDE, Domingo. Ob. Cit. pág. 12.

¹⁹ GARCIA BELAUNDE, Domingo. Ob. Cit. pág. 13.

²⁰ GARCIA BELAUNDE, Domingo. Ob. Cit. pág. 13.

ser separados y distintos, que ningún hombre puede ser privado de su libertad sino de acuerdo a las leyes del país o el juicio de sus pares (art. VIII), etc.²¹.

2.2.5.1. EL BILL OF RIGHTS OF VIRGINIA.-

El pueblo de Virginia dio inicio a la construcción institucional de la nueva nación americana el **12 de Junio de 1776**, fue un modelo, al que surgieron las declaraciones similares de otros Estados de la Unión²².

Miguel ARTOLA GALLEG0, citado por Jaime Víctor ZELADA BARTRA señala: UNA DECLARACIÓN DE DERECHOS: “Hecha por los representantes del buen pueblo de Virginia, reunidos en plena y libre Convención, derecho que pertenece a ellos y a su posteridad, como base y fundamento del gobierno y reza en su artículo I: “Que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales cuando entran en Estado de sociedad, no pueden por ningún contrato, privar o despojar a su posteridad; especialmente el goce de la vida y de la libertad, con los medios de adquirir y poseer la propiedad y de obtener la felicidad y la seguridad²³.”

Esta declaración es la más antigua y famosa de las Declaraciones de Derechos americanos, y es además el prototipo de todas ellas²⁴. Como dice Jellinek, esta Carta fue el modelo de las que vinieron después, incluso de la de los Estados Unidos, que en lo esencial fue redactada por Jefferson. Es indudable que estas Declaraciones siguen la línea de sus predecesoras inglesas, aunque tienen algunas diferencias que las distinguen y que son

²¹ GARCIA BELAUNDE, Domingo, Ob. Cit. Pág. 13.

²² ZELADA BARTRA Jaime Víctor. Tesis. El Hábeas Corpus y las Resoluciones del Tribunal Constitucional”. pág.32.

²³ ZELADA BARTRA, Jaime Víctor. Ob. Cit. pág. 32.

²⁴ Los otros son: Pennsylvania 28.09.1776; Mariland 11.11.1776; Carolina del Norte 18.12.1776; Vermont 8.07.1777; Massachusetts 2.03.1780; New Hampshire 31.10.1783. En GARCIA BELAUNDE, Domingo Ob. Cit. pág.14.

fruto del distinto contexto histórico en que fueron redactadas. Una diferencia importante es que las leyes inglesas establecen deberes del Gobierno, mientras que las americanas precisan los derechos del hombre frente al poder²⁵.

Carlos SÁNCHEZ VIAMONTE, citado por Jaime Javier ZELADA BARTRA, refiere: “Pocos días después de esta declaración, el congreso de Filadelfia sancionó a su vez, la declaración de independencia de los “trece Estados Unidos de América” o lo que fue las trece colonias. Luego, el 4 de Julio de 1776, el Congreso aprobó la declaración redactada por Tomás Jefferson, resaltamos: “Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario que un pueblo rompa los lazos políticos que lo han unido a otro, para ocupar entre las naciones de la tierra el puesto de independencia e igualdad que le dan derechos las leyes de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza, el respeto decoroso al juicio de humanidad exige que declare las causas que los han llevado a la separación²⁶”.

Posteriormente, el 17 de Setiembre de 1787, se dio la Constitución de los Estados Unidos de América, cuya declaración inicial reza: “Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, con el propósito de formar una Unión más perfecta, establecer la justicia, garantizar la tranquilidad nacional, atender a la defensa común, fomentar el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestros descendientes, promulgamos y establecemos esta constitución para los Estados Unidos de América²⁷”.

El 15 de diciembre de 1791, ante la exigencia de la opinión pública norteamericana, se hizo una formal Declaración de Derechos, que se materializó con la introducción de las primeras diez enmiendas, de las que hay que destacar especialmente la V y una que se introdujo con posterioridad la XIX. La primera de las nombradas dice que nadie puede ser

²⁵ GARCIA BELAUNDE, Domingo Ob. Cit. pág.14.

²⁶ ZELADA BARTRA Jaime Víctor. Ob. Cit. pág.33.

²⁷ ZELADA BARTRA Jaime Víctor. Ob. Cit. pág.33.

desposeído de la vida, libertad y sus posesiones, sino luego de una debido proceso legal (*without due process of law*). La segunda, sancionada el 28 de julio de 1868 señalaba que ningún Estado podía privar a persona alguna de su vida, libertad o propiedad, sin el debido proceso legal²⁸.

En los Estados Unidos, aunque con variantes de orden procesal, el Hábeas Corpus se da a dos niveles: estatal y federal y su campo de acción es muy variado, desde buscar la libertad de una persona puesta en prisión por violación de un derecho federal, hasta cuestionar la validez de una extradición, revisar procedimientos de deportación o exclusión de extranjeros, determinar la legalidad del arresto de una persona, cuestionar la competencia de una Corte para someter a una persona por contumacia, etc.,. Uso tan variado del Hábeas Corpus ha conducido a abusos, notándose en los últimos tiempos un sentimiento general que pide que se detenga su desnaturalización, pues impide el normal desenvolvimiento de la justicia penal en los Estados Unidos²⁹.

2.2.6. FRANCIA.

2.2.6.1. LA REVOLUCIÓN FRANCESA.-

La **Revolución Francesa** fue el cambio político más importante que se produjo en Europa, a fines del siglo XVIII. No fue sólo importante para Francia, sino que sirvió de ejemplo para otros países, en donde se desataron conflictos sociales similares, en contra de un régimen anacrónico y opresor, como era la monarquía. Esta revolución significó el triunfo de un pueblo pobre, oprimido y cansado de las injusticias, sobre los privilegios de la nobleza feudal y del estado absolutista³⁰.

²⁸ GARCIA BELAUNDE, Domingo. Ob. Cit. pág.16.

²⁹ GARCIA BELAUNDE, Domingo Ob. Cit. pág.17.

³⁰ <http://www.portalplanetasedna.com.ar/francesa.htm>

El 9 de Julio la Asamblea Nacional se declaró Asamblea Constituyente, supremo órgano representativo y legislativo del pueblo francés, llamado a elaborar sus leyes. El Rey no aceptó y sus tropas pretendían la dispersión de la Asamblea. La orden del rey provocó una gran agitación en París, produciéndose el 12 de julio el primer choque entre el pueblo y las tropas. El 13 el pueblo francés empezó a armarse, apoderándose de decenas de miles de fusiles. El día 14 de julio una muchedumbre avanzó y se precipitó hacia los muros de la Bastilla. El comandante de la Bastilla ordenó abrir fuego. No obstante los muertos, el pueblo siguió el ataque hasta conseguir apoderarse de la Bastilla, fue el principio de la revolución³¹.

Con la fuerza del pueblo, el 26 de **Agosto** de **1789** la Asamblea Constituyente aprobó la **Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano**, que fue aceptada por el Rey el 05 de octubre de 1789. En ella, los representantes del pueblo francés “considerando que la ignorancia, el olvido, o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos”, resolvieron “exponer en una Declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre”³².

Documento más importante de la revolución, de trascendencia mundial e histórica, se encuentra expresado en el artículo I, que señala: “los hombres nacen y viven libres e iguales en derechos”, el artículo 4 dice: “La libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a otro”, y el artículo 7 establece que: “ Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido, sino en los casos determinados por la ley y con las formalidades prescritas en ella. Los que soliciten, expidan, ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias, deben ser castigados...”³³. Por su parte, Crhistini FAURE, citado por Jaime Víctor BARTRA ZELADA, refiriéndose al artículo 4, señala: “Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre, no

³¹ BARTRA ZELADA, Jaime Víctor. Ob. Cit. pág. 36.

³² GARCIA BELAUNDE, Domingo. Ob. Cit. pág. 19.

³³ GARCIA BELAUNDE, Domingo. Ob. Cit. pág.19.

tiene más límites que aquellos que aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de los mismos derechos. Estos límites no pueden ser determinados sino por la Ley³⁴.

El texto de esta declaración, sin variante alguna, fue luego colocado a la cabeza de la Constitución de 3 de setiembre de 1791. Los avatares políticos de aquel entonces llevaron a la promulgación de otros textos constitucionales y en consecuencia a otras declaraciones. En efecto, fue aprobada una nueva Declaración por la Convención Nacional el 23 de junio de 1793 y puesto al frente de la Constitución del 24 de ese mismo mes y año. Esta Declaración no llegó nunca a estar en vigor, aunque en algunos puntos es más elaborada que su antecesora. Así vemos que en su artículo 2 señala que los derechos del hombre son “la igualdad, la libertad, la seguridad y la propiedad”. El artículo 10 y 11 protegen al ciudadano del arresto indebido y calificaba de arbitrario y tiránico todo aquel acto ejecutado contra un hombre fuera de las formalidades debidas, previéndose en su artículo 12 sanciones para los culpables³⁵.

La importancia de la Revolución Francesa es enorme en la lucha por la libertad, no solamente fue una lucha para el cambio de poder, sino que fue por la consolidación de los derechos fundamentales de la persona, las mismas que se positivizaron en normas jurídicas. El pueblo francés con su sangre dio al futuro la necesidad de consolidar de que todos los hombres deben gozar de los bienes de la tierra. Si bien la revolución Francesa fue precedida por la Emancipación Norteamericana, Carlos Sánchez Viamonte, citado por Jaime Javier Zelada Bartra, afirma: “La Revolución de Norteamérica fue creadora y constructiva; la Revolución Francesa fue destructora y creadora al mismo tiempo³⁶”.

³⁴ BARTRA ZELADA, Jaime Víctor. Ob. Cit. pág. 37.

³⁵ GARCIA BELAUNDE, Domingo. Ob. Cit. pág. 19.

³⁶ BARTRA ZELADA, Jaime Víctor. Ob. Cit. pág. 35.

2.2.7. AMÉRICA LATINA.

América Latina ha sido un campo fecundo para el desarrollo de Hábeas Corpus, a excepción de México, donde se ha desarrollado con gran amplitud el juicio de amparo. Sus antecedentes deben tenerse como referencia en forma directa en las leyes constitucionales de Inglaterra, y quizá subsidiariamente en la Constitución de los Estados Unidos³⁷.

El primer país que introdujo el Habeas Corpus en su ordenamiento jurídico fue Brasil en su Código Penal de 1830 (artículos 183-184) y más concretamente con el Código de Procedimientos Penales de 1832: *“Todo cidadão, que entender que éle ouautrem sofre prisáo ou constringimento ilegal em sus liberdade tem direitto de pedir ordem de Habeas Corpus em seu favor”* (artículo 340)³⁸.

En un principio, estas provisiones legales fueron tomadas directamente de las leyes inglesas. Posteriormente y mediante ley 2073 en 1871, el Habeas Corpus fue ampliado, lo que sucedió en diversas oportunidades hasta ser incorporado en la primera Constitución de la República de 1891 (artículo 72 y 22) y en forma tan amplía, que rebasó los límites corporales de su progenitor inglés. Por la redacción tan ambigua de su texto, el Hábeas Corpus fue utilizado para la defensa de una multitud de hechos incluso para cuestionar la constitucionalidad de las leyes. Este abuso del instituto fue agravado por una serie de decisiones judiciales, que interpretando el artículo 72 de la Constitución de 1891 ampararon incluso a mujeres que querían contraer matrimonio con la oposición de sus padres. En 1919 una ejecutoria de la Corte Suprema, llegó a establecer que el Hábeas Corpus era un medio de defender cualquier derecho “cierto, líquido e incontestable”³⁹.

³⁷ GARCIA BELAUNDE, Domingo. Ob. Cit. pág. 20.

³⁸ GARCIA BELAUNDE, Domingo. Ob. Cit. pág. 21.

³⁹ GARCIA BELAUNDE, Domingo. Ob. Cit. pág. 21.

En otros países, el Hábeas Corpus fue adoptado más o menos por la misma época o en tiempos más recientes. El Hábeas Corpus aparece ipso nomine en las constituciones de Costa Rica (1847), El Salvador (1872), Guatemala (1879), Puerto Rico (1899), Honduras (1894), Panamá (1904), Uruguay (1918), Chile (1925), Ecuador (1929), Bolivia (1938), Nicaragua (1939), República Dominicana, Cuba y Paraguay (1940), Venezuela (1947), etc. Aunque en algunos países como en Guatemala, el Hábeas Corpus aparece con anterioridad en la legislación ordinaria (Decreto de 5 de diciembre de 1839 y Código de Livingston). En algunos países, como la Argentina, el Hábeas Corpus está contemplado en sus Códigos (1889) y en sus constituciones provinciales más no en la Constitución nacional de 1853. En el Perú el Hábeas Corpus nace primero en la ley (1897) y sólo posteriormente halla acogida en el texto constitucional de 1920⁴⁰.

2.3. EL HÁBEAS CORPUS EN LA LEGISLACIÓN PERUANA.

2.3.1. Evolución legislativa.

En Perú, como Estado, el sentido del Hábeas Corpus ha estado presente desde que nace la República, en el Estatuto Provisorio de San Martín el 8 de octubre de 1821, pues se advierte en la Octava Sección, artículo 1º, lo siguiente: "Todo ciudadano tiene igual derecho a conservar y defender su honor, su libertad, su seguridad, su propiedad y su existencia y no podrá ser privado de ninguno de estos derechos, sino por el pronunciamiento de la autoridad competente, dado conforme a las leyes. El que fuese defraudado en ellos injustamente, podrá reclamar ante el

⁴⁰ FIX ZAMUDIO, Héctor. La Protección Procesal de las Garantías Individuales en América Latina. En Revista de la Comisión Internacional Juristas N° 2. Diciembre de 1968. págs. 69-111.

Gobierno de esta infracción, y publicar libremente por la imprenta el procedimiento que dé lugar a su queja”⁴¹.

El Reglamento Provisorio promulgado el 15 de Octubre de 1822 por José de La Mar prescribía en su artículo 5º: "Sólo podrá mandar arrestar o poner preso a alguna persona e individuo, cuando lo exija la salud pública pero certificada la prisión remitirá al reo con su causa a disposición del juzgado o tribunal correspondiente dentro del término de 24 horas".

Según el maestro Domingo García Belaunde, la evolución legislativa del Hábeas Corpus en el Perú, atraviesa dos periodos: **a)** desde 1897 a 1920, que marca su nacimiento y se aplica en la defensa de la libertad corporal, y **b)** de 1920 a 1979, que incluye a su vez dos sub-periodos, **i)** de 1920 a 1933, en que hace su ingreso por vez primera a un texto constitucional, aunque por las circunstancias políticas de aquel entonces no llega prácticamente a funcionar, y **ii)** de 1933 a 1979, año en que escribe su obra. El Hábeas Corpus en Perú⁴²; a lo que se agrega, que surge un tercer periodo, **c)** que comprende desde la Ley N° 23506 - Ley de Hábeas Corpus y Amparo, la Constitución Política del Perú de 1979, y un cuarto periodo **d)** desde la Constitución Política del Perú de 1993, la Ley 28237- Código Procesal Constitucional al presente.

Seguidamente, se pasa a detallar cada uno de los periodos indicados de la manera siguiente:

2.3.2. LA LEY DE 1897.

Domingo García Belaunde en su obra “El Hábeas Corpus en el Perú” señala que el Perú adopta el Hábeas Corpus mediante **Ley de 21 de octubre de 1897**, como resultado de un anteproyecto de ley presentado en la

⁴¹ <http://www4.congreso.gob.pe/historico/quipu/constitu/1821b.htm>

⁴² GARCIA BELAUNDE, Domingo. Ob. Cit. pág.23.

Cámara de Diputados en la sesión del martes 11 de octubre de 1892, bajo la presidencia de H. Señor Arenas, por Mariano Nicolás Valcárcel, Teodomiro A. Gadea y Mariano H. Cornejo. Eran los días del gobierno del Coronel Remigio Morales – Bermúdez (1890-1894) fallecido poco antes de concluir su período. El proyecto tenía 20 artículos y buscaba reglamentar el artículo 18 de la Constitución de 1860 entonces vigente, que decía:

“Nadie podrá ser arrestado sin mandamiento escrito de juez competente, o de las autoridades encargadas de conservar el orden público, excepto "infraganti" delito; debiendo, en todo caso, ser puesto el arrestado, dentro de veinticuatro horas, a disposición del juzgado que corresponda. Los ejecutores de dicho mandamiento están obligados a dar copia de él, siempre que se les pidiere”⁴³.

Esta ley matriz, regula por primera vez el Hábeas Corpus y que se constituye para la tutela exclusiva de la libertad individual⁴⁴. Su finalidad era hacer efectiva: “la libertad personal consignada en el artículo 18 de la Constitución de 1960”. Este principio es prácticamente una invariante en todo el proceso de nuestro constitucionalismo, pues se repite en todas nuestras Cartas Políticas⁴⁵.

2.3.3. LAS LEYES DE 1916.

La **Ley N° 2223**, conocida como la Ley de “Liquidaciones de Prisiones Preventivas”, promulgada el **10 de febrero de 1916**, por el gobierno de José Pardo, que trató sobre la libertad provisional en los procesos penales, y que estableció en su artículo siete lo siguiente:

“Todas las garantías contenidas en el Título IV de la Constitución del Estado, darán lugar a recursos destinados a amparar a los habitantes

⁴³ GARCIA BELAUNDE, Domingo. Ob. Cit. pág.24.

⁴⁴ ETO CRUZ, Gerardo. Régimen legal del Hábeas Corpus y Amparo. Revista Jurídica Cajamarca, en [http:// www.derechoycambiosocial.com/RJC/REVISTA4/amparo.htm](http://www.derechoycambiosocial.com/RJC/REVISTA4/amparo.htm). pág.8

⁴⁵ ETO CRUZ, Gerardo, Ob. Cit. pág.8

de la República que fueren amenazados en el goce de sus libertades o a hacer cesar las restricciones indebidas impuestas por cualquier autoridad. Son aplicables a estos recursos las disposiciones de la Ley de Hábeas Corpus en cuanto a las autoridades que deban conocer de ellos, a las personas que puedan presentarlos y a las reglas de su tramitación⁴⁶.

En rigor, es la segunda Ley que amplía el Hábeas Corpus para la defensa de las "*Garantías Individuales*" normadas en la Constitución de 1860, vigente en ese entonces⁴⁷.

La **Ley N° 2253**, promulgada el **26 de setiembre de 1916**, la cual en mérito a la experiencia anterior (Ley de Habeas Corpus de 1897) trata de perfeccionar los aspectos procesales del régimen de Hábeas Corpus expuestos en su Ley primigenia de 1897. Innovación interesante es el artículo 3 que dice que el procedimiento de Hábeas Corpus "es aplicable a los jueces de cualquier fuero que se hagan responsables de la detención indebida"⁴⁸.

2.3.4. CONSTITUCIÓN DE 1920

Gerardo Eto Cruz señala que la Constitución para la República del Perú, dictada por la Asamblea Nacional de 1919 y promulgada el 18 de enero de 1920, bajo la presidencia de Augusto Bernardino Leguía, establece en su artículo 24:

"Nadie podrá ser arrestado sin mandamiento escrito de Juez competente o de las autoridades encargadas de conservar el orden público, excepto infraganti delito, debiendo en todo caso ser puesto, el arrestado, dentro de veinticuatro horas, a disposición del Juzgado que corresponda. Los ejecutores de dicho mandamiento están

⁴⁶ GARCIA BELAUNDE, Domingo. Ob. Cit. pág.30.

⁴⁷ ETO CRUZ, Gerardo, Ob. Cit. pág.8

⁴⁸ GARCIA BELAUNDE, Domingo. Ob. Cit. pág.31.

obligados a dar copia de él siempre que se les pidiere. La persona aprehendida o cualquiera otra podrá interponer conforme a la ley el recurso de Hábeas Corpus por prisión indebida”.

Esta Constitución, marca un hito en la evolución histórica del Hábeas Corpus peruano, porque se incorpora por primera vez a rango constitucional – la novena Carta Política del Perú - afirmándose nuevamente el radio de acción como remedio de la libertad individual⁴⁹.

2.3.5. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA CRIMINAL DE 1920.

Código de Procedimientos en Materia Criminal, de 1920, regula por primera vez el aspecto procesal de Hábeas Corpus, en sus artículos 342 a 355. En sus lineamientos generales, el Código sigue las pautas trazadas por la Ley de 1897.

El artículo 342 decía que “toda persona residente en el Perú, reducida a prisión, si han transcurrido 24 horas sin que un Juez Instructor del fuero común lo haya comenzado a tomar la declaración instructiva, tiene expedito el recurso extraordinario de Hábeas Corpus, independientemente de los procedimientos que franquea el Código dentro de la instrucción”.

El artículo 343 señalaba que “el recurso se presentará ya sea ante el Juez de Primera Instancia de la provincia o ante el Tribunal Correccional, siempre que la detención se atribuya a una autoridad que no sea Juez”.

El artículo 344 agregaba que “el recurso podrá ser presentado por el arrestado, por sus parientes o por cualquier otra persona, sin necesidad de poder, indicando no estar en determinadas situaciones (no ser reo rematado, no estar sujeto o instrucción alguna, no ser desertor, etc.)”.

⁴⁹ ETO CRUZ, Gerardo. Ob. Cit. pág. 8.

El artículo 346 agrega que “el custodio de la prisión que se negase a dar ingreso al Juez o a cumplir la orden de libertad decretada por éste. Será enviado directamente a la cárcel como culpable del delito de secuestro”.

El artículo 349 contempla “el caso de detención emanada de autoridad política”. El artículo 352 dice así: “Cuando el secuestro provenga de persona que no es autoridad, el Juez, una vez puesto en libertad el detenido procederá a cubrir instrucción contra el culpable conforme a este Código”.

En este Código, como lo ha puntualizado Domingo García Belaunde⁵⁰, se establecen particulares características: considera al Hábeas Corpus como un recurso; defiende únicamente la libertad corporal en sus diversas modalidades; establece que la detención indebida puede provenir de autoridades policiales o judiciales y de particulares; asimismo incorpora dos aspectos no tratados en la anterior legislación: Primero que procede el Hábeas Corpus para las personas - sean nacionales o extranjeras - a quienes se les ha notificado la orden de abandonar el territorio nacional, o cuando el accionante teme ser expatriado o confinado por la fuerza; y segundo procede también contra la colocación de las guardias puestas a domicilio⁵¹.

2.3.6. LA CONSTITUCIÓN DE 1933.

Domingo García Belaunde refiere que, la Carta de 1933, tiene dos antecedentes: el anteproyecto elaborado por la Comisión Villarán y los debates del Congreso Constituyente. En su Exposición de Motivos, Villarán hizo una somera exposición histórica del Instituto recordando la Ley N° 2223, señalando que “nuestro proyecto convierte estas liberales prescripciones en precepto constitucional”. En efecto, el artículo 185 del anteproyecto establecía que “todos las garantías otorgadas por la Constitución darán lugar al recurso de Hábeas Corpus destinado a amparar a los habitantes de la República que fueren amenazados en el goce de

⁵⁰ GARCIA BELAUNDE, Domingo. Ob. Cit. pág. 34-35.

⁵¹ ETO CRUZ, Gerardo. Ob. Cit. pág. 9.

sus libertades”. El anteproyecto consignaba en un solo rubro, bajo el título de “Derechos y Deberes Fundamentales” las diversas garantías que se conocen bajo el nombre de individuales y sociales. Este proyecto no fue observado ni respetado por el Congreso. Sin embargo, Basadre ha señalado que el anteproyecto “será siempre con su hermosa Exposición de Motivos un documento importante para la historia de las ideas políticas y sociales en el Perú, aunque los autores (de la Constitución) pretendieron injustamente desdeñarlo”⁵².

El proyecto relativo a las garantías individuales fue preparado por una Comisión integrada por P.A. del Solar, Alfredo Herrera, M. Jesús Gamarra, G. Chirinos Pacheco y V.M. Arévalo. El Dictamen, que en parte reemplaza a los actos de las Comisiones, empezaba señalando que los derechos individuales han sido considerados siguiendo en lo posible la tradición constitucional del Perú. Establecía el derecho a la seguridad personal instituyendo la acción (así la llamaron) del Hábeas Corpus como acción y no como recurso procesal. La acción de Hábeas Corpus garantiza sólo los derechos de la persona, no su patrimonio”. Agregaba que se hacía extensivo el uso del Hábeas Corpus a todas las garantías individuales, citando entre los antecedentes la Ley de Liquidación de Prisiones Preventivas de 1916. El artículo 13 del proyecto preparado por la Comisión señalaba que “todos los derechos individuales reconocidos por la Constitución dan lugar a la acción de Hábeas Corpus”⁵³.

Según el texto aprobado, las garantías individuales abarcaban los artículos 55 a 68, debiendo excluirse de ellas el artículo 69 que regulaba el Hábeas Corpus y el artículo 70 que trata de la suspensión de garantías. Las nacionales y sociales aparecen confundidas en un solo Título en los artículos 8 a 54. No obstante, si analizamos lo que aquí se llama garantías nacionales, podemos apreciar que en rigor son lo que comúnmente se conoce como Declaraciones (o normas programáticas) es decir, enunciados de carácter general que tratan sobre diversos aspectos de la política del

⁵² GARCIA BELAUNDE, Domingo. Ob. Cit. pág.36.

⁵³ GARCIA BELAUNDE, Domingo. Ob. Cit. pág. 37.

Estado. Un criterio diferenciador de ambas y que puede ser útil, es considerar paralelamente lo establecido en la Constitución de 1920⁵⁴.

Al respecto, Domingo García Belaunde, en su obra ya citada, sistematiza algunas observaciones sobre este tema:

- a) No existe una clara diferencia entre las garantías, ya que se mezclan las nacionales con las sociales, las sociales con las individuales y viceversa.
- b) Se insertan en los títulos de garantías algunos preceptos que son principios jurídicos o políticos y que no deberían consignarse como tales; teniendo en cuenta que ellas ni siquiera pueden defenderse mediante el Hábeas Corpus, aunque a veces la jurisprudencia, al no distinguir entre ambas (nacionales y sociales) ha terminado por defender algunas garantías nacionales.
- c) Una gran mayoría de las garantías proclamadas remiten a una ley para su debida reglamentación. Al no existir gran parte de esas leyes previstas por el Constituyente, su cumplimiento ha quedado prácticamente a la buena voluntad de los gobernantes, quienes muchas veces han procedido a su reglamentación por simple decreto o resolución suprema.

Por su parte Gerardo Eto Cruz, señala que la Constitución de 1933, representa un cambio notable, pues amplía el radio de acción del Hábeas Corpus no sólo a la libertad individual, sino también a los demás "*derechos sociales*". Dentro de este marco constitucional se establecen otras leyes que desarrollan a la institución⁵⁵.

2.3.7. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DE 1940.

El Código de Procedimientos en Materia Criminal de 1920, fue reemplazado con el Código de Procedimientos Penales. Este Código dedicó al

⁵⁴ GARCIA BELAUNDE, Domingo. Ob. Cit. pág. 37.

⁵⁵ ETO CRUZ, Gerardo, Ob. Cit. pág.9.

Recurso Extraordinario de Hábeas Corpus en sus artículos 349 a 360. Establecía que el Hábeas Corpus procede a favor de cualquier persona en los siguientes casos⁵⁶:

- a) Ser sometido a prisión por más de 24 horas sin que el Juez competentes le hay comenzado a tomar la declaración instructiva (artículo 349);
- b) Cuando se pone custodia policial en el domicilio de una persona (artículo 359);
- c) Cuando se violen los derechos individuales o sociales protegidos por la Constitución (artículo 349, in fine).

El artículo 352 señala que el Juez que reciba el recurso de Hábeas Corpus se constituirá inmediatamente en el lugar en que halla el detenido y si se entera de que no se le sigue ninguna instrucción por Juez competente y de que son ciertas las afirmaciones del recurso, lo pondrá inmediatamente en libertad dando cuenta al Tribunal del que dependa⁵⁷.

El Código de Procedimientos Penales de 1940, cuerpo normativo que mantiene casi el mismo temperamento de la legislación anterior (artículos 349 a 360), establece la procedencia del Hábeas Corpus bajo las siguientes hipótesis; cuando el agraviado es sometido a prisión por más de 24 horas sin que el Juez competente le haya tomado su instructiva; cuando se pone guardias a domicilio, y cuando se violan los derechos individuales o sociales amparados por la Ley Fundamental⁵⁸.

Sin embargo, los artículos 349 a 360 del Código de Procedimientos Penales de 1940, fueron derogados por el Art. 45 de la Ley 23506- Ley de Hábeas Corpus y Amparo, que también fue derogado por la Ley N° 28237 – Código Procesal Constitucional, que está vigente actualmente.

⁵⁶ GARCIA BELAUNDE, Domingo. Ob. Cit. pág. 40.

⁵⁷ GARCIA BELAUNDE, Domingo. Ob. Cit. pág. 41.

⁵⁸ ETO CRUZ, Gerardo, Ob. Cit. pág.9.

2.3.8. EL DECRETO LEY N° 17083.

El Decreto Ley N° 17083, de 24 de octubre de 1968, establece en su artículo 1º que la acción de Hábeas Corpus, referente a las garantías de libertad personal, inviolabilidad de domicilio y libertad de tránsito, se tramitarán de acuerdo a las disposiciones del Código de Procedimientos Penales y que el resto de las garantías se tramitarán de acuerdo a este Decreto Ley⁵⁹.

El Decreto Legislativo N° 17083, estableció dos vías procesales para tramitar el Hábeas Corpus⁶⁰:

- a) **vía penal**, para los casos de la libertad personal, inviolabilidad de domicilio y libertad de tránsito, tramitándose de acuerdo al Código de Procedimientos Penales; y
- b) **vía civil**, para garantizar los demás derechos sociales, tramitándose de acuerdo a las normas previstas por el Decreto Ley N° 17083, este Decreto Ley, es el antecedente más inmediato de lo que se conoció: "Acción de Amparo", y actualmente como "Proceso de Amparo".

Se debe destacar que hasta la dación de este Decreto Ley N° 17083, la tramitación de Hábeas Corpus, fue establecido en función de la libertad individual y no se adecuaba a la defensa de otras garantías distintas a la mera libertad corporal. Lo que fue superado parcialmente por el referido Decreto Ley⁶¹.

2.3.9. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1979.

La **Constitución para la República del Perú de 1979**, fue la carta magna de la República del Perú que fue redactada en las postrimerías del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas por la Asamblea

⁵⁹ GARCIA BELAUNDE, Domingo. Ob. Cit. pág. 44.

⁶⁰ GARCIA BELAUNDE, Domingo. Ob. Cit. pág. 45.

⁶¹ GARCIA BELAUNDE, Domingo. Ob. Cit. pág. 43.

Constituyente de 1978, convocada por el Cmte. Gral. Francisco Morales Bermúdez Cerruti, con el fin de facilitar el retorno de la Democracia, tras una década de gobierno militar.

Dicha Asamblea fue presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre, líder histórico del partido aprista. El texto constitucional fue sancionado y promulgado el 12 de julio de 1979, y entró en vigencia a partir del 28 de julio de 1980, con la inauguración del segundo gobierno constitucional del arquitecto Fernando Belaunde Terry. Estuvo vigente hasta 1992, cuando fue violentada por el gobierno de Alberto Kenya Fujimori Fujimori, quien luego de dar golpe de Estado el 05 de abril de 1992, dictó la Constitución de 1993, que actualmente, pese a su cuestionamiento se encuentra en vigor.

La Constitución Política del Perú de 1979, en su artículo 295, definió el Hábeas Corpus como: “La acción y omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual, da lugar a la acción de hábeas corpus”.

Que, como se advierte, limitaba la procedencia del hábeas corpus solo a la vulneración o amenaza de la libertad individual.

2.3.10. LEY Nº 23506 - LEY DE HÁBEAS CORPUS Y AMPARO.

La Ley Nº 23506 - Ley de Hábeas Corpus y Amparo, promulgado el 07 de diciembre de 1982, durante el segundo gobierno del Arq. Fernando Belaúnde Terry, que cuenta con diversas modificaciones, especialmente con motivo de la aprobación de la Constitución de 1993, tuvo una vigencia de más de veinte años, que ha coexistido con dos Constituciones de diverso signo, como la de 1979 y la vigente de 1993, hasta que fue derogado por la actual Ley Nº 28237- Código Procesal Constitucional.

El artículo 12 de la *Ley de Hábeas Corpus y Amparo, Ley Nº 23506*, señala que se vulnera o amenaza la libertad individual y en consecuencia

procede la acción de Hábeas Corpus, enunciativamente, en los siguientes casos:

- 1) Guardar reserva sobre sus convicciones políticas, religiosas, filosóficas o de cualquier otra índole.
- 2) De la libertad de conciencia y de creencia.
- 3) El de no ser violentado para obtener declaraciones.
- 4) El de no ser obligado a prestar juramento ni compelido a declarar o reconocer su culpabilidad en causa penal contra sí mismo, ni contra su cónyuge, ni sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
- 5) El de no ser exiliado o desterrado o confinado sino por sentencia firme.
- 6) El de no ser expatriado ni separado del lugar de su residencia sino por mandato judicial o por aplicación de la Ley de Extranjería.
- 7) El de no ser secuestrado.
- 8) El del extranjero a quien se ha concedido asilo político de no ser expulsado al país cuyo Gobierno lo persigue, o en ningún caso si peligrase su libertad o seguridad por el hecho de ser expulsado.
- 9) El de los nacionales o de los extranjeros residentes, de ingresar, transitar o salir del territorio nacional, salvo mandato judicial o aplicación de la Ley de Extranjería o de Sanidad.
- 10) El de no ser detenido sino por mandato escrito y motivado del Juez, o por las autoridades policiales en el caso de flagrante delito; o el de no ser puesto el detenido, dentro de las 24 horas o en el término de la distancia, a disposición del Juzgado.
- 11) El de no ser detenido por deudas, salvo los casos de obligaciones alimentarias.
- 12) El de no ser privado del pasaporte, dentro o fuera de la República.
- 13) El de no ser incomunicado, sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito y en la forma y por el tiempo previstos por la ley, de acuerdo con el acápite "i" del inciso 20) del artículo 2º de la Constitución.

- 14) El de ser asistido por un abogado defensor de su elección desde que es citado o detenido por la autoridad.
- 15) El de hacer retirar las guardias puestas a un domicilio o suspender el seguimiento policial cuando ello atente contra la libertad individual.
- 16) El de la excarcelación, en el caso de un detenido o procesado que haya sido amnistiado, indultado, sobreseído, absuelto o declarada prescrita la acción penal o la ejecución de la pena.
- 17) El de que se observe el trámite correspondiente cuando se trate del procedimiento o detención de las personas, a que se refiere el artículo 183º de la Constitución.

El Procedimiento del Hábeas Corpus, bajo esta Ley, se encontraba regulada en del artículo 13º al artículo 23º. Siendo de destacar que la acción de Hábeas Corpus, puede ejercer la persona perjudicada o cualquier otra en su nombre, en forma verbal o escrito, sin necesidad de poder, papel sellado, boleta de litigante, derecho de pago, firma del letrado o formalidad alguna.

2.3.11. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993

La **Constitución Política del Perú de 1993**, antecedida por otros 11 textos constitucionales, fue redactada a inicios del gobierno de Ing. Alberto Kenya Fujimori Fujimori, por el Congreso Constituyente Democrático (CCD) convocado por él mismo, tras la disolución del Congreso de la República con el autogolpe del 5 de abril de 1992, fue aprobada mediante el Referéndum del 31 de octubre de 1993, promulgado el 29 de diciembre y publicado el 30 de diciembre del mismo año, entrando en vigencia el 31 de diciembre de 1993.

La Constitución Política de 1993, alude al Hábeas Corpus en el Artículo 200º inciso 1), señalando: “La Acción de Hábeas Corpus, que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad,

funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos"⁶².

En este artículo se observa el concepto tradicional de “el Hábeas Corpus protege la libertad individual”, se ha añadido que “protege a los derechos conexos”, es decir, se amplía su ámbito de procedencia a los llamados derechos constitucionales conexos, que han de ser entendidos con lo que los textos constitucionales denominan seguridad personal⁶³.

La actual Carta Magna en su artículo 200, inc.1, amplía su ámbito de procedencia a los llamados derechos constitucionales conexos. En consonancia con esta regulación constitucional, el Código Procesal Constitucional contempla en el último párrafo del artículo 25 una forma especial de Hábeas Corpus, el llamado Hábeas Corpus Conexo, el cual procede precisamente para la defensa de los derechos constitucionales conexos a la libertad individual, especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio⁶⁴.

2.3.12. LEY Nº 28237 – CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL.

La Ley Nº 28237 - El Código Procesal Constitucional, publicado el 31 de Mayo del 2004, que tuvo un *vacatio legis* por seis meses, según la segunda Disposiciones Transitorias y Derogatorias, entrando en vigencia el 01 de diciembre de 2004.

⁶² GUTIERREZ CAMACHO, Walter. Constitución y Normas Básicas sobre Procesos Constitucionales. pág. 61.

⁶³ DIAZ ZEGARRA, Walter. Comentarios al Código Procesal Constitucional. pág. 214.

⁶⁴ GARCIA CAVERO, Percy. La Relación de Conexidad en el Hábeas Corpus Conexo. Temas Penales en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. pág. 124.

El artículo 25 del Código Procesal Constitucional, enumera en forma enunciativa los derechos que han de entenderse como cautelados por el Proceso de Hábeas Corpus⁶⁵, en caso de violación o amenaza, a saber:

- 1) La integridad personal, y el derecho a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes, ni violentado para obtener declaraciones.
- 2) El derecho a no ser obligado a prestar juramento ni compelido a declarar o reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
- 3) El derecho a no ser exiliado o desterrado o confinado sino por sentencia firme.
- 4) El derecho a no ser expatriado ni separado del lugar de residencia sino por mandato judicial o por aplicación de la Ley de Extranjería.
- 5) El derecho del extranjero, a quien se ha concedido asilo político, de no ser expulsado al país cuyo gobierno lo persigue, o en ningún caso si peligrase su libertad o seguridad por el hecho de ser expulsado.
- 6) El derecho de los nacionales o de los extranjeros residentes a ingresar, transitar o salir del territorio nacional, salvo mandato judicial o aplicación de la Ley de Extranjería o de Sanidad.
- 7) El derecho a no ser detenido sino por mandato escrito y motivado del Juez, o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito; o si ha sido detenido, a ser puesto dentro de las 24 horas o en el término de la distancia, a disposición del juzgado que corresponda, de acuerdo con el acápite “f” del inciso 24) del artículo 2 de la Constitución sin perjuicio de las excepciones que en él se consignan.

⁶⁵ Art.25 del Código Procesal Constitucional. Derechos Protegidos. Procede el hábeas corpus ante la acción u omisión que amenace o vulnere los siguientes derechos que, enunciativamente, conforman la libertad individual.

- 8) El derecho a decidir voluntariamente prestar el servicio militar, conforme a la ley de la materia.
- 9) El derecho a no ser detenido por deudas.
- 10) El derecho a no ser privado del documento nacional de identidad, así como de obtener el pasaporte o su renovación dentro o fuera de la República.
- 11) El derecho a no ser incomunicado sino en los casos establecidos por el literal “g” del inciso 24) del artículo 2º de la Constitución.
- 12) El derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido desde que se es citado o detenido por la autoridad policial u otra, sin excepción.
- 13) El derecho a retirar la vigilancia del domicilio y a suspender el seguimiento policial, cuando resulten arbitrarios o injustificados.
- 14) El derecho a la excarcelación de un procesado o condenado, cuya libertad haya sido declarada por el juez.
- 15) El derecho a que se observe el trámite correspondiente cuando se trate del procedimiento o detención de las personas, a que se refiere el artículo 99 de la Constitución⁶⁶.
- 16) El derecho a no ser objeto de una desaparición forzada.
- 17) El derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad, respecto de la forma y condiciones en que cumple el mandato de detención o la pena.

También procede el hábeas corpus en defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad individual, especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio⁶⁷.

⁶⁶ Presidente de la República, Congresistas, Ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Vocales de la Corte Suprema, Fiscales Supremos, Defensor del Pueblo, y Contralor General de la República, se dará cuenta inmediata a la Comisión Permanente del Congreso de la República para los fines consiguientes.

⁶⁷ Art. 25 in fine del Código Procesal Constitucional. En Gutiérrez Camacho, Walter. Ob. Cit. pág. 84.

2.4. MARCO CONCEPTUAL.

2.4.1. ETIMOLOGÍA.

La institución procesal de Hábeas Corpus deriva de dos voces latinas “Hábeas” que significa tener y “Corpus” que es cuerpo; conjugadas ambas palabras significaría tener corporalmente a una persona.⁶⁸; en la expresión latina significa: “traedme el cuerpo”⁶⁹.

2.4.2. DEFINICIÓN.

El Hábeas Corpus, es un proceso constitucional que procede contra todo acto u omisión de funcionario, autoridad o particular que vulnera o amenaza la libertad individual y los derechos íntimamente relacionados a ella, con excepción de aquellos tutelados por los procesos de amparo y hábeas data. En el nuevo Código Procesal Constitucional se le denomina “Proceso de Hábeas Corpus”, en contraposición a la denominación de “Acción de Hábeas Corpus de la Ley N° 23506”⁷⁰.

Para el doctor Domingo García Belaunde, el Hábeas Corpus es “una acción en garantía de la libertad personal frente al poder público, cuando éste le afecta en alguna forma y siempre que la afectación implique una ilegalidad”⁷¹.

Para Raúl Chanamé Orbe, el Hábeas Corpus es un instituto procesal de Derecho Público, por tener su origen y fundamento en la Constitución misma y estar destinado a la protección de las garantías conocidas en la

⁶⁸ DIAZ ZEGARRA, Walter, Ob. Cit. Pág. 210.

⁶⁹ VELASQUEZ RAMIREZ, Ricardo.

En:<http://blog.pucp.edu.pe/blog/ariojabermudez/2013/03/22/habeas-corpus/>

⁷⁰ CHANAMÉ ORBE, Raúl. Comentarios a la Constitución. pág. 557.

⁷¹ GARCÍA BELAUNDE, Domingo. Naturaleza Jurídica del habeas Corpus. pág. 268

doctrina como derechos públicos subjetivos. El Hábeas Corpus constituye así un remedio, o sea, un medio para restablecer algo⁷².

Walter Alfredo Díaz Zegarra, afirma que el Hábeas Corpus, si bien es cierto que “es un proceso constitucional que tiende a hacer respetar la libertad personal, que en su origen estaba dirigido contra los abusos de poder de autoridades; sin embargo, hoy en día los abusos no sólo provienen de autoridades sino también de particulares que ostentan algún tipo de poder”⁷³.

Víctor Julio Ortecho Villena, formula la siguiente definición: “El Hábeas Corpus, es una acción de garantía constitucional sumaria entablada ante el juez penal o ante la Sala Penal Superior, dirigida a restituir la libertad que ha sido vulnerada o amenazada, por actos u omisiones provenientes de autoridades, funcionarios o particulares”⁷⁴.

Para el profesor Arsenio Oré Guardia, el Hábeas Corpus puede ser entendido como derecho fundamental y como proceso. Dentro del primer concepto se hace referencia al derecho que tienen las personas para recurrir a un juez o tribunal competente para que sin demora se pronuncie sobre la legalidad de su detención y ordene su libertad si la detención fuera ilegal. Dentro del segundo al procedimiento establecido, de carácter sumario – sin demora, dice el artículo 7 inciso 6) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos – mediante el cual el juez competente tutela el derecho que protege el Hábeas Corpus”⁷⁵.

⁷² CHANAMÉ ORBE, Raúl. Ob. Cit. pág. 557.

⁷³ DIAZ ZEGARRA Walter, Ob. Cit. pág. 211.

⁷⁴ ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Jurisdicción y Procesos Constitucionales. Hábeas Corpus y Amparo. pág.117.

⁷⁵ ORE GUARDIA, Arsenio. El Proceso de Habeas Corpus. Instituto de Ciencia Procesal Penal. pág. 1.

<http://www.incipp.org.pe/media/uploads/doc/procesodehabeascorpusoreguardia.pdf>

El maestro German Bidart Campos señala: “El Hábeas Corpus es la garantía tradicional que, como acción, tutela la libertad física o corporal o de locomoción a través de un procedimiento judicial sumario (...). Al decir que el Hábeas Corpus protege la libertad física, queremos significar que es la garantía deparada contra actos que privan de esa libertad o la restringen sin causa o sin formas legales”⁷⁶.

El insigne jurista Segundo V. Linares Quintana, citado por Víctor Julio Ortecho Villena en su obra “Jurisdicción y Procesos Constitucionales”, define el Hábeas Corpus como “el remedio jurídico que tiene derecho a interponer ante juez competente por sí o por intermedio de otro, todo individuo que ha sido ilegal o arbitrariamente privado de su libertad constitucional, porque ha sido emitida por quien no es autoridad competente para que se examine su situación, y comprobado que su detención es arbitraria, se ordene su inmediata libertad”⁷⁷.

El profesor argentino Néstor Pedro Sagués, citado por Víctor Julio Ortecho Villena en su misma obra, señala que: “...lo cierto es que resulta el instrumental más elemental y contundente para asegurar la libertad personal contra los abusos del poder” y continúa diciendo: “Las excelencias del hábeas Corpus - por algo ciertamente es tanpreciado – derivan del bien jurídico que sustancialmente tutela, esto es, la libertad ambulatoria. Sin ésta – extinguida o restringida- poco puede hacer el hombre. El Hábeas Corpus, en otras palabras es una suerte de garantía fundante, en el sentido que posibilita, merced a la obtención a la libertad corporal, la práctica de las restantes libertades humanas. De allí que sea la herramienta básica de todo habitante y el mecanismo jurídico más odiado por el despotismo”⁷⁸.

Según la Constitución Política del Perú de 1993, artículo 200º, inciso 1. El Hábeas Corpus, es la garantía constitucional que procede contra el hecho

⁷⁶ BIDART CAMPOS, Germán: Manual de Derecho Constitucional Argentino. pág. 413.

⁷⁷ ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Ob. Cit. pág. 118.

⁷⁸ ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Ob. Cit. pág. 118.

u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera la libertad individual a los derechos constitucionales conexos⁷⁹.

Según el Código Procesal Constitucional, artículo 25° - concepción amplia.- Es el proceso constitucional que tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales de la libertad. Se advierte, no obstante, que el proceso de Hábeas Corpus no sólo protege la libertad física propiamente dicha, sino que su ámbito de protección se extiende también a la libertad de movimiento, de tránsito, a la integridad personal, el derecho a la identidad, a la inviolabilidad de domicilio entre otros. Ha establecido una serie de supuestos que protegen la libertad personal a través del Hábeas Corpus⁸⁰.

El Tribunal Constitucional del Perú, citando a Luis Alberto Huerta Guerrero-Libertad Personal y Hábeas Corpus. Lima: Comisión Andina de Juristas, 2003, pág. 47- señala que el Hábeas Corpus, “es una institución cuyo objetivo consiste en proteger la libertad personal, independientemente de la denominación que recibe el hecho cuestionado (detención, arresto, prisión, secuestro, desaparición forzada, etc.) De acuerdo a la Constitución de 1993, procede contra cualquier autoridad, funcionario o persona, por cualquier acción u omisión que implique una amenaza o violación de la libertad personal. Dicha acción de garantía es básicamente un proceso de resguardo y tutela de la libertad personal en sentido lato. En puridad representa la defensa de aquello que los antiguos romanos denominaban *ius movendi et ambulandi* o los anglosajones consignaban como *power of locomotion*⁸¹.

⁷⁹ GUTIERREZ CAMACHO, Walter. Ob. Cit. pág. 61.

⁸⁰ SANCHEZ DIAZ, Jhon. El Hábeas Corpus frente a Resoluciones Judiciales. En <http://es.slideshare.net/budata/tesis-de-derecho>

⁸¹ STC. Exp. N° EXP. N.° 2663-2003-HC/TC.FJ.5.

2.4.2.1. CONCEPCIÓN RESTRINGIDA DE SU ÁMBITO DE PROTECCIÓN.

Desde una concepción restringida, el Hábeas Corpus se entiende vinculado únicamente, a la protección del derecho fundamental a la libertad y a un núcleo duro de los derechos fundamentales que se concentran en torno a dicho derecho, tales como el derecho a la seguridad (art. 2, inciso 24, de la Constitución), a la libertad de tránsito-*ius movendi e ius ambulando*- (art. 2, inc. 11, de la Constitución) y a la integridad personal (art. 2, inc. 24, literal h) de la Constitución), (Exp. N° 09057-2005-HC. 03/03/06, S1, Fj. 1)⁸².

2.4.2.2. CONCEPCIÓN AMPLIA DE SU ÁMBITO DE PROTECCIÓN.

Desde una interpretación constitucional del principio *in dubio prohomine* (art. V del T.P del Código Procesal Constitucional), se debe acoger una concepción amplia del proceso constitucional de Hábeas Corpus. En consecuencia, no es razonable establecer, a priori y en abstracto, un número clausus de derechos fundamentales conexos de libertad personal a efecto de su tutela, ni tampoco excluirlos a efectos de su protección. Esto porque, muchas veces, la vulneración del derecho a la libertad personal implica la vulneración de otros derechos distinto a los que se vincula, tales como el derecho a la vida (art. 2, inc. 1, de la Constitución), el derecho de residencia (art.2, inc.11, de la Constitución), el derecho a la libertad de comunicación (art. 2, inc. 4, de la Constitución) e, inclusive, el derecho al debido proceso sustantivo y adjetivo (art. 139, inc. 3 de la Constitución), (Exp. N° 09057-2005-HC.03/03/06. Fj.2)⁸³.

2.4.3.- FINALIDAD.

La acción de Hábeas Corpus protege la libertad individual o derechos conexos (libertad personal, física y ambulatoria) su objeto o finalidad última es

⁸² CHANAMÉ ORBE, Raúl. Ob. Cit. pág.563.

⁸³ CHANAMÉ ORBE, Raúl. Ob. Cit. pág.563.

reponer las cosas al Estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional⁸⁴.

Víctor Julio Ortecho Villena, afirma que el fin inmediato que persigue la acción de Hábeas Corpus, es el restablecimiento de la libertad personal vulnerada o amenazada. Esto significa regresar a la situación anterior en que se encontraba el sujeto, en uso de su libertad.

Este propósito resulta perfectamente claro, tratándose de la libertad corporal, frente a un arresto, pero resulta un tanto impreciso, pero no por eso menos efectivo, cuando se trata de otros aspectos de la libertad personal, como por ejemplo, en la omisión de otorgar un pasaporte o el de ser asistido por un abogado, en caso de encontrarse detenido ilegalmente o en el caso de incumplimiento de una excarcelación ya ordenada⁸⁵.

Iván Noguera Ramos, señala que el Hábeas Corpus persigue dos finalidades: una Inmediata, es decir reponer el derecho violado o vulnerado y, la segunda: Mediata que es sancionar penalmente a los responsables⁸⁶.

Raúl Chanamé Orbe, señala que la finalidad del Hábeas Corpus es detener la violación de un derecho constitucional o impedir que la amenaza de violación del mismo se cometa (libertad personal y conexos). El Hábeas Corpus no consiste en determinar la responsabilidad penal de la persona a favor de quien se interpone, por medio de este proceso sólo se verifica si existe amenaza o afectación a la libertad individual y, en caso que esta se verifique, ordenar se repongan las cosas al estado anterior de la violación o amenaza de violación⁸⁷.

⁸⁴ DIAZ ZEGARRA, Walter, Ob. Cit. Pág. 211.

⁸⁵ ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Ob. Cit. pág.119.

⁸⁶ NOGUERA RAMOS, Iván. Detención y Libertades en el Proceso Penal Peruano. pág. 153.

⁸⁷ CHANAMÉ ORBE, Raúl. Ob. Cit.pág. 558

En conclusión, la finalidad principal del Hábeas Corpus es el restablecimiento de la libertad personal vulnerada o amenazada; es decir, volver al estado anterior a la privación de la libertad de la persona.

2.4.4. CARACTERÍSTICAS.

Así como el proceso de Hábeas Corpus persigue una finalidad como garantía constitucional que protege la libertad de las arbitrariedades del poder, ésta se compone de características importantes que parten de su propia naturaleza y aquellas que le atribuye la legislación procesal constitucional a modo de reglas de aplicación⁸⁸.

2.4.4.1. Sumariedad.

Su tramitación es muy breve o sumamente breve y abarca todo cuanto se trata de aplicar para el caso de restablecer la libertad ambulatoria, frente a una detención arbitraria. Es decir, goza de un procedimiento rápido, fulminante, inmediato, bajo responsabilidad⁸⁹.

El carácter sumario de este procedimiento exige la preferencialidad por parte de los jueces; cuando los accionantes recurren en uso del Hábeas Corpus, se prohíbe toda clase de articulaciones que entorpecen el desenvolvimiento de la acción⁹⁰.

2.4.4.2. Subsidiaridad.

Debido a que si no existe recurso alguno o si se agotó todo recurso en defensa de la libertad personal vulnerada, el Hábeas Corpus se convierte en el único instrumento de defensa de esta libertad constreñida por una

⁸⁸ CHANAMÉ ORBE, Raúl. Ob. Cit. pág. 558.

⁸⁹ CHANAMÉ ORBE, Raúl. Ob. Cit.pág. 558

⁹⁰ ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Ob. Cit. pág.120.

resolución que a decir de César Landa, no se ajusta al derecho constitucional⁹¹.

2.4.4.3. Informalidad.

A través de Hábeas Corpus, se debe determinar si existió o no la violación al derecho a la libertad y por ser este procedimiento sumario, debe ser lo menos complejo posible, pues en juego está la libertad de un procesado o denunciado. Inclusive, en este tipo de procedimientos, la acción se puede presentar verbalmente ante el juez penal⁹².

2.4.5. NATURALEZA JURÍDICA.

En la Enciclopedia Jurídica Omeba, se menciona que naturaleza jurídica a veces se designa el conjunto de rasgos que permiten identificar la institución de que se trata, distinguiéndola de las demás de una manera fácil y rápida (...). Otras veces, indica aquellos rasgos que son necesarios y suficientes para comprender la presencia de los demás y explicar el comportamiento de la institución; su correlato lógico es la definición propiamente dicha (...). La naturaleza jurídica de una institución no se refiere, pues, a la institución efectiva, sino a la construida por regulación jurídica, abstrayendo ciertos rasgos a partir de aquella⁹³.

El maestro Domingo García Belaunde, señala que el Hábeas Corpus es un instituto de Derecho Público y Procesal, por tener origen y fundamento en la Constitución misma y estar destinado a la protección de las garantías conocidas en la doctrina como derechos públicos subjetivos.

⁹¹ CHANAMÉ ORBE, Raúl. Ob. Cit. pág. 558.

⁹² CHANAMÉ ORBE, Raúl. Ob. Cit. pág. 558.

⁹³ Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo XX. pág. 68.

El Hábeas Corpus constituye un remedio, es decir, medio para restablecer algo⁹⁴.

Para el Juez Superior de Lima Norte, Dr. Walter Alfredo Díaz Zegarra, la naturaleza jurídica del Hábeas Corpus es la de un proceso, mediante el cual se protege la libertad individual y corporal de la persona, proceso que tiene sus principios en la Constitución Política y en el Derecho Procesal Constitucional. Y considera que el término proceso es más completo, que acción, recurso o juicio⁹⁵.

2.4.6. TIPOS DE HÁBEAS CORPUS.

Walter Díaz Zegarra, señala que, la doctrina ha elaborado una tipología de los diferentes Hábeas Corpus que pueden presentarse, claro está que todos ellos se encuentran dirigidos a controlar el respeto a la vida e integridad de la persona⁹⁶.

A decir de Díaz Zegarra, al tratar el tema de Hábeas Corpus, necesariamente debemos de tener en cuenta a los efectos, pues el mismo puede ser reparador cuando ataca la violación ya consumada, en cambio, es preventivo si se pretende evitar la violación o agresión (amenaza)⁹⁷.

El profesor Raúl Chanamé, considera a las distintas variantes de Hábeas Corpus (tipos) como clases, así señala que: “El Proceso de Hábeas Corpus no se reduce solamente a restituir la libertad individual, sino que tiene un alcance mucho mayor en el Derecho Constitucional y en Derecho Procesal Constitucional; es así que, contiene distintas variantes que podemos clasificarlas de la siguiente manera. La clasificación realizada es extraída de la Cátedra de fecha 30 de Octubre de 2003, dictada por Luis Sáenz Dávalos como parte del Diplomado en Derecho Procesal Constitucional

⁹⁴ GARCIA BELAUNDE, Domingo. Hábeas Corpus en el Perú. Ob. Cit. pág. 105.

⁹⁵ DIAZ ZEGARRA, Walter. Ob. Cit. pág.210.

⁹⁶ DIAZ ZEGARRA, Walter, Ob. Cit. pág. 212.

⁹⁷ DIAZ ZEGARRA, Walter, Ob. Cit. pág. 212.

llevado a cabo en la Universidad Particular San Martín de Porres⁹⁸. En mi concepto, el diseño de tipologías es lo más adecuado por ser de mayor uso en la doctrina, así tenemos:

A. Hábeas Corpus Reparador.

Conocido como Hábeas Corpus principal, **clásico** o tradicional, se presenta cuando la privación de la libertad física es arbitraria, ya sea que provenga por mandato judicial expedida por los jueces en general; orden policial, omisión en dar libertad a un sentenciado que cumplió su pena o disponer sin las formalidades de ley el internamiento en centro psiquiátrico de una persona. Este es el tradicional hábeas corpus que se conoce, el mismo que procederá cuando la detención no se ha producido en estado de flagrancia⁹⁹.

Raúl Chanamé Orbe señala: “Se dirige contra detenciones calificadas de arbitrarias y se da bajo tres supuestos: Primero: Las producidas fuera de los supuestos del Mandato Judicial (escrito y motivado) o de flagrante delito, o también de la llamada “cuasi flagrancia”. Segundo: La que pese a producirse dentro del Mandato Judicial o flagrante delito se prolonguen por encima de las 24 horas más el término de la distancia en el caso de delitos comunes o de 15 días más el término de la distancia en el caso de delitos calificados, y Tercero: Las ordenadas por funcionarios distintos a los jueces o por jueces que carecen de competencia y las que se ejecutan por personas distintas a la policía”¹⁰⁰.

B. Hábeas Corpus Restringido.

Llamado también accesorio o limitado, cuando la libertad física o de locomoción es objeto de perturbaciones o incomodidades o molestias para

⁹⁸ CHANAMÉ ORBE, Raúl. Ob. Cit. pág. 559.

⁹⁹ DIAZ ZEGARRA Walter, Ob. Cit. pág. 212.

¹⁰⁰ CHANAMÉ ORBE, Raúl. Ob. Cit. pág. 559

su desarrollo normal, no para atender supuestos de detención arbitraria (o de su amenaza), lo cual constituye una limitación al desplazamiento. Es decir, no se aprecia privación de libertad, pero sí entorpecimiento. Como ejemplo podemos mencionar las rejas que se colocan en las calles, el seguimiento de personas para cobros, citaciones policiales dictadas injustamente, vigilancia domiciliaria injustificada, impedimento al ingreso de algún establecimiento público o privado, entre otros¹⁰¹.

C. Hábeas Corpus Correctivo.

Se postula a fin de suprimir las condiciones de maltrato o mejorar la situación de aquella persona cuya libertad está restringida, por ejemplo, cuando a través de este medio, los internos recluidos en establecimientos penitenciarios, centros de readaptación juvenil y centros de salud, pretenden mejorar su nivel de permanencia denunciando condiciones inhumanas¹⁰². Por ejemplo, en el caso de los internos, se actuaría para subsanar la agravación de las limitaciones legalmente impuestas.

D. Hábeas Corpus Preventivo.

Se presenta cuando existe amenaza cierta e inminente a la privación de la libertad individual. Debiendo meritarse conforme a los requisitos de probabilidad o certeza y de inminencia. César Landa señala que procede esta figura: “cuando se amenace de manera cierta y concreta la libertad personal, la libertad de tránsito o la integridad personal”¹⁰³. Asimismo, señala que “La amenaza real es un asunto de casuística, que debe valorar el juez, en base al principio constitucional de la presunción de inocencia, a la interpretación extensiva de la presunción de la defensa de la libertad y a la interpretación restrictiva de la limitación de la misma”¹⁰⁴.

¹⁰¹ DIAZ ZEGARRA Walter, Ob. Cit. pág. 212

¹⁰² CHANAMÉ ORBE, Raúl. Ob. Cit. pág. 559

¹⁰³ LANDA ARROYO, César. Teoría del Derecho Procesal Constitucional. Palestra Editores. Lima. 2004. Pág. 115.

¹⁰⁴ LANDA ARROYO, César. Ob. Cit. pág. 116.

El mismo que puede tener dos modalidades. El hábeas corpus principal que opera ante la amenaza de detención y el hábeas corpus restringido como el riesgo a sufrir restricciones menores como seguimiento¹⁰⁵.

E. Hábeas Corpus Traslativo.

También conocido como hábeas corpus de pronto Despacho¹⁰⁶, procede ante la demora en la tramitación de los procesos judiciales o a fin de excarcelar a quien se le mantiene indebidamente detenido no obstante haber cumplido su condena o haber transcurrido el plazo máximo de detención establecido en el artículo 137 del Código Procesal Penal¹⁰⁷ - D. Leg. 638 (27/04/1991), o el artículo 272 del Código Procesal Penal - D. Leg. 957 (29/07/2004), procede también contra otras violaciones al debido proceso.

F. Hábeas Corpus Instructivo.

Es utilizado cuando no sea posible ubicar el paradero de una persona detenida, con la finalidad de garantizar la libertad y la integridad personal, sino, también, asegurar el derecho a la vida. Tiene como objeto individualizar al presunto responsable para proceder a denunciarlo¹⁰⁸.

G. Hábeas Corpus Innovativo.

Permite tutelar residualmente el derecho reclamado, no obstante haberse convertido en aparentemente irreparable. Se trataría no precisamente de una reparación total, sino más bien de una de carácter parcial¹⁰⁹. En otras palabras, se insta la intervención de la judicatura para que no se repitan nuevos hechos que limiten al derecho de libertad física del

¹⁰⁵ DIAZ ZEGARRA Walter, Ob. Cit. pág. 213.

¹⁰⁶ DIAZ ZEGARRA Walter, Ob. Cit. pág. 213.

¹⁰⁷ CHANAME ORBE, Raúl. Ob. Cit. pág. 560.

¹⁰⁸ CHANAME ORBE, Raúl. Ob. Cit. pág. 560.

¹⁰⁹ CHANAME ORBE, Raúl. Ob. Cit. pág. 560.

justiciable, pese a que ya cesó la amenaza o la violación de la libertad personal que dio origen al Hábeas Corpus planteado.

H. Hábeas Corpus Conexo.

Cuando el derecho reclamado no guarda relación o conexión con la libertad física o de la locomoción. El artículo 25 del Código Procesal Constitucional, regula en su último párrafo el llamado hábeas corpus conexo. Establece que este tipo de hábeas corpus procede en defensa de los derechos constitucionales conexos a la libertad individual y menciona de manera especial, como derechos constitucionales conexos, al debido proceso y la inviolabilidad del domicilio. De este tenor se deduce que los derechos constitucionales mencionados pueden presentar una relación de conexidad con el derecho a la libertad individual, sin negar la posibilidad de que existan otros derechos constitucionales que igualmente pueden cumplir con dicha relación de conexidad¹¹⁰.

¹¹⁰ GARCIA CAVERO, Percy. Ob. Cit. Pág. 132.

2.5.- EL PROCESO DE HÁBEAS CORPUS.

Los principales aspectos del proceso de Hábeas Corpus, están referidos a la personería, la competencia, el procedimiento, las resoluciones y los recursos impugnatorios.

2.5.1. LEGITIMACIÓN.

Anteriormente y dentro del marco de la Constitución de 1993 y del Código de Procedimientos Penales de 1940, solamente se le permitía, además del interesado, a los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, radio de acción restringido que dejaba siempre en la posibilidad de que un detenido se encuentre indefenso, si es que no tenía familiares en el lugar de su detención¹¹¹, situación que desde la vigencia de la Constitución de 1979 y la Ley N° 23506, ya se ha superado definitivamente.

El Código Procesal Constitucional en el artículo 26º, prescribe que “La demanda de Hábeas Corpus puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier otra en su favor, sin necesidad de tener representación. Tampoco requiere la firma del letrado, tasa o alguna otra formalidad. También puede interponerla la Defensoría del Pueblo¹¹².”

2.5.2. DEMANDA.

Según el artículo 27º del Código Procesal Constitucional, “La demanda puede presentarse por escrito o verbalmente, en forma directa o por correo, a través de medios electrónicos de comunicación u otro idóneo. Cuando se trata de una demanda verbal, se levanta acta ante el Juez o Secretario, sin otra exigencia que la de suministrar una sucinta relación de los hechos”.

¹¹¹ ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Ob. Cit. pág. 124.

¹¹² GUTIERREZ CAMACHO, Walter. Ob. Cit. pág. 84.

También puede ser ejercitada telegráficamente, previa la debida identificación del reclamante, del actor o demandante¹¹³.

Son explicables estas facilidades, en razón de que el detenido está impedido materialmente de hacerlo, y quienes lo hagan en su nombre también podrían tener dificultades, si es que a esta acción no se le rodeara de las exigencias que se le impone a las acciones judiciales comunes. Y por otra parte, significa la valoración y preferencialidad que se da a la libertad personal¹¹⁴.

2.5.3. COMPETENCIA.

Según el artículo 28º del Código Procesal Constitucional, conoce del proceso de Hábeas Corpus cualquier Juez Penal del lugar donde se encuentre el detenido o del lugar donde se haya ejecutado la medida o del lugar donde se haya citado¹¹⁵.

Sin embargo, según la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 034-2014-CE-PJ, si se interpone la demanda de Hábeas Corpus en el Distrito Judicial de Lima, o en el Distrito Judicial del Callao, se interpone ante el Juez especializado del Juzgado Constitucional del Poder Judicial; y, si se interpone en los Distritos Judiciales en los cuales se encuentra vigente totalmente la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal de 2004, son competentes para conocer los procesos de hábeas corpus todos los Jueces Penales, los Jueces Penales de Investigación Preparatoria y Jueces Penales Unipersonales, y los Jueces Mixtos que actúen como Jueces Unipersonales¹¹⁶.

¹¹³ ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Ob. Cit. pág. 125

¹¹⁴ ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Ob. Cit. pág. 126.

¹¹⁵ ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Ob. Cit. pág. 124.

¹¹⁶ El Peruano. Norma Legales. Publicado el 04 de abril de 2014. págs. 520311- 520313.

Como podrá apreciarse, en esta materia hay gran amplitud, tanto por razones de lugar como por el Juez que tiene que avocarse. En este último aspecto es irrelevante el turno en el lugar donde hay varios jueces.

Asimismo, cuando la afectación de la libertad individual se realice en lugar distinto y lejano o de difícil acceso de aquel en que tiene su sede el Juzgado donde se interpuso la demanda, éste dictará orden perentoria e inmediata para que el Juez de Paz del distrito en el que se encuentra el detenido cumpla en el día, bajo responsabilidad, con hacer las verificaciones y ordenar las medidas inmediatas para hacer cesar la afectación.

Anteriormente cuando se trataba de una detención arbitraria por orden judicial se interponía ante la Sala Penal Superior, la misma que remitía la demanda al Juez Penal para que la tramite y resuelva, este procedimiento era innecesario ya que la intervención de la Sala Superior sólo era para remitir el expediente, como una mesa de partes, lo que evidentemente era una distorsión a la celeridad de este tipo de proceso constitucional¹¹⁷.

2.5.4. FORMA.

La acción de Hábeas Corpus, está exenta de formalidades. No requiere poder, en el caso que lo interpusiera persona distinta del agraviado; no se exige tasas judiciales de ningún tipo, ni se requerirá firma de letrado¹¹⁸.

2.5.5. PROCEDIMIENTOS URGENTES.

a) En el caso de detención arbitraria.

Según el artículo 30º del Código Procesal Constitucional, tratándose de cualquiera de las formas de detención arbitraria y de afectación de la integridad personal, el Juez resolverá de inmediato. Para ello podrá constituirse en el lugar de los hechos, y verificada la detención indebida

¹¹⁷ DIAZ ZEGARRA, Walter. pág. 216.

¹¹⁸ ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Ob. Cit. pág. 125.

ordenará en el mismo lugar la libertad del agraviado, dejando constancia en el acta correspondiente y sin que sea necesario notificar previamente al responsable de la agresión para que cumpla la resolución judicial.

Se entiende que la detención es arbitraria cuando se dilata la liberación de un detenido, existiendo mandato judicial para ponerlo en libertad¹¹⁹.

b) En el caso de que se tratara de la lesión de otros derechos.

Según lo establecido en el artículo 31º del Código Procesal Constitucional, cuando no se trate de una detención arbitraria, ni de una vulneración de la integridad personal, el Juez podrá constituirse en el lugar de los hechos, o de ser el caso, citar a quien o quienes ejecutaron la violación, requiriéndoles expliquen la razón que motivó la agresión, y resolverá de plano en el término de un día natural, bajo responsabilidad.

La resolución podrá notificarse al agraviado, así se encuentre privado de su libertad. También puede notificarse indistintamente a la persona que interpuso la demanda así como a su abogado, si lo hubiere.

c) Trámite en caso de desaparición forzada.

Cuando se trate de la desaparición forzada de una persona, si la autoridad, funcionario o persona demandada no proporciona elementos de juicio satisfactorios sobre su paradero o destino, el juez declarará adoptar todas las medidas necesarias que conduzcan a su hallazgo, pudiendo incluso comisionar a jueces del Distrito Judicial donde se presume que la persona pueda estar detenida para que las practiquen. Asimismo, el Juez dará aviso de la demanda de Hábeas Corpus al Ministerio Público para que realice las investigaciones correspondientes¹²⁰.

El segundo párrafo del artículo 32 del Código Procesal Constitucional, señala si la agresión se imputa a algún miembro de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, el juez solicitará, además, a la autoridad superior del

¹¹⁹ DIAZ ZEGARRA, Walter. Ob. Cit. pág. 216.

¹²⁰ DIAZ ZEGARRA, Walter. Ob. Cit. pág. 220.

presunto agresor de la zona en la cual la desaparición ha ocurrido, que informe dentro del plazo de veinticuatro horas si es cierta o no la vulneración de la libertad y proporcione el nombre de la autoridad que la hubiere ordenado o ejecutado.

A nivel doctrinario existen dos tesis, la restrictiva mediante la cual producida la desaparición de una persona, se corre traslado a la autoridad que se denuncia, la misma que emite los informes correspondientes generalmente negando los hechos con lo cual cumplido el formalismo se archivó el proceso. En cambio para la tesis amplia el juez debe investigar, para ello debe averiguar si hay detención y donde está el presunto detenido¹²¹.

Esta norma es fruto de los lamentables hechos sucedidos en la década noventa del siglo pasado, ocurrido en la historia casi reciente de la república peruana, donde casos como Castillo Páez, Cantoral, La Cantuta y otros, sufrieron desaparición forzada y la judicatura hizo poco para averiguar si realmente se produjeron desapariciones forzadas. Finalmente, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que llegó a la certeza que hubo práctica por parte de las autoridades para realizar las mencionadas desapariciones forzadas y que el Estado no contó con los mecanismos adecuados para brindar protección de los derechos de las víctimas¹²².

2.5.6. NORMAS ESPECIALES DE PROCEDIMIENTO DE HÁBEAS CORPUS

Artículo 33º de la Ley N° 28237, Código Procesal Constitucional.

- a) No cabe recusación, salvo por el afectado o el actor quien actúe en su nombre.
- b) No caben excusas de los jueces ni de los secretarios.
- c) Los jueces deberán habilitar día y hora para la realización de las actuaciones procesales.
- d) No interviene el Ministerio Público.

¹²¹ DIAZ ZEGARRA, Walter. Ob. Cit. pág. 220.

¹²² DIAZ ZEGARRA, Walter. Ob. Cit. pág. 220.

- e) Se pueden presentar pruebas documentales cuyo mérito apreciará el juez en cualquier estado del proceso.
- f) El Juez o la Sala designará un defensor de oficio al demandante, si lo pidiera.
- g) Las actuaciones procesales son improrrogables. Es decir, no se puede pedir aplazamiento de diligencias ni de informes forenses, salvo por el actor o el perjudicado.

Las normas especiales aquí reseñadas también deberían ser aplicadas a los demás procesos constitucionales, principalmente en lo que se refiere a recusación, excusas y actuaciones procesales; sin lugar a dudas ello contribuiría a dar mayor rapidez a dichos procesos¹²³.

2.5.7. RESOLUCIONES.

No obstante que el procedimiento del Hábeas Corpus, por su propia naturaleza e importancia es brevísimo, las resoluciones que ponen fin a cada instancia, en el fondo constituyen sentencias de primera, de vista y de definitiva y última instancia¹²⁴.

Contiene un mandato especial de protección a la libertad, naturalmente en el caso de declarar fundada la petición. Deben ejecutarse tan pronto como queden consentidas o ejecutoriadas ya que, de no ser así, no cumpliría su misión de restablecer la libertad en el tiempo más breve posible¹²⁵.

¹²³ DIAZ ZEGARRA, Walter. Ob. Cit. pág. 221.

¹²⁴ ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Ob. Cit. pág. 127.

¹²⁵ ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Ob. Cit. pág. 127.

2.5.7.1. CONTENIDO DE LA SENTENCIA ESTIMATORIA.

El artículo 34 del Código Procesal Constitucional, establece que la resolución que declara fundada la demanda de Hábeas Corpus dispondrá alguna de las siguientes medidas:

- 1) La puesta en libertad de la persona privada arbitrariamente de este derecho; o
- 2) Que continúe la situación de privación de libertad de acuerdo con las disposiciones legales aplicables al caso, pero si el Juez lo considerase necesario, ordenará cambiar las condiciones de la detención, sea en el mismo establecimiento o en otro, o bajo la custodia de personas distintas de las que hasta entonces la ejercían;
- 3) Que la persona privada de libertad sea puesta inmediatamente a disposición del Juez competente, si la agresión se produjo por haber transcurrido el plazo legalmente establecido para su detención; o
- 4) Que cese el agravio producido, disponiendo las medidas necesarias para evitar que el acto vuelva a repetirse.

2.5.7.2. RECURSOS IMPUGNATORIOS.

Existen dos recursos impugnatorios, el de apelación y el recurso extraordinario. Ha existido además, el recurso de casación que se interponía contra una resolución denegatoria del Hábeas Corpus expedida por la Sala Penal de la Corte Suprema para que fuera elevado al Tribunal de Garantías Constitucionales. Al suprimirse dicho Tribunal y constituirse en su lugar el Tribunal Constitucional, como última y definitiva instancia, ya no existe el referido recurso de casación¹²⁶.

2.5.7.2.1. Recurso de apelación.

El recurso impugnatorio de apelación, procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia. El término para apelar es de dos días

¹²⁶ ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Ob. Cit. pág. 128

hábiles. Queda entendido que pueden hacer uso de él, tanto el accionante como el demandado, ya que la ley no hace ningún distingo sobre el particular¹²⁷.

El artículo 36º del Código Procesal Constitucional, señala, que interpuesta la apelación el Juez elevará en el día los autos al Superior, quien resolverá el proceso en el plazo de cinco días bajo responsabilidad.

La Corte Superior a través de la Sala Penal o Mixta, según sea el caso conoce los procesos de garantía en segunda instancia, en vía de apelación. Contra la resolución denegatoria que ésta expide, procede el recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional.

2.5.7.2.2. Recurso de Agravio Constitucional.

El Art. 18º del Código Procesal Constitucional prescribe que, “Contra la resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda, procede recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional, dentro del plazo de diez días contados desde el día siguiente de notificada la resolución. Concedido el recurso, el Presidente de la Sala remite al Tribunal Constitucional el expediente dentro del plazo máximo de tres días, más el término de la distancia, bajo responsabilidad”.

2.5.7.2.3. Recurso de Queja.

El Art. 19º del Código Procesal Constitucional prescribe que, “Contra la resolución que deniega el recurso de agravio constitucional procede recurso de queja. Se interpone ante el Tribunal Constitucional dentro del plazo de cinco días. El recurso será resuelto dentro de los diez días de recibido. Si declara fundada la queja, conoce también el recurso de agravio constitucional, ordenando al juez superior el envío del expediente dentro del tercer día de oficiado, bajo responsabilidad”.

¹²⁷ ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Ob. Cit. pág. 128.

CAPÍTULO III

HÁBEAS CORPUS CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES

3.1. Cuestiones preliminares.

El Art. 2 inc. 24, literal f) de la Constitución Política del Perú, establece que solo se puede privar de la libertad personal, en dos supuestos: 1) por la autoridad policial en caso de flagrante delito o 2) por mandato escrito y motivado del juez.

Al respecto, Javier Alberto Aguirre Chumbimuni, señala: “esta afirmación supone que toda forma de privación de la libertad personal en esos dos supuestos es legal. Sin embargo, la jurisprudencia y el nuevo Código Procesal Constitucional, nos permiten afirmar lo contrario: la privación de la libertad personal mediante mandamiento escrito y motivado del juez también puede ser arbitraria y/o ilegal”¹²⁸.

Así, como señala Javier A. Aguirre Chumbinuni, ante situaciones de privación de la libertad de manera arbitraria o ilegal, por actos de particulares, la policía o en los regímenes de excepción, etc., se interpone el proceso Constitucional de Hábeas Corpus en protección de la libertad individual¹²⁹; sin embargo, ante situaciones o, actos que, se emiten dentro de un proceso judicial con vulneración, amenaza o limitación de la libertad personal y afectación al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, se interpone el proceso constitucional de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales, institución jurídica que a continuaciones se pasa a desarrollar.

¹²⁸ AGUIRRE CHUMBIMUNI, Javier Alberto. Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales Penales en el Código Procesal Constitucional. Revista de Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. pág. 294.

¹²⁹ AGUIRRE CHUMBIMUNI, Javier Alberto. Ob. Cit. pág. 294

3.2. El hábeas corpus contra Resoluciones Judiciales en la Ley Nº 23506 y su ley complementaria, la Ley Nº 25398.

3.2.1. Proceso regular.

El artículo 6, inciso 2, de la Ley Nº 23506, señalaba que “no proceden las acciones de garantía (...) contra resolución judicial o arbitral emanada de un proceso regular”.

El artículo 10 de la Ley Nº 25398, decía lo siguiente: “Las anomalías que pudieran cometerse dentro del proceso regular al que se refieren el inciso 2 del artículo 6º de la Ley Nº 23506, deberán ventilarse y resolverse dentro de los mismos procesos mediante el ejercicio de los recursos que las normas procesales específicas establecen. No podrá bajo ningún motivo detenerse mediante una acción de garantía, la ejecución de una sentencia contra la parte vencida dentro de un proceso regular”.

Si bien, la ley hacía una mención al “proceso regular”, sin embargo, no lo definía, con lo cual quedó el campo abierto para que la jurisprudencia y la doctrina delimiten dicho término otorgándole un contenido específico¹³⁰.

Guillermo Cabanellas¹³¹ señala que el término regular es un vocablo polifacético cuyo significado es “con arreglo a regla, reglamentario, normal”. El mismo Cabanellas¹³², expresa que el término proceso anormal se refiere a “toda tramitación en que no se observen las reglas del procedimiento, y siempre que la parte por ello perjudicada proceda a la impugnación pertinente para restablecer la normalidad en los trámites”.

¹³⁰ AGUIRRE CHUMBIMUNI, Javier Alberto. Ob. Cit. pág.295.

¹³¹ CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 24º ed. T. VII. pág. 109.

¹³² CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. T.VI. pág. 437.

3.2.2 Proceso irregular.

Equiparando los términos proceso anormal y proceso irregular, tenemos que este se define como aquel en el que no se observan las reglas del procedimiento, es decir, un proceso que “no se arregla a la regla”.

Javier A. Aguirre Ch., señala que no obstante ello, es evidente que la definición de proceso irregular es muy amplia; en efecto, en sus límites se encuentran todo tipo de inobservancia de reglas del procedimiento, por mínimas que estas sean. Así, tenemos que un simple defecto en la notificación es producto de una inobservancia de las reglas de procedimiento, por citar un ejemplo¹³³.

3.3.- Proceso irregular en el que procede el hábeas corpus

El hábeas corpus no puede ser utilizado frente a cualquier anomalía o irregularidad que se suscite; es decir, no puede ser el instrumento jurídico reemplazante de los medios impugnatorios propios que existen dentro de todo proceso judicial. De ser así, el proceso constitucional de hábeas corpus se convertiría en una especie de proceso constitucional especial para revisar cualquier resolución judicial¹³⁴.

Luis Raúl Sáenz Dávalos, señala “que en efecto, la irregularidad o simple anomalía procesal, como lo podría ser un proveído incorrecto, una equivocada notificación, la inobservancia de un plazo no gravitante, es esencialmente un error judicial de poca o escasa trascendencia. Su sola presencia, bien que incorrecta, no afecta sin embargo el resultado del proceso, pues no tiene mayor incidencia o repercusión a los efectos de considerarlo como auténticamente justo¹³⁵. Por lo mismo la anomalía o

¹³³ AGUIRRE CHUMBIMUNI, Javier Alberto. Ob. Cit. pág.295.

¹³⁴ AGUIRRE CHUMBIMUNI, Javier Alberto. Ob. Cit. pág.296.

¹³⁵ SÁENZ DÁVALOS, Luis R. “Los Procesos Constitucionales como mecanismos de protección frente a resoluciones judiciales arbitrarias”. CASTAÑEDA OTSU, Susana (coord.). Derecho Procesal constitucional. pág.138-139.

simple irregularidad procesal, no puede catalogarse como directamente inconstitucional¹³⁶ (...). Sí, las anomalías, en otras palabras se corrigen mediante los recursos o mecanismos internos, el procedimiento irregular requerirá en cambio, de otro tipo de mecanismos.

Por consiguiente, la simple anomalía no puede catalogarse como directamente inconstitucional; contrario sensu, habrá que encontrar, dentro de un proceso judicial, una anomalía directamente inconstitucional para ser catalogado como irregular para los efectos del hábeas corpus. Ahora bien, una anomalía directamente inconstitucional, como bien lo ha entendido la doctrina y la jurisprudencia, solo puede ser aquella que vulnera las garantías constitucionales mínimas que se deben observar en el transcurrir de un proceso judicial¹³⁷.

El constitucionalista Francisco José Eguiguren Praeli¹³⁸, citado por Javier A. Aguirre Ch, en la Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, comentando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, señala que: (...) no obstante, la legislación de la materia precisa que tales acciones no serán viables contra las resoluciones judiciales “emanadas de un proceso regular”, concepto que la jurisprudencia ha buscado establecer señalando que no cualquier vicio al interior de un proceso “regular” le hace perder dicho carácter, sino aquellas vulneraciones graves que afectan un derecho constitucional, especialmente en lo referido a la observancia del debido proceso y el respeto a la tutela judicial¹³⁹.

En esa misma línea, Eloy Espinoza-Saldaña Barrera¹⁴⁰, citado por Javier A. Aguirre Ch, en la Revista de Derecho de la PUCP, expone que: “(...) es doctrinariamente con valiosos trabajos (...) que va determinándose que un proceso es regular cuando respeta el derecho de acceso a la justicia y las

¹³⁶ AGUIRRE CHUMBIMUNI, Javier Alberto. Ob. Cit. pág.296.

¹³⁷ AGUIRRE CHUMBIMUNI, Javier Alberto. Ob. Cit. pág.296.

¹³⁸ http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-001223000100009&script=sci_arttext&tlng=es

¹³⁹ AGUIRRE CHUMBIMUNI, Javier Alberto. Ob. Cit. pág.297.

¹⁴⁰ <http://www.justiciaviva.org.pe/publica/03.pdf>.

garantías de un debido proceso (...). El desarrollo doctrinario primero, y jurisprudencial después, va progresivamente apuntalando la idea de que la regularidad de un proceso está vinculada a su respeto a la tutela judicial efectiva (entendida en el Perú por nuestro Tribunal Constitucional como derecho de acceso a la justicia, y además, como la necesidad de asegurar la efectividad de las resoluciones judiciales) y, fundamentalmente, al debido proceso¹⁴¹.

Tal como se puede apreciar, tanto la doctrina como la jurisprudencia se encargaron de brindar un concepto de lo que debe entenderse por proceso regular a efectos de la interposición del proceso constitucional de Hábeas Corpus. El concepto del mismo quedó delimitado por el respeto escrupuloso de las garantías constitucionales al debido proceso legal y la tutela judicial efectiva. En buena cuenta, se establece que, desde la óptica constitucional, todo proceso judicial penal, en el que se respeten ambas garantías, es un proceso regular.

En consecuencia, un proceso irregular - susceptible de ser “reparado” por el proceso constitucional de hábeas corpus, es aquel que vulnera uno y otro derecho de manera conjunta o alterna, siempre y cuando, al mismo tiempo, vulnere la libertad personal del imputado¹⁴².

3.4.- Debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva

El artículo 139 inc.3 de la Constitución Política del Perú, prescribe la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, y señala que ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación¹⁴³.

¹⁴¹ AGUIRRE CHUMBIMUNI, Javier Alberto. Ob. Cit. pág.297.

¹⁴² AGUIRRE CHUMBIMUNI, Javier Alberto. Ob. Cit. pág.297.

¹⁴³ GUTIERREZ CAMACHO, Walter. Ob. Cit. pág. 45

3.4.1. El Debido proceso.

Para Raúl Chanamé Orbe, el debido proceso son las garantías mínimas que requiere una persona para ser investigado o procesado (derecho de defensa, pluralidad de instancia, presunción de inocencia, etc.), en tanto la tutela jurisdiccional efectiva es el derecho de la persona a que el Estado le proporcione una justicia idónea, imparcial y oportuna a sus demandas o pretensiones. Dentro de estos postulados el juez natural es una condición de lo predecible de una justicia imparcial¹⁴⁴.

De Bernadis, Luis Marcelo, en su obra La Garantía Procesal del Debido Proceso, citado por Raúl Chanamé Orbe, en su obra Comentarios a la Constitución página 432, define el debido proceso como “juicio justo” o “proceso regular”, es una garantía y derecho fundamental de todos los justiciables que les permite una vez ejercitado el derecho de acción, el poder acceder a un proceso que reúna los requisitos mínimos que lleven a la autoridad encargada de resolverlo, a pronunciarse de manera justa, equilibrada e imparcial”.

Para Aníbal Quiroga León, el debido proceso es “la institución del Derecho Constitucional Procesal, que identifica los principios y presupuestos procesales mínimos que siempre debe reunir todo proceso judicial jurisdiccional para asegurar al justiciable la certeza, justicia, razonabilidad y legitimidad de resultado socialmente aceptable”¹⁴⁵.

Por su parte, Susana Castañeda Otsu, expresa que “otro derecho que no aparece en el listado enunciativo del art. 12º de la Ley N° 23506 es el debido proceso. Esta omisión no implica que el hábeas corpus no pueda ser utilizado para atacar resoluciones que emanen de un proceso que no ha

¹⁴⁴ CHANAME ORBE, Raúl. Ob. Cit. pág. 432.

¹⁴⁵ QUIROGA LEÓN, Aníbal. El debido proceso legal en el Perú y el sistema interamericano de protección de derechos humanos. pág. 47

tenido en consideración el respeto de los estándares mínimos que integra este derecho macro, denominado debido proceso”¹⁴⁶.

Estos autores coinciden en señalar que el debido proceso legal engloba aquellos principios o derechos mínimos que se deben observar en la tramitación de un determinado proceso judicial a fin de que este pueda garantizar la realización efectiva de un determinado derecho sometido a la administración de justicia dentro de los parámetros de razonabilidad, proporcionalidad y justicia¹⁴⁷.

En un proceso judicial, cualquiera sea la naturaleza de la pretensión por la cual se accede al mismo, en última instancia, se constituye en el cauce por donde discurre una “contienda” jurídica, en la que, al término del mismo, se plasmará la realización efectiva de un determinado derecho¹⁴⁸.

Así, por ejemplo, en un proceso penal, existe una “contienda” jurídica en la que, por un lado, se pretende la realización del derecho de sancionar del Estado y, por el otro lado, se pretende la realización del derecho a la libertad personal del imputado. Es evidente que la vulneración a los estándares mínimos del cauce por donde discurre dicha contienda podría vulnerar, amenazar o limitar la libertad personal del procesado; he aquí la justificación de la interposición del hábeas corpus contra resoluciones judiciales que vulneran el debido proceso legal o la tutela judicial efectiva¹⁴⁹.

Víctor Obando Blanco, precisa: “El proceso es un instrumento de tutela del derecho, de modo que si se desnaturaliza por violación de sus formas esenciales, el instrumento de tutela falla y con él sucumbe inexorablemente

¹⁴⁶ CASTAÑEDA OTSU, Susana Inés. “Hábeas Corpus. Normativa y Aspectos Procesales”. Ob. Cit. pág. 30

¹⁴⁷ MARCELO DE BERNARDIS, Luis. La garantía procesal del debido proceso. pág. 331.

¹⁴⁸ AGUIRRE CHUMBIMUNI, Javier Alberto. Ob. Cit. pág.298.

¹⁴⁹ AGUIRRE CHUMBIMUNI, Javier Alberto. Ob. Cit. pág.298.

el derecho de los justiciables; existe entonces la necesidad de cuidar el proceso”¹⁵⁰.

Así, la vulneración del derecho de defensa, de la pluralidad de instancia, del principio acusatorio o de contradicción, entre otros¹⁵¹, puede, en términos de Obando Blanco, hacer sucumbir inexorablemente el derecho a la libertad personal del imputado.

El debido proceso se constituye, así, en el blindaje “impenetrable” de quien debe soportar el peso del Estado en un determinado proceso judicial en general y penal en particular; la vulneración del mismo, y, por ende, la vulneración, amenaza o limitación de la libertad personal, justifica y legitima la utilización del proceso constitucional de hábeas corpus. Ahora bien, si el debido proceso legal y la tutela judicial efectiva integran un conjunto de principios o derechos mínimos que se deben observar en la tramitación de un determinado proceso judicial, es legítimo preguntarse cuáles son esos derechos o principios mínimos¹⁵².

Al respecto, Susana Castañeda Otsu¹⁵³ refiere que: “la doctrina del Tribunal Constitucional sobre este derecho es variada, pues ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre casi todos los derechos que integran el debido proceso, dejando establecido que manejamos el concepto bajo la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En tal sentido sus manifestaciones son las que se encuentran consagradas en las cláusulas abiertas de los arts. 14º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 6º del Convenio Europeo de Derechos Humanos y 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos, sin dejar de considerar el principio de legalidad previsto en estos tres instrumentos, al igual que las

¹⁵⁰ OBANDO BLANCO, Víctor Roberto. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en la jurisprudencia. pág. 6.

¹⁵¹ NAVARRA GARMA, Arturo. “Pretensión nulificante de la cosa juzgada fraudulenta en el proceso civil”. En César Castañeda Serrano (comp.). Nulidad de cosa juzgada fraudulenta. 1ra.ed. T. II. pág. 22.

¹⁵² AGUIRRE CHUMBIMUNI, Javier Alberto. Ob. Cit. pág.299.

¹⁵³ CASTAÑEDA OTSU, Susana Inés. Ob. Cit. pág. 308.

reglas específicas relativas a los privados de libertad, en las que se consagran derechos que forman parte del debido proceso: plazo razonable de la detención, derecho a ser informado de las causas de la detención, de la acusación formulada en su contra, del derecho efectivo a obtener reparación, entre otros”.

Por su parte el Tribunal Constitucional, se ha pronunciado que el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales, dentro de un proceso, sea éste administrativo – como en el caso de autos–, o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal. Uno de los atributos del debido proceso lo constituye el derecho de defensa, que tiene como presupuesto, para su ejercicio, la debida notificación de las decisiones que pudieran afectar una situación jurídica¹⁵⁴.

3.4.2. Tutela jurisdiccional efectiva

El artículo 4º, último párrafo del Código Procesal Constitucional, señala los elementos constitutivos de la tutela procesal efectiva: “Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación

¹⁵⁴ STC. Exp. Nº 2508-2004-AA.12 de noviembre de 2004. Fj.1.

adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal”¹⁵⁵.

Por su parte, el Tribunal Constitucional, se ha pronunciado sobre la tutela jurisdiccional: “... el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución establece, como principio de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, criterio que no sólo se limita a las formalidades propias de un procedimiento judicial, sino que se extiende a los procedimientos administrativos. Enunciado recogido por el artículo 4º del Código Procesal Constitucional, que define la tutela procesal efectiva (...). En consecuencia, el debido proceso forma parte de la concepción del derecho de toda persona a la tutela jurisdiccional efectiva, y se concreta en las denominadas garantías que, dentro de un *íter procesal* diseñado en la ley, están previstas en la Constitución”¹⁵⁶.

Ahora bien, no obstante que parecería que dicho artículo establece un *númerus clausus* de los derechos y garantías que integran ese derecho macro denominado tutela procesal efectiva, sin embargo, la interpretación del mismo debe estar acorde con los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y con los Tribunales Internacionales de Derechos Humanos¹⁵⁷.

En tal sentido, la vulneración de cualquier elemento del debido proceso legal o la tutela judicial efectiva, en tanto impliquen la vulneración, amenaza o limitación de la libertad personal, justifica la utilización de un proceso constitucional

¹⁵⁵ GUTIERREZ CAMACHO, Walter. Ob. Cit. pág. 74.

¹⁵⁶ STC. Exp. Nº 2802-2005-PA/TC. Fj.13.

¹⁵⁷ Al respecto, el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional dice: “El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Tratados sobre Derechos Humanos, así como de las decisiones adoptadas por los Tribunales Internacionales sobre Derechos Humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte”.

4.- El Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales en el Código Procesal Constitucional.

La Ley N° 23506, y la Ley N° 25398 que complementa las Disposiciones de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo, no establecían de manera expresa la procedencia del hábeas corpus contra resoluciones judiciales emanadas de un proceso irregular. Salvo el caso del artículo 5 de la Ley N° 23506 cuando dice: “Las acciones de garantía también son procedentes si una autoridad judicial, fuera de un procedimiento que es de su competencia, emite una resolución o cualquier disposición que lesione un derecho constitucional”¹⁵⁸.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia fueron dándole contenido y límites a lo que se conoce como un proceso regular, y, por lo tanto, susceptible de ser remediado, al interior del mismo, con los medios de impugnación naturales en dicho proceso; al mismo tiempo, y como consecuencia lógica de ello, se definió lo que debe entenderse por proceso irregular y los parámetros para la postulación del hábeas corpus, a fin de remediar dicha irregularidad¹⁵⁹.

La realidad social y la necesidad de responder a la misma hicieron que el Código Procesal Constitucional tenga un dispositivo expreso para la procedencia del hábeas corpus contra resoluciones judiciales¹⁶⁰.

4.1. El artículo 4 del Código Procesal Constitucional.

El segundo párrafo de este artículo dice: “El hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva”.

¹⁵⁸ AGUIRRE CHUMBIMUNI, Javier Alberto. Ob. Cit. Pág. 301.

¹⁵⁹ AGUIRRE CHUMBIMUNI, Javier Alberto. Ob. Cit. Pág.301.

¹⁶⁰ AGUIRRE CHUMBIMUNI, Javier Alberto. Ob. Cit. Pág.301.

Según este artículo, los elementos que constituyen la procedencia del hábeas corpus contra resoluciones judiciales se encuentran establecidos de manera clara y precisa, en los supuestos siguientes:

- 1) Firmeza de la resolución,
- 2) Vulneración manifiesta, y
- 3) Vulneración de la libertad individual y de la tutela procesal efectiva.

1. Resolución judicial firme

Resolución judicial firme, debe entenderse a aquella contra la que se ha agotado los recursos previstos por la ley procesal de la materia¹⁶¹. En ese sentido, Aníbal Quiroga León¹⁶², al referirse a la cosa juzgada, dice: “Sus tres principales características están definidas por la inimpugnabilidad, la inmutabilidad y la coercibilidad. Por la primera se entiende la firmeza de un fallo judicial que impida su revisión.

En ese sentido, para la procedencia del hábeas corpus contra resoluciones judiciales, es necesario e imprescindible que se agoten, en el proceso judicial respectivo, los medios impugnatorios que contiene cada proceso, a fin de que la anomalía o el procedimiento irregular sean subsanados en el mismo proceso judicial donde se generó¹⁶³.

Con ello, en cierto lapso procesal, se reparan las anomalías o irregularidades procesales con el procedimiento irregular.¹⁶⁴ En efecto, en cierto estadio procesal contra ambos deben proceder, en primer lugar, los medios impugnatorios naturales de cada proceso, con el objeto de ser remediada una anomalía o el procedimiento irregular; en un segundo plano,

¹⁶¹ STC. Exp. N° 4107-2004-HC/TC. Fund. 5

¹⁶² QUIROGA LEÓN, Aníbal. Ob.Cit., pág. 73.

¹⁶³ AGUIRRE CHUMBIMUNI, Javier Alberto. Ob. Cit. Pág.302.

¹⁶⁴ SAÉNZ DÁVALOS, Luis. Ob. Cit., pág. 138, dice que “no es lo mismo el llamado procedimiento irregular, que la simple anomalía cometida dentro del proceso, por el contrario, regular. En efecto, la irregularidad o simple anomalía procesal, como lo podría ser un proveído incorrecto, una equivocada notificación, la inobservancia de un plazo no gravitante, es esencialmente un error judicial de poca o escasa trascendencia”.

recién existiría una diferencia cualitativa entre ambos, puesto que solo podrán ser objeto de un proceso constitucional aquellos procedimientos irregulares que vulneran la tutela procesal efectiva y la libertad individual, contenidas en una resolución judicial firme¹⁶⁵.

Esta exigencia puede ser loable para evitar la carga procesal constitucional y el uso indiscriminado y abusivo de los procesos constitucionales; sin embargo, desde el punto de vista de la realización efectiva de los derechos fundamentales, dicha postura evidencia un margen de desprotección, con lo cual se evidencia que primero se prioriza que no sea abultada la carga procesal frente a la protección de los derechos fundamentales¹⁶⁶.

Javier Alberto Aguirre Chumbimuni, da el ejemplo siguiente: “si en un proceso penal, en algunos lugares donde aún está vigente el Código de Procedimientos Penales, se emite un auto de apertura de instrucción que ordena la detención sin una fundamentación adecuada, se interpondrá recurso de apelación, con el peligro de que el mismo sea declarado improcedente; luego, se recurre en queja entonces, esperar que la Sala declare procedente la queja y, por lo tanto, suba el incidente de apelación. Aguirre Chumbimini sigue diciendo, tal vez exageramos pero, en ese interín, pueden transcurrir ochos días, o más días como ocurre en nuestra realidad judicial, hasta que la resolución que ordena la detención adquiera firmeza; recién en este instante podemos recurrir al proceso constitucional. Mientras tanto, el afectado “tendrá que seguir esperando”, detenido en un centro penitenciario”¹⁶⁷.

El perjuicio que puede significar que en determinados casos concretos, se tenga que esperar la firmeza de la resolución, a fin de poder recurrir a un proceso constitucional, se evidencia claramente cuando se busca, primero, evitar la excesiva carga procesal constitucional, antes que la protección inmediata y eficaz del derecho fundamental a la libertad del

¹⁶⁵ AGUIRRE CHUMBIMUNI, Javier Alberto. Ob. Cit. Pág.302.

¹⁶⁶ AGUIRRE CHUMBIMUNI, Javier Alberto. Ob. Cit. Pág.302.

¹⁶⁷ AGUIRRE CHUMBIMUNI, Javier Alberto. Ob. Cit. Pág.302.

imputado¹⁶⁸. Por lo que se debe postular a corregir esta categoría, en pro de la protección y respeto al derecho a la libertad de la persona imputada.

2. Vulneración en forma manifiesta.

La vulneración debe ser en forma manifiesta, así lo señala Javier Alberto Aguirre Chumbimuni, quien cita a Guillermo Cabanellas para entender esta palabra, que significa lo “evidente, indudable, patente.//Claro.//Descubierto.//Innegable.//Visible”¹⁶⁹.

Ahora bien, si la vulneración es manifiesta, evidente, indudable, Javier Alberto Aguirre Chumbimuni se pregunta: “¿por qué esperar entonces que la resolución adquiera firmeza para poder acudir a la vía constitucional?”, continúa preguntándose, “si hay una detención sin ninguna motivación y argumento, ¿por qué esperar el tramite impugnatorio al interior del proceso?, ¿por qué no acudir directamente a la inmediatez y eficacia del proceso constitucional?”.

En todo caso, se esperaría el carácter firme de la resolución que vulnera la tutela procesal efectiva y la libertad personal, solo cuando la vulneración no sea evidente, indudable e innegable, que no es el supuesto descrito por la norma¹⁷⁰.

Debe observarse que el problema no va por el lado de la eficacia, pues al interior del proceso común existen medios de impugnación igualmente eficaces que el proceso constitucional; el lado cuestionable en cierta medida es la carencia de inmediatez, inherente al proceso constitucional. En efecto, ambos procesos (común y constitucional) pueden ser igual de eficaces, sin embargo, ambos no son igual de inmediatos¹⁷¹.

¹⁶⁸ AGUIRRE CHUMBIMUNI, Javier Alberto. Ob. Cit. Pág.303.

¹⁶⁹ AGUIRRE CHUMBIMUNI, Javier Alberto. Ob. Cit. Pág.303.

¹⁷⁰ AGUIRRE CHUMBIMUNI, Javier Alberto. Ob. Cit. Pág.303.

¹⁷¹ AGUIRRE CHUMBIMUNI, Javier Alberto. Ob. Cit. Pág.304.

Aquí se observa con claridad lo evidenciado a lo largo de este artículo: “la clara prioridad que el legislador otorga a la protección de la carga procesal constitucional en desmedro de la reparación inmediata de la vulneración de un derecho fundamental: la libertad personal”¹⁷².

Teniendo en cuenta que el hábeas corpus tutela un derecho fundamental, cuya protección debe ser incondicional frente a actos arbitrarios, no hay razón para condicionar este proceso al agotamiento de los recursos internos del proceso común (apelación, queja, nulidad, etc.) cuando la vulneración de la tutela procesal efectiva y la libertad individual es manifiesta¹⁷³.

3. Vulneración de la libertad individual y de la tutela procesal efectiva.

El Tribunal Constitucional señala “La libertad personal es un derecho subjetivo, reconocido en el inciso 24) del artículo 2° de la Constitución Política del Estado y, al mismo tiempo, fundamenta diversos derechos constitucionales a la vez que justifica la propia organización constitucional”¹⁷⁴.

En cuanto derecho subjetivo garantiza, que no se afecte indebidamente la libertad física de las personas, esto es, su libertad locomotora, ya sea mediante detenciones, internamientos o condenas arbitrarias. Los alcances de la garantía dispensada a esta libertad comprenden frente a cualquier supuesto de privación de la libertad locomotora, independientemente de su origen, la autoridad o la persona que la haya efectuado. Garantiza, pues, ante cualquier restricción arbitraria de la libertad personal, según lo señala el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos¹⁷⁵.

Javier A. Aguirre Chumbimuni, señala: “Si la arbitrariedad o ilegalidad que vulnera la tutela procesal efectiva y la libertad individual del imputado es manifiesta, el afectado debe tener expedito el instrumento jurídico más eficaz

¹⁷² AGUIRRE CHUMBIMUNI, Javier Alberto. Ob. Cit. pág.304.

¹⁷³ AGUIRRE CHUMBIMUNI, Javier Alberto. Ob. Cit. pág.304.

¹⁷⁴ STC. Exp. N° 05894-2013-PHC/TC. Fj.5.

¹⁷⁵ STC. Exp. N° 05894-2013-PHC/TC. Fj. 6.

e inmediato que le permita, en el más breve plazo posible, gozar de su libertad en forma plena. Pensamos que carece de mayores fundamentos y de razonabilidad esperar “unos días más” hasta agotar los recursos al interior del proceso ordinario o común (carácter firme de la resolución), cuando el juez constitucional puede resolver de inmediato una vulneración manifiesta, indudable y patente”¹⁷⁶.

5.- El Hábeas Corpus no solo debería proceder Contra Resoluciones Judiciales firmes.

El jurista nacional, Javier A. Aguirre Chumbimuni, señala que, si bien la exigencia del carácter firme de la resolución que vulnera la libertad individual es loable desde que pretende evitar la excesiva carga procesal constitucional de los magistrados, sin embargo, dicha exigencia no debe ser interpretada de manera cerrada, de forma que perjudique, en determinadas situaciones concretas, al ciudadano que sufre una vulneración, amenaza o limitación de su libertad personal¹⁷⁷.

Javier A. Aguirre Chumbimuni, señala: “Lo que estamos postulando, no es una discusión bizantina, ajena a las consecuencias prácticas. La interpretación literal del artículo 4º del Código Procesal Constitucional, en el sentido de que el hábeas corpus procede contra resoluciones judiciales firmes en determinados casos concretos trae consigo una indefensión para obtener resultados inmediatos y efectivos respecto de la tutela de derechos fundamentales como la libertad personal del imputado”, y agrega : “Creemos que la característica esencial que diferencia al proceso constitucional del proceso común es la inmediatez en la obtención del resultado en la tutela de la libertad del imputado. En efecto, no podemos decir que la diferencia esencial es la efectividad, por cuanto el proceso común, con sus respectivos medios de impugnación, es tan eficaz como un proceso constitucional. Por

¹⁷⁶ AGUIRRE CHUMBIMUNI, Javier Alberto. Ob. Cit. pág.304.

¹⁷⁷ AGUIRRE CHUMBIMUNI, Javier Alberto. Ob. Cit. pág.305.

ejemplo, la revocatoria de mandato de detención dictado con manifiesta vulneración de la tutela procesal efectiva bien se puede obtener en el proceso común, bien en el proceso constitucional; sin embargo, en ambos, el resultado no se obtiene con la misma rapidez o inmediatez”¹⁷⁸.

No obstante lo expuesto, entre la libertad personal del imputado o la carga procesal constitucional, es evidente que la inclinación debe ser hacia la más inmediata y eficaz protección de la libertad personal del procesado; por ello, aun cuando se corre el riesgo de una abundante carga procesal constitucional, sin embargo, la vulneración manifiesta de la libertad personal por cualquier medio (una resolución judicial en este caso) requiere del instrumento jurídico más eficaz, inmediato, sencillo y rápido. Esto es lo que el Tribunal Constitucional, en el expediente 697-2000-HC, entendió cuando, en salvaguarda de un derecho fundamental, como es la libertad personal, expresó que “en tales circunstancias es obvio que hacer prevalecer el derecho de todo individuo a ser juzgado en un plazo razonable, es una forma de anteponer la persona al Estado, tal y cual lo proclama la Constitución”¹⁷⁹.

Javier A. Aguirre Chumbimuni, afirma: “Con el mismo argumento de razonabilidad que se desprende de dicho pronunciamiento, podemos expresar que, ante una vulneración manifiesta de la libertad personal mediante una resolución judicial, no hay por qué anteponer el interés del Estado (evitar la carga procesal constitucional) frente al interés del afectado: utilizar el medio más eficaz, inmediato, rápido y sencillo que pueda hacer cesar la vulneración, amenaza o limitación de su libertad”¹⁸⁰.

Javier A. Aguirre Chumbimuni, agrega: “También habrá otras situaciones, como el caso fortuito o fuerza mayor, que impidan la interposición de los recursos pertinentes al interior del proceso. La práctica procesal penal nos ha enseñado que, por ejemplo, la huelga de los trabajadores del Poder Judicial

¹⁷⁸ AGUIRRE CHUMBIMUNI, Javier Alberto. Ob. Cit. pág.305.

¹⁷⁹ AGUIRRE CHUMBIMUNI, Javier Alberto. Ob. Cit. pág.305.

¹⁸⁰ AGUIRRE CHUMBIMUNI, Javier Alberto. Ob. Cit. pág.306.

es una situación que impide la interposición de los recursos pertinentes para cuestionar la validez de una resolución judicial que vulnera la tutela procesal efectiva y la libertad personal. Conocimos de cerca el caso de un procesado a quien se le había dictado impedimento de salida del país en un proceso penal por un delito cuya pena máxima era dos años; sin entrar en mayores detalles, podemos decir que dicha medida era totalmente arbitraria, más aun teniendo en cuenta que dicho procesado vive y labora en el extranjero. El procesado, debido a la huelga, se vio ante la imposibilidad de interponer cualquier medio de impugnación y tuvo que esperar el término de la huelga (cincuenta días) para que, por lo menos, se le suspenda dicha medida y así poder retornar a su trabajo en el extranjero”¹⁸¹.

El mismo autor refiere: “Otro de los supuestos donde no se debería esperar el carácter firme de la resolución que vulnera la tutela procesal efectiva y la libertad personal es aquel en el que, no obstante la utilización de los medios impugnatorios al interior del proceso, estos no son resueltos en el plazo establecido por la ley o dentro de un plazo razonable. Estando en juego la vulneración, amenaza o limitación de la libertad personal, los medios de impugnación destinados a atacar a la misma deben ser resueltos dentro del plazo establecido por la norma o en un plazo razonable; lo contrario sería una muestra de desinterés, falta de diligencia o incapacidad del Estado por atender situaciones de suma urgencia, cuyas consecuencias (retardo en la solución) no pueden ser cargados al afectado”¹⁸². Posiciones que comparto por ser argumentos sólidos y convincentes en la protección de los derechos fundamentales del afectado.

6.- HÁBEAS CORPUS Y LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN.

El artículo 39 de la Ley N° 23506, establecía en forma terminante la improcedencia de Acciones de Hábeas Corpus y Amparo respecto de los derechos suspendidos durante los Estados de Excepción y durante el tiempo

¹⁸¹ AGUIRRE CHUMBIMUNI, Javier Alberto. Ob. Cit. pág.306.

¹⁸² AGUIRRE CHUMBIMUNI, Javier Alberto. Ob. Cit. pág.306.

de su suspensión. Pero los tribunales constataron que muchas veces la detención no tenía nada que ver con el estado de emergencia; que no había relación directa, por lo que se expidieron algunas ejecutorias que señalaban su procedencia bajo un principio de razonabilidad¹⁸³.

Víctor Julio Ortecho Villena señala: “Esta constatación y parecer jurisprudencial motivó que en la Ley Complementaria N° 25398, en forma puntual se señalara: “Decretados cualquiera de los regímenes de excepción, los jueces tramitarán las acciones de garantía, sólo en los casos:

- Si se interpone la acción en defensa de derechos que no han sido suspendidos; y
- Si tratándose de derechos suspendidos, éstos no tienen relación directa con la conducta del agraviado o afectado.

Ese problema ha sido zanjado en forma concluyente por la Constitución de 1993, que ha recogido el parecer unánime de los juristas, cuando en su artículo 200, última parte puntualiza lo siguiente¹⁸⁴:

- El ejercicio de las acciones de Hábeas Corpus y Amparo no se suspende durante la vigencia de los regímenes de excepción a que se refiere el art. 137 de la Constitución; y
- Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o suspendidos, el órgano jurisdiccional correspondiente examina la razonabilidad y proporcionalidad del acto restrictivo. No corresponde al juez cuestionar la declaración del Estado de emergencia ni de sitio.

El artículo 23 del Código Procesal Constitucional, prescribe la procedencia de Procesos Constitucionales durante los regímenes de excepción.

¹⁸³ ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Ob. Cit. pág.129.

¹⁸⁴ ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Ob. Cit. pág. 129.

Razonabilidad y proporcionalidad.- Los procesos constitucionales no se suspenden durante la vigencia de los regímenes de excepción. Cuando se interponen en relación con derechos suspendidos, el órgano jurisdiccional examinará la razonabilidad y proporcionalidad del acto restrictivo, atendiendo a los siguientes criterios¹⁸⁵:

- 1) Si la demanda se refiere a derechos constitucionales que no han sido suspendidos;
- 2) Si tratándose de derechos suspendidos, las razones que sustentan el acto restrictivo del derecho no tienen relación directa con las causas o motivos que justificaron la declaración del régimen de excepción; o,
- 3) Si tratándose de derechos suspendidos, el acto restrictivo del derecho resulta manifiestamente innecesario o injustificado atendiendo a la conducta del agraviado o a la situación de hecho evaluada sumariamente por el juez.

La suspensión de los derechos constitucionales tendrá vigencia y alcance únicamente en los ámbitos geográficos especificados en el decreto que declara el régimen de excepción.

7.- HABEAS CORPUS Y LA JURISDICCIÓN INTERNACIONAL

El artículo 205º de la Constitución de 1993, establece que agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce, puede recurrir a los Tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados y convenios de los que Perú es parte. En mismo sentido, señala el artículo 121º *in fine* del Código Procesal Constitucional.

El artículo 114º del Código Procesal Constitucional, señala que los organismos a que se refiere el artículo 205º de la Constitución, son el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, la Corte

¹⁸⁵ GUTIERREZ CAMACHO, Walter. Ob. Cit. Pág. 80.

Interamericana de Derechos Humanos de ese mismo organismo regional y aquellos otros que se constituyen en el futuro y lógicamente que sean aprobados por tratados que obliguen al Perú y por cierto que tengan categoría correspondiente, tal como establece la 4ta DFT de la Constitución¹⁸⁶.

El artículo 115º del Código Procesal Constitucional, establece que la resolución del organismo internacional a cuya jurisdicción obligatoria se halle sometida el Estado peruano, no requiere para su validez y eficacia de reconocimiento, revisión ni examen previo alguno. El T.C recepcionará las resoluciones emitidas por el organismo internacional, y dispondrá su ejecución y cumplimiento, de conformidad con las normas y procedimientos internos vigentes sobre ejecución de sentencias.

El artículo 116º del Código Procesal Constitucional, prescribe la obligación de la Corte Suprema de Justicia de la República y el Tribunal Constitucional, de cumplir con la remisión, a los organismos internacionales anteriormente referidos, las resoluciones y demás documentos actuados en el proceso o los procesos que originaron la petición, así como todo elemento que a juicio del organismo internacional fuere necesario para su ilustración o para mejor resolver el asunto sometido a su competencia.

En la práctica será conveniente recurrir a la jurisdicción internacional, no en todos los casos, sino en los más trascendentes, por el bien jurídico tutelado y la personalidad del agraviado o por las circunstancias en que la vulneración es grave¹⁸⁷.

¹⁸⁶ Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú.

¹⁸⁷ ALCÁNTARA GARCÍA, Erika Romina y otros. Procesos Constitucionales. pág. 28. En: <http://www.monografias.com/trabajos24/procesos-constitucionales/procesos-constitucionales.shtml>

CAPITULO IV

RESOLUCIONES JUDICIALES

Definición.-

Una resolución jurídica, sea administrativa o judicial, pone fin a un conflicto mediante la decisión fundamentada en el orden legal vigente¹⁸⁸.

Una resolución judicial es un acto procesal. Por tanto, su emisión debe basarse en la aplicación cuidadosa del conocimiento pertinente¹⁸⁹.

El Artículo 120 del Código Procesal Civil, señala que las **Resoluciones**, son los actos procesales a través de los cuales se impulsa o decide al interior del proceso o se pone fin a éste, pueden ser decretos, autos y sentencia¹⁹⁰.

El Artículo 121 del Código Procesal Civil, señala que son resoluciones los: **Decretos, autos y sentencias**.- Mediante los **decretos** se impulsa el desarrollo del proceso, disponiendo actos procesales de simple trámite. Mediante los **autos** el Juez resuelve la admisibilidad o el rechazo de la demanda o de la reconvención, el saneamiento, interrupción, conclusión y las formas de conclusión especial del proceso; el concesorio o denegatorio de los medios impugnatorios, la admisión, improcedencia o modificación de medidas cautelares y las demás decisiones que requieran motivación para su pronunciamiento. Mediante la **sentencia** el Juez pone fin a la instancia o al proceso en definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controvertida declarando el derecho de las partes, o excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal¹⁹¹.

¹⁸⁸ LEON PASTOR, Ricardo. Manual de Redacción de Resoluciones Judiciales. Academia de la Magistratura. pág.15

¹⁸⁹ MIXAN MASS, Florencio. Debate Penal, N° 2, mayo –agosto 1987.pág. 2.

¹⁹⁰ Código Civil, Código Procesal Civil, Código de los Niños y Adolescentes, y otras normas.pág.427.

¹⁹¹ Código Civil, Procesal Civil, Ob. Cit. pág. 427.

DECRETOS.-

José Antonio Cárdenas Ticona, desarrolla el concepto de Decretos, en los términos siguientes: Son aquellas resoluciones por las cuales se impulsa el proceso, disponiéndose actos procesales de simple trámite. (Art. 121 Código Procesal Civil). Actualmente en su parte final el art. 122 del código adjetivo, permite que los decretos sean expedidos por los auxiliares jurisdiccionales (Secretarios, actualmente denominado Especialista Legal), y debe ser suscritos con firma entera o completa. Son expedidos en el plazo de 2 días de presentado el escrito. No necesitan estar fundamentadas. Contra los decretos sólo cabe el medio impugnatorio de la reposición, por tanto no son apelables. El plazo para interponer la reposición es de tres días; y el auto que resuelve la reposición es inimpugnable¹⁹².

AUTOS.-

Cárdenas Ticona, señala que los autos, son aquellas resoluciones por las cuales se resuelven algún aspecto controvertido, o pequeñas incidencias. Mediante los autos el Juez resuelve la admisibilidad o el rechazo de la demanda o de la reconvención, (debe comprender también a la contestación), el saneamiento procesal, la interrupción o conclusión del proceso, el concesorio o denegatorio de los medios impugnatorios; la admisión, improcedencia o modificación de las medidas cautelares, y el propio art. 121 del Código Procesal Civil, deja abierta la posibilidad a otras incidencias, dando así una facultad en blanco al Juez, cuando se refiere a las demás decisiones que requieran motivación para su pronunciamiento (medio probatorio de oficio); ya que todo aspecto controvertido que se resuelva dentro del proceso se hace mediante un auto¹⁹³.

¹⁹² CÁRDENAS TICONA, José Antonio. Actos Procesales y Sentencia. Pág. 3. En <http://josecardenas.blogspot.pe/2008/01/actos-procesales-y-sentencia.html>

¹⁹³ CÁRDENAS TICONA, José Antonio. Ob. Cit. Pág. 4.

El mismo autor señala que un auto debe ser necesariamente motivado, bajo responsabilidad. Y debe contener:

1. Lugar y fecha de su expedición.
2. El número correlativo que corresponda al expediente
3. La descripción correlativamente enumerada de los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la decisión, la que se sujeta al mérito de lo actuado y al derecho.
4. La expresión clara y precisa de lo que se decide y ordena, respecto del punto controvertido.
5. El plazo para su cumplimiento si fuera el caso
6. Excepcionalmente el auto puede señalar costas y pago de multa. Los autos llevan media firma del Juez y firma entera del Secretario (Especialista Legal).

Agrega que el auto tiene semejanzas y diferencias con la sentencia:

1. El auto se expide dentro de la tramitación del proceso; la sentencia, al final.
2. El auto resuelve algún aspecto controvertido dentro del proceso; la sentencia, pone final mismo.
3. El auto consta de dos partes: considerando y decisión; en cambio la sentencia de tres partes: parte expositiva, considerativa, y resolutive.

LA SENTENCIA.-

Cárdenas Ticona señala que la sentencia, **como acto jurídico procesal**, es aquella resolución que emana de los Magistrados y mediante la cual se decide la causa o punto sometido a su conocimiento o se resuelven las pretensiones de las partes o se disponen medidas procesales¹⁹⁴.

El mismo autor dice: **como documento** la sentencia, es la pieza procesal escrita y suscrita por el Juez que contiene el texto de la decisión emitida. Como documento público, debe cumplir una serie de requisitos exigidos por la ley

¹⁹⁴ CÁRDENAS TICONA, José Antonio. Ob. Cit. pág. 5.

para que tenga: validez, eficacia y fuerza vinculatoria. La sentencia como acto jurídico procesal: es una operación mental analítica y crítica¹⁹⁵.

Cárdenas Ticona explica los pasos a seguir para elaborar una sentencia y dice: Hoy en día no sólo se considera como simple operación lógica, sino como un acto procesal del Juez que incluye diversas actividades afines.

- a) La primera operación mental del Juez está relacionada con la demanda, se trata de saber si en el primer plano de examen, la pretensión en ella contenida debe ser amparada o rechazada. Luego se examinará si el material suministrado en el expediente es suficiente para amparar una decisión (medios probatorios); en caso que no exista los elementos necesarios y no tenga la certeza debida el Juez, puede ordenar medios probatorios de oficio.
- b) En segundo lugar, el Juez hace un examen analítico-crítico de los hechos. Es decir que el Juez está frente a un conjunto de hechos narrados por las partes (demanda, contestación); así como las pruebas que las partes han producido para demostrar sus afirmaciones (tesis).

En esta operación analítico-crítica, el Juez compulsa los documentos, escucha a los testigos, busca el parecer de los especialistas (peritos), saca conclusiones de los hechos conocidos construyendo por conjeturas los desconocidos; y como un historiador, el Juez reconstruye los hechos pasados que dieron lugar al conflicto.

Luego de reconstruidos los hechos, el Juez hace un diagnóstico para determinar el derecho que corresponde; esto se le conoce como la SUBSUNCIÓN, que viene a ser el enlace lógico de una situación particular, específica y concreta, con la previsión abstracta, genérica e hipotética contenida en la ley.

¹⁹⁵ CÁRDENAS TICONA, José Antonio. Ob. Cit. Pág. 5.

La ley que le corresponda al hecho, no es la que ha sido invocada, sino la adecuada a los hechos. Para ello el Juez debe tener en cuenta el aforismo IURA NOVI CURIA, contenido en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil “El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes” (este último se le conoce como el Principio de Congruencia)¹⁹⁶.

MOTIVACIÓN.-

Desde el punto de vista deóntico, específicamente desde el punto de vista del "deber-ser jurídico", la motivación de las resoluciones judiciales constituye un deber jurídico, instituido por la norma jurídica de máxima jerarquía en el ordenamiento jurídico nacional¹⁹⁷.

1. ¿Cuál es la finalidad de las resoluciones judiciales?

El principio procesal de las resoluciones judiciales se halla consagrado en el inciso 5º del artículo 139º de la Constitución, el cual tiene por finalidad principal el del permitir a los justiciables al razonamiento lógico empleado por las instancias de mérito para justificar sus decisiones jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente su derecho de defensa, cuestionando de ser el caso el contenido y la decisión asumida¹⁹⁸.

2. ¿Cómo debe estar dada una resolución judicial?

Esta motivación escrita de las resoluciones judiciales constituye un deber de los magistrados tal como lo establecen los artículos 50º inciso 6, 122º

¹⁹⁶ CÁRDENAS TICONA, José Antonio. Ob. Cit. Pág. 6-7.

¹⁹⁷ MIXAN MASS, Florencio. Ob. Cit. Pág. 1

¹⁹⁸ Revista de Análisis Especializada de Jurisprudencia. RAE. Jurisprudencia Procesal Civil. La Motivación de Resoluciones Judiciales. Octubre 2008. pág.207. En <http://www.raejurisprudencia.com.pe/>

inciso 3 del Código Procesal Civil y el artículo 12º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y dicho deber implica que los juzgadores señalen en forma expresa la ley que aplican con el razonamiento jurídico al que arribaron, así como los fundamentos fácticos que sustentan su decisión, respetando los principios de jerarquía de normas y de congruencia¹⁹⁹.

3. ¿Qué debe contener una resolución judicial?

Del análisis de la sentencia de vista acotada se desprende que la confirmatoria dispuesta por la Sala revisora no cumple con el principio de motivación de las resoluciones judiciales toda vez que si bien expone los fundamentos de hecho en que se sustenta para rechazar las alegaciones de la ejecutante no cita norma jurídica en que se apoya su decisión en clara infracción a las normas antes acotadas además de que ni siquiera confirmó la apelada con la facultad prevista en el mencionado artículo 12º de la Ley Orgánica del Poder Judicial pues solo señala que aquella se pronuncia sobre el derecho preferente del tercerista lo que guarda estrecha relación con el petitorio de la acción incoada, consecuentemente al haberse procedido de esta forma se ha configurado la causal denunciada debiendo decretarse la nulidad de la de vista²⁰⁰.

4. ¿En qué consiste el deber de motivación?

Conforme a lo establecido en el inciso 3 del artículo 122º del Código Procesal Civil, toda resolución debe contener los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos fundamentos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado, norma que concuerda con el deber de motivación de las resoluciones judiciales consagradas en el artículo 139 inc. 5 de la Constitución, así como el artículo 50º inc. 6 del Código Procesal Civil; y con el inciso 4 del artículo 122º del mismo Código que dispone que las

¹⁹⁹ Revista de Análisis Especializada de Jurisprudencia. RAE. Ob. Cit. Pág. 207.

²⁰⁰ Revista de Análisis Especializada de Jurisprudencia. RAE. Ob. Cit. Pág. 207.

resoluciones deberán contener la expresión clara y precisa de lo que se decide respecto de todos los puntos controvertidos²⁰¹.

5. ¿Es una garantía constitucional?

De acuerdo al inciso tercero del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución, es principio y derecho de la función jurisdiccional: la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional; asimismo se ha materializado como garantía constitucional la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan²⁰².

6. ¿Cuál es la relación entre la motivación escrita y el debido proceso?

Conforme se constata de la resolución de vista, materia del recurso, la Sala Superior hizo mención, en cuanto a los fundamentos de derecho, únicamente al artículo setecientos veintitrés del Código Procesal Civil, sin dar mayor motivación al respecto; por consiguiente, se concluye que se ha incurrido en la causal prevista por el inciso tercero del artículo trescientos ochenta y seis del Código Procesal Civil, vulnerándose el derecho al debido proceso del recurrente, debiendo ampararse el recurso en este extremo²⁰³.

7. ¿Cuáles son los efectos de una resolución con motivación defectuosa?

La Sala Superior ha utilizado un razonamiento arbitrario que ha devenido en una motivación defectuosa de la sentencia vulnerándose el principio

²⁰¹ Revista de Análisis Especializada de Jurisprudencia. RAE. Ob. Cit. Pág. 208.

²⁰² Revista de Análisis Especializada de Jurisprudencia. RAE. Ob. Cit. Pág. 208.

²⁰³ Revista de Análisis Especializada de Jurisprudencia. RAE. Ob. Cit. Pág. 208.

lógico de no contradicción, pues a pesar que la Corte Suprema se ha pronunciado sobre la legitimidad y éxito del cobro del giro bancario (...) ²⁰⁴

8. ¿Qué se debe entender por motivación?

La motivación es esencial en los fallos, ya que los justiciables deben saber las razones por las cuales se ampara o desestima una demanda, ya que a través de su aplicación efectiva se llega a una recta administración de justicia, evitándose con ello arbitrariedades, y además permitiendo a las partes ejercer adecuadamente su derecho de impugnación, planteando al superior jerárquico, las razones jurídicas que sean capaces de poner de manifiesto, los errores que puede haber cometido el Juzgador ²⁰⁵.

9. ¿Es necesario la motivación en los decretos?

El inciso quinto del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Estado señala que son principios y derechos de la función jurisdiccional la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan ²⁰⁶.

10. ¿Qué aspectos debe considerar la motivación de una sentencia?

(...) Así como el deber de motivar las resoluciones judiciales, bajo sanción de nulidad con mención expresa de la ley aplicable y a la exigencia de que toda resolución contenga el número de orden que les corresponde dentro del expediente, por cuanto la recurrida adolece de fundamentación jurídica en tanto que sólo se hizo mención a un articulado sin efectuar

²⁰⁴ Revista de Análisis Especializada de Jurisprudencia. RAE. Ob. Cit. Pág. 208.

²⁰⁵ Revista de Análisis Especializada de Jurisprudencia. RAE. Ob. Cit. Pág. 209.

²⁰⁶ Revista de Análisis Especializada de Jurisprudencia. RAE. Ob. Cit. Pág. 209.

análisis lógico jurídico del mismo, presentando una motivación aparente desde que se sustenta en una apreciación subjetiva de los hechos²⁰⁷.

11. ¿Cuál es el sustento legal de las motivaciones?

La obligatoriedad de la motivación de las resoluciones judiciales se halla recogida a su vez en el inciso sexto del artículo cincuenta del Código Procesal Civil, así como también en el inciso tercero del artículo ciento veintidós del acotado el cual expresamente prevé que las resoluciones deben contener la mención sucesiva de los puntos sobre los que versa relación con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado; dispositivo que debe concordarse con lo previsto en el inciso cuarto del precitado artículo ciento veintidós que obliga a los órganos de instancias a emitir pronunciamiento sobre todos los puntos controvertidos en el proceso²⁰⁸.

12. ¿Cuáles son los fines de la motivación?

La doctrina reconoce como fines de la motivación: a) que el Juzgador ponga de manifiesto las razones de su decisión, por el legítimo interés del justiciable y de la Comunidad en conocerlas; b) que se pueda comprobar que la decisión judicial adoptada responde a una determinada interpretación y aplicación del Derecho; c) Que las partes, y aún la Comunidad, tengan la información necesaria para recurrir, en su caso, la decisión; y d) Que los Tribunales de Revisión tengan la información necesaria para vigilar la correcta interpretación y aplicación del Derecho²⁰⁹.

²⁰⁷ Revista de Análisis Especializada de Jurisprudencia. RAE. Ob. Cit. Pág. 209.

²⁰⁸ Revista de Análisis Especializada de Jurisprudencia. RAE. Ob. Cit. Pág. 209.

²⁰⁹ Revista de Análisis Especializada de Jurisprudencia. RAE. Ob. Cit. Pág. 210.

13. ¿En qué consiste las manifestaciones de la motivación?

Olsen A. Guirardi, citado en la Revista de Análisis Especializada de Jurisprudencia, la motivación de las sentencias, como vicio procesal, tiene dos manifestaciones; por un lado se ubica la falta de motivación y por el otro la defectuosa motivación, la cual, a su vez, se divide en tres agravios procesales: el de la motivación aparente, el de la motivación insuficiente y el de la motivación defectuosa en sentido estricto (Razonamiento Judicial, Olsen A. Guirardi, Academia de la Magistratura. Lima- Perú, 1997, pp. 129 y ss)²¹⁰.

14. ¿Cuáles son las funciones de la motivación?

La motivación de las resoluciones cumple esencialmente dos funciones: endoprocesal y extra procesal. La primera, tiene lugar al interior del proceso, respecto de las partes, terceros legitimados y de los propios órganos jurisdiccionales, y comprende las siguientes dimensiones: i. tiene por función específica convencer y persuadir a las partes de la razonabilidad de los argumentos y la justicia de la decisión adoptada, tratando de eliminar la sensación que pudieran tener las partes sobre la presunta arbitrariedad o irrazonabilidad de la decisión judicial; ii. Permite la viabilidad y efectividad de los recursos impugnatorios, haciendo posible su análisis crítico y expresión de errores de hecho y de derecho, así como agravios, vía apelación o casación; y iii. Permite el control del órgano jurisdiccional superior, quien deberá establecer si se han cumplido con las normas imperativas que garantizan el derecho a un debido proceso, y particularmente, con el deber constitucional de la motivación adecuada y suficiente, verificando la razonabilidad de los argumentos fácticos y jurídicos que sustentan su decisión. La segunda función – extraprocesal- tiene lugar en el ámbito externo del proceso y está dirigida al control del comportamiento funcional de los órganos jurisdiccionales, y

²¹⁰ Revista de Análisis Especializada de Jurisprudencia. RAE. Ob. Cit. Pág. 210.

se expresa en las siguientes formas: a) haciendo accesible el control de la opinión pública sobre la función jurisdiccional, a través del principio de publicidad de los procesos, conforme al postulado contenido en el inciso veinte del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Estado, el cual prescribe que toda persona tiene derecho a formular análisis y críticas a las resoluciones y sentencias judiciales con las limitaciones de ley; y b) expresa la vinculación del Juez independiente a la Constitución y la ley, derivándose responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal por el ejercicio irregular o arbitrario de su función²¹¹.

IMPUGNACIÓN.-

La impugnación es una categoría propia de los actos procesales. Está basada en la disconformidad de alguna de las partes con cualquier resolución judicial. Los defectos de forma o de fondo podrán alegarse a través de la impugnación a efectos de lograr su reforma, su modificación, la integración, o la sustitución de cualquier resolución judicial²¹².

Desde la perspectiva de los justiciables la doble instancia se convierte en un derecho fundamental, inmerso en nuestro medio en el debido proceso, pero, además, reconocido de manera autónoma a través de la pluralidad de instancias, que ha sido recogido por nuestra Constitución Política del Estado, a través del inc. 3 del artículo 139, relativo al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, así como a través del inc. 6 del mismo artículo, reconociendo de manera autónoma la pluralidad de instancias.²¹³

En consecuencia, la pluralidad de instancias es un derecho fundamental, reconocido por nuestra Constitución Política del Estado de manera expresa, Se convierte en garantía de las partes que intervienen en los procesos, para evitar los errores o la posibilidad de que las sentencias

²¹¹ Revista de Análisis Especializada de Jurisprudencia. RAE. Ob. Cit. pág.211

²¹² MORALES GODO, Juan. Ob. Cit. Pág. 66.

²¹³ MORALES GODO, Juan. Ob. Cit. Pág. 67.

contengan vicios de hecho de derecho que perjudiquen su eficacia. Este derecho fundamental se hace efectivo a través de los medios de impugnación que regula el Código procesal para las distintas instancias.²¹⁴

El Art. 355 del Código Procesal Civil, prescribe que “Mediante los medios impugnatorios las partes o terceros legitimados solicitan que se anule o revoque, total o parcialmente, un acto procesal presuntamente afectado por vicio o error”²¹⁵.

El Art. 356 del Código Procesal Civil, establece los institutos de los remedios y los recursos. Los primeros, son medios de impugnación dirigidas a los actos procesales no contenidos en resoluciones expresamente previstos en la ley. Los recursos pueden formularse por quien se considere agraviado con una resolución²¹⁶.

Artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, señala que “las resoluciones judiciales son susceptibles de revisión, con arreglo a ley, en una instancia superior. La interposición de un medio de impugnación constituye un acto voluntario del justiciable. Lo resuelto en segunda instancia constituye cosa juzgada. Su impugnación sólo procede en los casos previstos en la ley”²¹⁷.

Emitido la sentencia de vista en segunda instancia por el superior jerárquico del órgano jurisdiccional, que pone fin al proceso, solo en casos previstos, de conformidad con el artículo 384 del Código Procesal Civil, puede ser impugnado en casación, para que sea resuelto por la Corte Suprema de Justicia, que tiene por fines, la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional²¹⁸.

²¹⁴ MORALES GODO, Juan. Ob. Cit. Pág. 67.

²¹⁵ Código Civil, Código Procesal Civil, Ob. Cit. pág. 486.

²¹⁶ Código Civil, Código Procesal Civil. Ob. Cit. pág. 486.

²¹⁷ Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica Del Poder Judicial y Ley Orgánica del Ministerio Público. Colección Jurídica. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Banco de Crédito –BCP. pág.30

²¹⁸ Código Civil, Código Procesal Civil. Ob. Cit. pág. 495

Ricardo León Pastor, señala: “Para que la decisión sea racional y razonable requiere desarrollar los argumentos que sirven de base para justificar la decisión tomada. Ello implica, primero, establecer los hechos materia de controversia para desarrollar luego la base normativa del raciocinio que permita calificar tales hechos de acuerdo a las normas pertinentes. En materia de control disciplinario, si los hechos califican en dichas normas, la decisión será por encontrar responsabilidad disciplinaria. Si los hechos no califican en las normas convocadas, la decisión desestimada la atribución de una falta de disciplina profesional”²¹⁹.

Estructura básica.

León Pastor, señala que todo raciocinio que pretenda analizar un problema dado para llegar a una conclusión requiere, al menos tres pasos: formulación del problema, análisis y conclusión. Esta es una metodología de pensamiento muy asentada en la cultura occidental²²⁰.

El autor, sigue desarrollando el tema y dice: En las matemáticas, por ejemplo, al planteamiento del problema le sigue el raciocinio (análisis) y luego la respuesta. En las ciencias experimentales, a la formulación del problema le sigue el planteamiento de las hipótesis y la verificación de las mismas (ambas etapas se pueden comprender en una etapa analítica) para llegar luego a la conclusión. En los procesos de toma de decisión en el ámbito empresarial o administrativo, al planteamiento del problema le sigue la fase de análisis para terminar con la toma de la decisión más conveniente.

Continúa afirmando, de igual forma, en materia de decisiones legales, se cuenta con una estructura tripartita para la redacción de decisiones: la parte expositiva, la parte considerativa y la parte resolutive. Tradicionalmente, se ha identificado con una palabra inicial a cada parte: VISTOS (parte expositiva en la que se plantea el estado del proceso y cuál es el problema a dilucidar),

²¹⁹ LEON PASTOR, Ricardo. Ob. Cit. pág. 15.

²²⁰ LEON PASTOR, Ricardo. Ob. Cit. pág. 15.

CONSIDERANDO (parte considerativa, en la que se analiza el problema) y SE RESUELVE (parte resolutive en la que se adopta una decisión)²²¹.

La parte expositiva contiene el planteamiento del problema a resolver. Puede adoptar varios nombres: planteamiento del problema, tema a resolver, cuestión en discusión, entre otros. Lo importante es que se defina el asunto materia de pronunciamiento con toda la claridad que se posible. Si el problema tiene varios aristas, aspectos, componentes o imputaciones, se formularán tantos planteamientos como decisiones vayan a formularse²²².

La forma de redacción tradicional de las resoluciones judiciales en el Perú tiene varias debilidades: uso de lenguaje arcaico (“autos y vistos”), desorden al momento de plantear la cuestión central, un lenguaje poco amigable para el lector (escribir fojas sesenta y nueve y setenta y uno, por ejemplo)²²³.

La parte considerativa contiene el análisis de la cuestión en debate; puede adoptar nombres tales como “análisis”, “consideraciones sobre hechos y sobre derecho aplicable”, “razonamiento”, entre otros. Lo relevante es que contemple no sólo la valoración de los medios probatorios para un establecimiento razonado de los hechos materia de imputación, sino también las razones que desde el punto de vista de las normas aplicables fundamentan la calificación de los hechos establecidos²²⁴.

Según el autor, el contenido mínimo de una resolución sería el siguiente:

- a. **Materia:** ¿Quién plantea, qué imputación sobre quién?, ¿cuál es el problema o la materia sobre la que se decide?.
- b. **Antecedente procesales:** ¿Cuáles son los antecedentes del caso?, ¿qué elementos o fuentes de prueba se ha presentado hasta ahora?
- c. **Motivación sobre hechos:** ¿Qué razones existen para, valorando los elementos de prueba, establecer los hechos del caso?

²²¹ LEON PASTOR, Ricardo. Ob. Cit. pág. 15.

²²² LEON PASTOR, Ricardo. Ob. Cit. pág. 16.

²²³ LEON PASTOR, Ricardo. Ob. Cit. pág. 16.

²²⁴ LEON PASTOR, Ricardo. Ob. Cit. pág. 16.

- d. **Motivación sobre derechos:** ¿Cuáles son las mejores razones para determinar qué norma gobierna el caso, y cuál su mejor interpretación?.
- e. **Decisión.**-En este marco, una lista esencial de puntos que no deben olvidarse al momento de redactar una resolución judicial son los siguientes:
 - ¿se ha determinado cuál es el problema del caso?
 - ¿Se ha individualizado la participación de cada uno de los imputados o intervinientes en el conflicto?
 - ¿Existen vicios procesales?
 - ¿Se han descrito los hechos relevantes que sustentan la pretensión o pretensiones?.
 - ¿Se han actuado las pruebas relevantes?
 - ¿Se ha valorado la prueba relevante para el caso?
 - ¿Se ha descrito correctamente la fundamentación jurídica de la pretensión?
 - ¿Se elaboró un considerando final que resuma la argumentación de base para la decisión?
 - La parte resolutive, ¿señala de manera precisa la decisión correspondiente?
 - ¿La resolución respeta el principio de congruencia?

Si los jueces del Poder Judicial, siguieran y respetaran esta línea, satisfarían a cabalidad las controversias jurisdiccionales, en tal sentido, no existirían las abundantes acciones de garantías constitucionales como el habeas corpus y el amparo.

CAPITULO V

LIBERTAD INDIVIDUAL

5.1. LIBERTAD INDIVIDUAL

5.1.1. DEFINICIÓN.

Luis Razeto Migliaro, señala que “La libertad individual es el valor constitutivo de la persona humana en cuanto tal, fundamento de sus deberes y derechos, conforme al cual cada uno puede decidir autónomamente sobre las cuestiones esenciales de su vida, haciéndose responsable ante la sociedad de las consecuencias de sus decisiones y de los resultados de su propia acción. En las distintas épocas y contextos históricos la libertad de las personas tiene expresiones y formas de realización diferentes, más o menos profundas, dando también lugar a distintos tipos de exceso y distorsiones. En la época moderna la libertad individual se presenta fundamentalmente en tres niveles de actividad: la libertad de pensamiento y de opinión, la libertad política y de asociación, y la libertad de trabajo e iniciativa económica”²²⁵.

No cabe duda que a la afirmación progresiva de estas libertades se puede atribuir el inmenso desarrollo, profundamente revolucionario en su contenido, que han tenido las ciencias, la política y la producción en las sociedades modernas y contemporáneas. Cabe observar, al mismo tiempo que este desarrollo multifacético ha dado lugar a crecientes procesos de *socialización* de las mismas ciencias, política y producción; socialización que implica tanto la distribución de los beneficios (conocimientos, poder, bienes y servicios) de tales actividades entre los miembros de la sociedad, como también el despliegue de éstas a través de grandes asociaciones y organizaciones. La socialización - hija legítima de y complemento necesario de

²²⁵ RAZETO MIGLIARO, Luis (Artículo publicado en la Revista CPU Estudios Sociales, Nº 28-29, 1981). pág.2 <http://www.luisrazeto.net/content/libertad-individual-y-estado>

la libertad individual - ha tenido, sin embargo, límites y distorsiones relevantes (desigualdades, masificación, relaciones de dominio, antagonismos) cuya raíz puede encontrarse en el hecho que la libertad individual no ha sido nunca un bien generalizado, que grandes grupos humanos han llegado apenas a los umbrales de su ejercicio, quedando sus vidas condicionadas por los efectos de las libertades de otros más que por la actuación de la libertad propia²²⁶.

Además, la afirmación irrestricta de la libertad individual no acompañada suficientemente del reconocimiento y promoción de otros valores esenciales de la persona humana como ser social, cuales son la fraternidad y solidaridad, puede conducir y de hecho ha conducido a menudo a un empobrecimiento de la dimensión moral de las actividades y comportamientos individuales y colectivos, a la acentuación de las injusticias y desigualdades sociales, a una conflictualidad permanente y no siempre constructiva. En las sociedades con un grado de desarrollo limitado y desigualdad – como la nuestra- el énfasis que se ha de poner en estos valores de solidaridad y ayuda mutua deriva fundamentalmente de la necesidad de encontrar soluciones globales y rápidas al problema de la satisfacción de las necesidades básicas en extendidos sectores sociales, lo cual es una condición necesaria para la existencia misma de la libertad individual²²⁷.

5.1.2. La libertad personal como derecho fundamental.

Libertad Personal, para definir o por lo menos acercarnos hacia un concepto legal de libertad personal, debemos tener en cuenta que éste es intrínseco en la especie humana como derecho inalienable, con las únicas limitaciones del respeto hacia otro semejante con su mismo derecho. Podemos recordar a nivel internacional las dos grandes revoluciones que dieron mayor realce a las instituciones de derecho fundamental como fueron la revolución francesa de 1789 y revolución americana iniciándose 1765 de este modo

²²⁶ RAZETO MIGLIARO, Luis. Ob. Cit. Pág.2.

²²⁷ RAZETO MIGLIARO, Luis. Ob. Cit. pág. 3.

encontramos los primeros reconocimientos legales a la libertad individual, como derecho fundamental universal²²⁸.

BURGOA ORIHUELA Ignacio, citado por Pablo Sánchez Velarde en su obra Manual de Derecho Procesal Penal, señala “el derecho a la libertad es protegido por la Constitución y las normas internacionales como valor supremo de la persona, como condición sine qua non para que el individuo desarrolle su personalidad”²²⁹.

El art. 2, inc.24 apartado f, primera parte de la Constitución, reconoce, de un lado, a toda persona el derecho a la libertad y seguridad personales y, de otro lado, establece la excepción a esta regla: "Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en flagrante delito. En todo caso el detenido debe ser puesto, dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia, a disposición del Juzgado que corresponde”.

Conforme a este mandato, todas las personas tienen derecho a la libertad, "no se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo los casos previstos por la ley" (art. 2, inc. 24, ap. b), así como que se señale "sin dilación" y bajo responsabilidad el lugar donde se halla la persona detenida (art. 2 inc. 24 ap. h)”²³⁰.

La detención aparece como una medida cautelar cuya función es asegurar el mantenimiento de un estado de hecho o de derecho durante el desarrollo de un proceso, es decir, asegura, bajo estrictas garantías, la sujeción al proceso penal de la persona a quien se imputa un delito²³¹.

²²⁸ ANGLES YANQUI, Gerard Henry. “Derechos Conexos a la Libertad en los Procesos de Habeas Corpus en Perú”. pág. 2
<http://blog.pucp.edu.pe/blog/derechoconstitucionalperu/2010/10/14/derechos-conexos-a-la-libertad-en-los-procesos-de-habeas-corpus-en-el-peru/>

²²⁹ SÁNCHEZ VELARDE, Pablo Wilfredo. Manual de Derecho Procesal Penal. pág. 59.

²³⁰ SANCHEZ VELARDE, Pablo Wilfredo. Ob. Cit. pág. 61.

²³¹ SANCHEZ VELARDE, Pablo Wilfredo. Ob. Cit. pág. 61.

La regulación constitucional va aún más allá: comprende tanto las privaciones de libertad anterior (detención preventiva y judicial) como posteriores a la imposición de la condena e, igualmente, la forma en que tal privación de libertad debe llevarse a cabo en la práctica. De esta manera, se regula específicamente la detención preventiva e inclusive la duración máxima de la misma. En cuanto a la regulación de la detención dictada en el curso de un proceso penal, se prevé que sea realizada en la ley procesal²³².

De todo esto se desprende que, siendo la libertad personal un derecho fundamental, las medidas cautelares que la restringen deben de aplicarse con "suma cautela" cuando sea necesario y mediante resolución motivada. Su aplicación debe ser una "consecuencia directa de una valoración acerca de la existencia de indicios de criminalidad". Por tanto, su adopción es compatible con el principio de presunción de inocencia, pues el procesado es considerado inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad²³³.

Las normas internacionales ponen de relieve, junto al derecho a la vida, el derecho a la libertad de la persona, como exigencia genérica de la naturaleza humana. El art. 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 1966²³⁴. En éste se establece que "todo individuo tiene derecho a la libertad y seguridad personales" y se prohíbe la privación de la libertad "salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta". Disposición similar contiene el art. 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica de 1,969²³⁵, así como el artículo 2 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1,950.

²³² SANCHEZ VELARDE, Pablo Wilfredo. Ob. Cit. pág. 61.

²³³ SANCHEZ VELARDE, Pablo Wilfredo. Ob. Cit. pág. 62.

²³⁴ De 16 de diciembre de 1,996, ratificado por el Perú en la décimo sexta disposición general de la Constitución de 1979.

²³⁵ De 22 de noviembre de 1,969; ratificada por el Perú en la disposición general décimo sexta de la Constitución de 1,979. En esta se expresa textualmente "Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales."

5.1.3. Las excepciones constitucionales.-

Pablo SANCHEZ VELARDE, en su obra precitada, señala que hay dos excepciones que, prevé la Constitución respecto a la restricción de la libertad personal:

En primer lugar, la excepción se refiere al plazo de duración de la detención, prevista en el primer párrafo del apartado f) del inc.24 del artículo 2 de la Carta Política, que constituye norma general. Es decir, la detención practicada por la policía en flagrancia, por los delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas, tendrá una duración hasta por quince días.

La segunda excepción es la prevista en el artículo 137 de la Constitución. Esta norma establece el régimen de excepción en casos de "estado de emergencia". Este implica la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendido en los incisos 9,11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f) del artículo 2.

Los abusos que pueden cometerse, en esa situación excepcional, mediante la privación de la libertad personal son impredecibles; sobre todo si lo previsto como provisional se convierte en permanente y la autoridad político-militar que asume el control del orden interno no colabora con las autoridades judiciales²³⁶.

Como garantía y respuesta inmediata contra las detenciones arbitrarias, la Constitución ha previsto el recurso de habeas corpus (art. 200.1 de la Constitución Política del Perú) y en el artículo 26 del Código Procesal Constitucional.

²³⁶ SANCHEZ VELARDE, Pablo Wilfredo. Ob. Cit. pág. 63.

5.1.4. Detenciones legales y detenciones arbitrarias.

Las únicas detenciones correctas son las que prescriben la Constitución, es decir, por mandato motivado y escrito del Juez competente (Juez Penal y Sala Penal) y la detención por flagrante delito²³⁷.

En los dos casos señalados, la Constitución le da un margen a la policía, para poner al detenido a disposición del juez dentro del término de 24 horas tratándose de delitos comunes y le concede a la policía un término máximo de quince días en el caso de los delitos especiales narcotráfico, espionaje y terrorismo²³⁸.

Cualquier otro tipo de detención deviene en arbitraria y por ende es pasible de la acción de Hábeas Corpus contra su autor. Así podemos señalar, los siguientes casos de detención arbitraria. Las frecuentes detenciones que realiza la policía con el propósito de investigar los hechos referentes a denuncias y sin que medie orden judicial o flagrante delito. Las detenciones legales devienen en arbitrarias cuando la policía dilata el término anteriormente señalado para ponerlo a disposición del Juez. La detención judicial cuando sobrepasa las 24 horas sin que se haya iniciado la declaración instructiva. La dilatación del tiempo para la excarcelación de un liberado por orden judicial, las “batidas” indiscriminadas que realiza la policía como medida de profilaxis social²³⁹.

5.1.4.1. Detención preventiva policial.

La redacción de la última parte del parágrafo g) del inc.20 del artículo 2 de la Constitución de 1979, era equívoca, pues daba a entender que además de las detenciones legales por orden judicial y por flagrante delito, había una tercera, la detención preventiva que podía hacer la policía por un término no mayor de quince días en los delitos de tráfico ilícito de drogas, espionaje y

²³⁷ ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Ob. Cit. pág. 133.

²³⁸ ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Ob. Cit. pág. 134.

²³⁹ ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Ob. Cit. pág. 134.

terrorismo, cuando lo que variaba era únicamente el tiempo, pero no era facultada discrecional reservada a la policía²⁴⁰.

La Constitución vigente en el párrafo f) del inc. 24 artículo 2 deja perfectamente aclarado que no se trata de una detención a libre iniciativa de la policía, sino que tienen que mediar las dos condiciones de orden judicial o de flagrante delito cuando dice: “Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas”. “En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al Juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término”.²⁴¹

5.1.4.2. Operativos y detenciones arbitrarias.

La policía acostumbra a realizar las llamadas redadas, periódicamente o con ocasión de una festividad nacional, tal como Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo a manera de profilaxis social, en las cuales detiene generalmente a indocumentados y a elementos sospechosos de haber cometido delitos. En este caso el propósito puede ser plausible, pero la medida es inconstitucional, pues no media autorización judicial ni flagrante delito. Es cierto que en esas detenciones indiscriminadas puede haber requisitorios, es decir, solicitados por el Poder Judicial y consiguientemente que están con orden de detención, pero la mayor parte de los detenidos no suelen estar en esa situación. Lo mismo que debe hacer la policía para no incurrir en una detención arbitraria, es realizar la calificación inmediata de los detenidos en la redada²⁴².

²⁴⁰ ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Ob. Cit. Pág. 134.

²⁴¹ ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Ob. Cit. Pág. 135.

²⁴² ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Ob. Cit. Pág. 135.

5.2. DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA.

Gregorio PECES-BARBA, citado por Raúl Chanamé Orbe, en su obra Comentarios a la Constitución, señala: “El concepto de derechos fundamentales comprende: “tanto los presupuestos éticos como los componentes jurídicos, significando la relevancia moral de una idea que compromete la dignidad humana y sus objetivos de autonomía moral, y también la relevancia jurídica que convierte a los derechos en forma básica material del ordenamiento, y es instrumento necesario para que el individuo desarrolle en la sociedad todas sus potencialidades. Los derechos fundamentales expresan tanto una moralidad básica como una juridicidad básica²⁴³”.

Consecuentemente, si bien el reconocimiento positivo de los derechos fundamentales (comúnmente, en la Norma Fundamental de un ordenamiento) es presupuesto de su exigibilidad como límite al accionar del Estado y de los propios particulares, también lo es su connotación ética y axiológica, en tanto manifiestas concreciones positivas del principio – derecho de dignidad humana, preexistente al orden estatal y proyectado en él como fin supremo de la sociedad y del Estado²⁴⁴.

Es por ello que el Capítulo I del Título I de la Constitución, denominado “Derechos Fundamentales de la Persona”, además de reconocer al principio derecho de dignidad humana como el presupuesto jurídico de los demás derechos fundamentales (art.1º) y de enumerar a buena parte de ellos en su art. 2º, prevé en su art. 3º que dicha enumeración no excluye los demás derechos reconocidos en el texto constitucional (vg., los derechos fundamentales de carácter social y económico y los políticos: “ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de forma republicana de gobierno”²⁴⁵).

²⁴³ CHANAMÉ ORBE, Raúl. Ob. Cit. pág. 101.

²⁴⁴ CHANAMÉ ORBE, Raúl. Ob. Cit. pág. 101.

²⁴⁵ CHANAMÉ ORBE, Raúl. Ob. Cit. pág. 101.

De esta manera, la enumeración de los derechos fundamentales previstos en la Constitución, y la cláusula de los derechos implícitos o no enumerados, da lugar que en nuestro ordenamiento todos los derechos fundamentales que incorpora en el orden constitucional, se deriven de los mismos principios y valores que sirvieron de base histórica y dogmática para el reconocimiento de los derechos fundamentales²⁴⁶.

Raúl Chanamé Orbe, en su precitada obra, desarrolla ampliamente este tema y señala: Derechos fundamentales son aquellos derechos subjetivos garantizados con rango constitucional que se considera como esenciales en el sistema político que la Constitución funda y que están especialmente vinculados a la dignidad de la persona humana.

En algunos países, pueden ser explícitos o implícitos. En el caso del Perú son explícitos, aunque el Tribunal Constitucional, en la práctica, está desarrollando en ocasiones a estos derechos fundamentales explícitos contenidos nuevos que viene a ser casi derechos fundamentales tácitos; que vienen siendo convocados para el amparo de los ciudadanos como puede verificarse de la práctica jurisdiccional en temáticas referentes al derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho a la integridad física y moral, la inviolabilidad del domicilio, entre otros²⁴⁷.

Los derechos fundamentales son aquellos que protegen a la persona de la posible arbitrariedad del Estado o de otras personas y establecen de manera positiva sus libertades. Estos derechos, por su importancia, están incluidos en la Constitución, pero esto no quiere decir que los enumerados aquí sean los únicos existentes. Estos derechos fundamentales no han sido otorgados por los legisladores, sino que pertenecen a nuestra naturaleza misma de personas humanas. Son derechos que son anteriores y están por encima de cualquier norma legal u ordenamiento estatal²⁴⁸.

²⁴⁶ STC. Exp. 1417-2005.AA/TC.Fj.4.

²⁴⁷ CHANAMÉ ORBE, Raúl. Ob. Cit. pág. 103.

²⁴⁸ CHANAMÉ ORBE, Raúl. Ob. Cit. pág. 104.

En palabras del Tribunal Constitucional español “son elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, en cuanto ésta se configura como marco de una convivencia humana justa y pacífica, plasmada históricamente en el Estado de Derecho y, más tarde en el Estado Social y de Derecho o en el Estado Social y Democrático de Derecho, según la fórmula de nuestra Constitución (sentencia del Tribunal Constitucional 25/1981)²⁴⁹.

Junto a la dimensión axiológica, los derechos fundamentales deben ser observados desde una segunda perspectiva: la esfera individual. Siguiendo al Tribunal Constitucional español en su sentencia 25/1981 “los derechos fundamentales son derechos subjetivos, derechos de los individuos no sólo en cuanto derechos de los ciudadanos en sentido estricto, sino en cuanto garantizan un status o la libertad en un ámbito de existencia”²⁵⁰.

Cualquiera que sea la naturaleza que quiera darse a los derechos fundamentales, lo cierto es que, desde el punto de vista jurídico, su análisis y estudio debe realizarse a partir de su regulación en el ordenamiento, primero en la Constitución y luego, en su caso, en otras normas²⁵¹.

5.2.1.- ORÍGENES.

El término que inicialmente se le dio a los derechos fundamentales fue el de derechos individuales, influido por la concepción del derecho natural, bajo la consideración que los hombres tienen facultades anteriores en la formación del Estado. Con propiedad la denominación derechos fundamentales se remonta a la Francia pre-revolucionaria de 1770, en que se empezó a especular sobre el “droits fondamentaux”, que condujo directamente

²⁴⁹ CHANAMÉ ORBE, Raúl. Ob. Cit. pág. 104.

²⁵⁰ CHANAMÉ ORBE, Raúl. Ob. Cit. pág. 104.

²⁵¹ CHANAMÉ ORBE, Raúl. Ob. Cit. pág. 104.

al establecimiento de la “Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano” (1789)²⁵².

5.2.2.- DESARROLLO.

Su desarrollo doctrinario tiene la influencia de Jellinek y su “teoría de los Estados y derechos públicos subjetivos” que inspira la denominación “grundrechte”, que posteriormente se plasmó en la Constitución de Weimar (1919), que establece las reglas de juego legales entre el individuo y el Estado. Para la Ley Fundamental de Alemania (1949): “...los derechos fundamentales son los derechos consagrados, mantienen la estructura tradicional que ubica al Estado y a sus distintas manifestaciones orgánicas, en la posición de sujeto obligado” (9-3). Los franceses por medio de Maurice Hauriou aportaron que “los derechos individuales son a la vez instituciones jurídicas objetivas y derechos subjetivos” (Précis de Droit Constitutionnel, Sirey, Paris, primeras ediciones 1910, 1923 y 1929)²⁵³.

5.2.3. DEFINICIONES.

- Raúl Ferrero R, en su obra Ciencia Política. Teoría del Estado y Derecho Constitucional 8va Edición, 2000, citado por Raúl Chanamé Orbe, señala: “Los derechos fundamentales definidos desde la Declaración de la independencia de los Estados Unidos y más claramente a partir de la Revolución Francesa derivan de los ideas matrices: la libertad y la igualdad. Pueden dividirse por razón de sistemática, en derechos individuales o sea que le pertenecen al hombre, y derechos sociales, que tienden a la atenuación de las desigualdades económicas al amparo de los trabajadores y a realizar la función social de la propiedad²⁵⁴.”

²⁵² CHANAMÉ ORBE, Raúl. Ob. Cit. pág. 105.

²⁵³ CHANAMÉ ORBE, Raúl. Ob. Cit. pág. 105.

²⁵⁴ CHANAMÉ ORBE, Raúl. Ob. Cit. pág. 106.

- La raíz ontológica de los derechos fundamentales es la esencia humana, como realidad que no existe en sí misma separadamente, pero sí en cada hombre. De tal raíz emerge una proyección ideal, que eleva permanentemente a la persona hacia un mundo de valores (Jacques Maritain. L. Homme et L Etat. Dexieme Edition. Press Universitaires de France, París, 1965, pág. 81. Citado en los Derechos Humanos y su protección. Mario Alzamora Valdez, 2º edición)²⁵⁵.

5.2.4. JURISPRUDENCIA.

El Tribunal Constitucional define los derechos fundamentales “como bienes susceptibles de protección que permiten a la persona la posibilidad de desarrollar sus potencialidades en la sociedad. Esta noción tiene como contenido vinculante presupuestos éticos y componentes jurídicos que se desenvuelven en clave histórica. Éste es el sentido correcto en el cual debe concebirse el derecho a la pensión”²⁵⁶.

En su dimensión subjetiva, “los derechos fundamentales no solo protegen a las personas de las intervenciones injustificadas y arbitrarias del Estado y de terceros, sino que también facultan al ciudadano para exigir al Estado determinadas prestaciones concretas a su favor o defensa; es decir, este debe realizar todos los actos que sean necesarios a fin de garantizar la realización y eficacia plena de los derechos fundamentales. El carácter objetivo de dichos derechos radica en que ellos son elementos constitutivos y legitimadores de todo el ordenamiento jurídico, en tanto que comportan valores materiales o instituciones sobre los cuales se estructura (o debe estructurarse) la sociedad democrática y el Estado constitucional”²⁵⁷.

Los derechos fundamentales “no sólo tienen una vertiente subjetiva, sino también una dimensión objetiva, pues representan los valores materiales de

²⁵⁵ CHANAMÉ ORBE, Raúl. Ob. Cit. pág. 106

²⁵⁶ STC.Exp. Nº 0050-2004-PI/TC.Fj.72.

²⁵⁷ STC. Exp. 3330-2004-PA/TC. Fj.9

todo el sistema jurídico nacional y, en esa condición, conforman la legislación, administración y jurisdicción. En esa medida, el Tribunal considera que el amparo no sólo puede entenderse como un proceso en cuyo seno se diluciden problemas que atañen únicamente a las partes que en él participen, sino como una acción de garantía en la cual subyace un orden público, representado por los derechos constitucionales cuya defensa, en el ámbito de su competencia, la Norma Suprema ha encomendado al Tribunal Constitucional”²⁵⁸.

5.2.5. Artículo 2º inc.24. Derecho a la libertad y seguridad personales.

La libertad es un derecho esencial del ser humano, si bien es cierto no absoluto; si esencial, por cuanto “derecho fundamental” o “derecho humano” o de la “personalidad”, no del hecho de pertenecer a un Estado parte en alguna Convención de Derechos Humanos, sino que tiene como fundamento los atributos de la persona humana y que además, como lo estableció la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, en cuyo preámbulo se dijo: “los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana (...) sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”. Y es que, como derecho inherente de la persona humana, debe ser objeto de protección de todos los Estados, más aún si éstos son Estados Democráticos – como los latinoamericanos – protección que los Estados deben brindar a toda persona, incluyendo claro está, a quienes son sometidos al sistema jurídico penal en condición de acusados o procesados por un supuesto hecho delictivo²⁵⁹.

²⁵⁸ STC. Exp. 2050-2002-AA/TC. FJ.25

²⁵⁹ CHANAMÉ ORBE, Raúl. Ob. Cit. Pág. 165.

CAPÍTULO VI

DERECHOS CONSTITUCIONALES CONEXOS

6. DERECHOS CONSTITUCIONALES CONEXOS.

El artículo 3º de la Constitución Política del Perú, señala “La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno”²⁶⁰.

El artículo constitucional en referencia, establece la protección de los derechos no catalogados expresamente por la Carta Magna, en tanto se funden en la dignidad humana. Este artículo está en concordancia con la Cuarta Disposición Final y Transitoria que señala: “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los Tratados y Acuerdos Internacionales sobre la misma materia ratificada por el Perú”²⁶¹.

En nuestro ordenamiento jurídico, así como en la legislación internacional, los derechos conexos, no siempre estuvieron relacionados con los derechos fundamentales, sino con la figura de la ley de derechos de autor más conocidos como los *copyright*, y con derechos que no estén directamente relacionados con los de autor. El término proviene del francés, *droits voisins* y se suele traducir al inglés como *related rights o neighboring rights*²⁶². En el marco de las leyes anglosajonas, los derechos conexos son parte del marco

²⁶⁰ GUTIERREZ CAMACHO, Walter. Ob. Cit. Pág. 12.

²⁶¹ GUTIERREZ CAMACHO, Walter. Ob. Cit. Pág. 66.

²⁶² Tratado de la “Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión” Roma 26 de octubre de 1961.

jurídico del copyright, al igual que en nuestra legislación con los derechos de protección del autor²⁶³.

Teniendo estos antecedentes claros, ahora se sabe que los derechos conexos siempre serán relativos a proteger los intereses jurídicos de ciertos derechos principales por así llamarlos, o de existencia ideal y que contribuyen a una mayor protección frente a la vulneración de un derecho fundamental. Para el presente, son susceptibles de protección todas las personas que hayan sufrido la privación de su libertad; pero esta mención no debe de ser tomada como una regla, ya que no se limita a proteger a otros tipos de sujetos que promuevan su defensa con los mismos²⁶⁴.

La Constitución Política de 1993, en el artículo 200, inc.1, perfeccionó en forma amplia el Hábeas Corpus, haciéndolo extensivo a los derechos conexos a la libertad personal que pudieran ser amenazados de manera conexos a la libertad personal, perspectiva que ha sido asumida por el Código Procesal Constitucional, que se encuentra establecida en los incisos de su artículo 26, que contiene una serie de derechos fundamentales conexos que son resguardos por este proceso constitucional.

El Tribunal Constitucional, al referirse a derechos conexos, señala: “la Constitución establece expresamente en el artículo 200.1 que a través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a ella. Además, debe tenerse presente que no cualquier reclamo formulado denunciando una presunta afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos, puede dar lugar a la interposición de una demanda de hábeas corpus, pues para ello debe analizarse previamente si los actos reclamados afectan el contenido constitucionalmente protegido de los derechos presuntamente afectados, conforme lo establece el artículo 5º.1 del Código Procesal Constitucional”²⁶⁵.

²⁶³ ANGLES YANQUI, Gerard Henry. Ob. Cit. pág.3

²⁶⁴ ANGLES YANQUI, Gerard Henry. Ob. Cit. Pág.3

²⁶⁵ STC. Exp. N° 10713-2006-HC/TC. Fj.2

Al respecto, Pereira Chumbe, señala: “integran este concepto (de derecho conexo) todos aquellos derechos cuya afectación se encuentra vinculada, de manera directa, con la amenaza o vulneración de la libertad personal”²⁶⁶.

El artículo 25 del Código Procesal Constitucional, acoge esta concepción amplia de este proceso constitucional, cuando señala que “también procede el hábeas corpus en defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad individual, especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio”. De ahí que se debe admitir que también dentro de un proceso constitucional de hábeas corpus, es posible que el juez constitucional se pronuncie sobre una eventual vulneración del derecho fundamental al debido proceso; pero para ello es necesario que exista, en cada caso concreto, conexidad entre aquel y el derecho fundamental a la libertad personal”²⁶⁷.

Como se advierte, la libertad personal constituye el marco de acción original del proceso de hábeas corpus; sin embargo, existen actos y omisiones que lesionan otros derechos fundamentales, ocasionando “por conexión” la vulneración o la amenaza de agravio posterior sobre la libertad individual. El mayor ejemplo de esta clase de agravio lo encontramos en la esfera procesal; así, pues, si es que durante la tramitación de un proceso penal no se tutelan adecuadamente los derechos al debido proceso y a la motivación de resoluciones judiciales, la Sala expedirá una sentencia que carecerá de una motivación suficiente y que quebrantará el procedimiento establecido en la ley. Esta afectación a los derechos procesales incidirá sobre la libertad personal si es que el fallo es condenatorio, imponiendo una pena efectiva sobre el procesado; punto en el cual podemos observar la afectación efectiva de la libertad personal con ocasión de un agravio original sobre los derechos procesales²⁶⁸.

²⁶⁶ PEREIRA CHUMBE, Roberto Carlos, “El hábeas corpus para la defensa de los derechos conexos a la libertad personal”, en *Actualidad Jurídica*, N° 138, pág. 146.

²⁶⁷ STC. Exp. N° 09057-2005-HC/TC. Fj. 3

²⁶⁸ ESTELA HUAMAN, José Alberto. *La Tutela de los derechos conexos a la libertad personal a través del proceso de hábeas corpus*. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Programa Cybertesis Perú. pág.61.

6.1. DERECHOS FUNDAMENTALES SUSTANTIVOS CONEXOS A LA LIBERTAD PERSONAL.

De la revisión del artículo 25º del Código Procesal Constitucional consideramos que los siguientes constituyen derechos fundamentales sustantivos conexos a la libertad personal:

Artículo 25º del Código Procesal Constitucional. Procede el hábeas corpus ante la acción u omisión que amenace o vulnere los siguientes derechos que, enunciativamente, conforman la libertad individual:

a. Integridad y salud de personas detenidas

El inciso 1 del artículo 25º del Código Procesal Constitucional establece que el hábeas corpus defiende: “La integridad personal, y el derecho a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes, ni violentado para obtener declaraciones”.

El Tribunal Constitucional, ha definido el **derecho a la integridad**, así: “El derecho a la integridad personal se encuentra consagrado en el inciso 1 del artículo 2º de la Constitución Política vigente. En puridad se trata de un atributo indeliblemente vinculado con la dignidad de la persona, y con los derechos a la vida, a la salud, a la seguridad personal y al libre desarrollo y bienestar. El reconocimiento de su importancia es tal, que obligó al legislador constituyente no sólo a establecer su protección a través de lo dispuesto en el referido precepto, sino también, adicionalmente, a ratificarlo tuitivamente a través de lo dispuesto en el apartado h) numeral 24 del artículo 2º de la Constitución”²⁶⁹.

Respecto a la salud, el Tribunal Constitucional señala: “La salud tiene la característica de ser, por un lado, un derecho en sí mismo y, por el otro, condición habilitante para el ejercicio de otros derechos. El derecho a la salud debe entenderse como la facultad que tiene toda persona para el disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para

²⁶⁹ STC. Exp. N° 2333-2004-HC/TC. Fj.2

alcanzar el más alto nivel posible de salud. A veces las condiciones de salud de una persona varían según el grado de libertad que vivan, o de la vivienda que habiten, del acceso a alimentación adecuada, a vestido y –claro está– a trabajo”²⁷⁰.

b. Expatriación y separación del lugar de residencia

El inciso 4 del artículo 25º del Código Procesal Constitucional establece que el hábeas corpus defiende: “El derecho a no ser expatriado ni separado del lugar de residencia sino por mandato judicial o por aplicación de la Ley de Extranjería.

Castillo Córdova, citado por José Alberto Estela Huamán, señala que “la expatriación sólo puede ser predicada de los nacionales peruanos, mientras que para los extranjeros el término adecuado es el de expulsión. Una y otra se asemejan en el hecho que van a traer por consecuencia la separación de la persona 65 (nacional o extranjera) del territorio peruano. Para el caso de los extranjeros (...) hay que tener en cuenta la Ley de Extranjería (LE), Decreto legislativo 703”²⁷¹

c. Restricción de la libertad de tránsito

El inciso 6 del artículo 25º del Código Procesal Constitucional establece que el hábeas corpus defiende: “El derecho de los nacionales o de los extranjeros residentes a ingresar, transitar o salir del territorio nacional, salvo mandato judicial o aplicación de la Ley de Extranjería o de Sanidad”²⁷².

Castillo Córdova, citado por José Alberto Estela Huamán, señala que “este dispositivo legal encuentra su fundamento en el artículo 2.11 de la Constitución Política (...) Del mismo modo, la norma internacional se ha encargado de recoger este derecho. Así, en la Declaración Universal de

²⁷⁰ STC. Exp. Nº 1711-2004-AA/TC. Fj.2

²⁷¹ ESTELA HUAMAN, José Alberto. Ob. Cit. pág. 65.

²⁷² GUTIERREZ CAMACHO, Walter. Ob.Cit. pág. 83.

Derechos Humanos se ha dispuesto” lo referido en la Carta de 1993. Debe destacarse que el derecho resguardado es la libertad de tránsito, derecho que, puede ser limitado y restringido sólo por mandato judicial debidamente motivado²⁷³.

d. Retención de DNI

El inciso 10 del artículo 25º del Código Procesal Constitucional establece que el hábeas corpus defiende: “El derecho a no ser privado del documento nacional de identidad, así como de obtener el pasaporte o su renovación dentro o fuera de la República”.

El Tribunal Constitucional, ha definido la doble función del DNI al considerar que “el DNI es el documento que tiene una doble función: por un lado, permite que el derecho a la identidad se haga efectivo, en tanto que posibilita la identificación precisa de su titular, mientras que por el otro, es un requisito para el ejercicio de los derechos civiles y políticos que se encuentran consagrados en la Constitución Política del Perú; además, es requerido para el desarrollo de actividades comerciales, trámites judiciales y otros de carácter personal, con lo que la carencia del mismo conlleva una limitación de varios derechos ciudadanos, uno de los cuales está referido a la libertad individual”²⁷⁴

6.2. DERECHOS FUNDAMENTALES PROCESALES CONEXOS A LA LIBERTAD PERSONAL.

El desarrollo de esta parte del estudio se desprende de la categoría denominada tutela procesal efectiva, la cual ha sido consagrada en el **artículo 4 del Código Procesal Constitucional**, el cual establece lo siguiente: “El hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva”.

²⁷³ ESTELA HUAMAN, José Alberto. Ob. Cit. pág. 62-63.

²⁷⁴ STC. Exp. N° 526-2005-HC/TC. Fj. 3.

El presupuesto mencionado, permite advertir que será posible la interposición de demanda de hábeas corpus por la vulneración de un derecho que componga la tutela procesal efectiva a través de una resolución judicial firme. Ello permite desarrollar la serie de consideraciones que servirán de marco para la descripción de los diferentes supuestos que permitirán la recurrencia a esta demanda con el objeto de resguardar a los diferentes derechos que se encuadran en esta categoría y cuya conexidad a la libertad individual es evidente.

a. Tutela procesal efectiva

El Art. 4 del Código Procesal Constitucional, señala “Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal”²⁷⁵.

Al respecto el Tribunal Constitucional, ha señalado: “la letra “y” en la expresión “libertad individual y la tutela procesal efectiva”, en aplicación lógica-jurídica, significa conjunción, lo que quiere decir que solo si se transgrede, quebranta o viola alguno de los derechos que forman parte de la tutela procesal efectiva, de forma patente, clara, visible o perceptible y necesariamente conduce a la privación de la libertad individual, es posible analizar el asunto controvertido para llegar a un pronunciamiento de fondo válido. Consecuentemente, la procedencia, en su tercera exigencia, acumula libertad individual y tutela procesal efectiva”²⁷⁶.

²⁷⁵ GUTIERREZ CAMACHO Walter. Ob. Cit. pág.74.

²⁷⁶ STC. Exp. N° 09598-2005-HC/TC. Fj.1

Por su parte, De Bernardis señala que este derecho es “la manifestación constitucional de un conjunto de instituciones de origen eminentemente procesal, cuyo propósito consiste en cautelar el libre, real e irrestricto acceso de todos los justiciables a la prestación jurisdiccional a cargo del Estado, a través de un debido proceso que revista los elementos necesarios para hacer posible la eficacia del derecho contenido en las normas jurídicas vigentes o la creación de nuevas situaciones jurídicas, que culmine con una resolución final ajustada a derecho y con un contenido mínimo de justicia, susceptible de ser ejecutada coercitivamente y que permita la consecución de los valores fundamentales sobre los que se cimenta el orden jurídico en su integridad”²⁷⁷.

Así, pues, “no se trata [...] de que el juez constitucional, de pronto, termine revisando todo lo que hizo un juez ordinario, sino, específicamente, de que fiscalice si uno o algunos de los derechos procesales con valor constitucional están siendo vulnerados. Para proceder de dicha forma existen dos referentes de los derechos de los justiciables: la tutela judicial efectiva, como marco objetivo, y el debido proceso, como expresión subjetiva y específica; ambos previstos en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del Perú”²⁷⁸.

b. Debido proceso

Consagrado en el artículo 139º inciso 3 de la Constitución, el debido proceso es uno de los derechos rectores del proceso penal. Ello implica que el juzgador deberá de tomar en consideración el procedimiento previamente establecido por ley para ceñir sus actos a dicho íter, ya que lo contrario implicaría el quebrantamiento de las formalidades procesales y la consecuente vulneración de dicho derecho fundamental de orden procesal.

Si bien el objeto inicial de la demanda de hábeas corpus es tutelar la libertad personal, cualquier afectación al debido proceso en un juicio penal

²⁷⁷ DE BERNARDIS, Luis Marcelo. “La garantía procesal del debido proceso”. pág. 137.

²⁷⁸ STC. Exp.08817-2005-HC/TC. Fj. 6

determinará el quebrantamiento del procedimiento previamente establecido, pudiendo ello repercutir en la libertad personal del procesado, en la medida que a través de determinados actos erróneos “como la omisión en la realización de determinados actos procesales” podrían determinar que se prescinda en la evaluación de ciertos elementos que pudieran acreditar la no responsabilidad del procesado y, en consecuencia, la adopción de un fallo errado que acarree la restricción arbitraria de la libertad personal del procesado.

En tal sentido, se observa el nexo que existe entre la tutela del debido proceso en un juicio penal con el resguardo de la libertad personal, ya que al ser ambos derechos fundamentales, se encuentran concatenados, lo cual determina que la afectación del primer derecho mencionado repercutirá ilegítimamente sobre el segundo, legitimando así al afectado a interponer la correspondiente demanda de hábeas corpus, cuyo objeto será retrotraer los hechos al momento anterior a la vulneración del debido proceso y, en consecuencia, realizar el acto procesal omitido dentro de los parámetros establecidos en la resolución que estima la demanda de hábeas corpus, por citar un ejemplo²⁷⁹.

El hábeas corpus tiene carácter excepcional, ya que “no tiene por objeto proteger en abstracto el derecho al debido proceso, ya que la violación de este debe incidir negativamente en la libertad individual. Asimismo, el artículo 25º del Código Procesal Constitucional regula enunciativamente los derechos que son susceptibles de ser tutelados por este proceso constitucional, los que necesariamente deben tener conexión con la libertad individual, situación que no se advierte en el caso de autos, puesto que el demandante cuestiona un pronunciamiento jurisdiccional emitido en el marco de un proceso laboral que no apareja medida restrictiva alguna en contra de su libertad individual”²⁸⁰.

²⁷⁹ ESTELA HUAMAN, José Alberto. Ob. Cit. pág. 79.

²⁸⁰ STC. Exp.Nº 07915-2006-HC/TC. Fj 3.

El sustento de la protección del hábeas corpus sobre este supuesto lo encontramos en la relación entre la tutela procesal efectiva y el debido proceso, sobre la que debe señalarse que “el derecho fundamental a la tutela procesal efectiva precisa de su vinculación con el derecho fundamental a la libertad personal, en cuyo caso, el hábeas corpus, tal como dispone el artículo 25º, inciso 17, del Código Procesal Constitucional, es el proceso constitucional idóneo para su protección²⁸¹”.

Para mayor abundamiento, deben conocerse las dimensiones del debido proceso, pues este tiene “dos expresiones: una formal y otra sustantiva; en la de carácter formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la motivación; en su faz sustantiva, se relaciona con los estándares de justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer²⁸²”.

Ello nos permite apreciar el contenido del debido proceso constitucional, sobre el cual el Tribunal Constitucional ha señalado que “El *debido proceso constitucional* garantiza que todas las afectaciones del contenido esencial del derecho fundamental al debido proceso y de los principios y derechos que de él se derivan sean susceptibles de ser controladas mediante los procesos constitucionales destinados a su tutela. Únicamente este ámbito es susceptible de control y tutela por parte de la jurisdicción constitucional, a fin de evitar que la jurisdicción constitucional termine sustituyendo a la justicia ordinaria. Por tanto, mientras que el debido proceso constitucional siempre puede ser sometido a control a través de los procesos constitucionales, el debido proceso legal –esto es, aquellas afectaciones o irregularidades que no inciden en dicho contenido– no convierte necesariamente al proceso penal en inconstitucional”²⁸³.

²⁸¹ STC. Exp. Nº 02492-2007-HC/TC.Fj.2.

²⁸² STC. Exp. Nº 08817-2005-HC/TC.Fj.6

²⁸³ STC. Exp. Nº 01014-2007-HC/TC.Fj.6

c. Motivación de las resoluciones judiciales

La motivación de resoluciones judiciales es un derecho consagrado en el artículo 139º inciso 5, el cual debe de ser evaluado a la luz de los elementos que conforman su contenido esencial, como son la fundamentación jurídica, la congruencia entre lo pedido y lo resuelto y que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, conforme ha establecido el Tribunal Constitucional²⁸⁴.

El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales se respeta, prima facie, siempre que exista: a) fundamentación jurídica, que no implica la sola mención de las normas a aplicar al caso, sino la explicación y justificación de por qué tal caso se encuentra o no dentro de los supuestos que contemplan tales normas; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que expresarán la conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas por las partes; y c) que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión²⁸⁵.

El Tribunal Constitucional, ha señalado que “la debida motivación debe estar presente en toda resolución que se emita en un proceso. Este derecho implica que cualquier decisión cuente con un razonamiento que no sea aparente o defectuoso, sino que exponga de manera clara, lógica y jurídica los fundamentos de hecho y de derecho que la justifican, de manera tal que los destinatarios, a partir de conocer las razones por las cuales se decidió en un sentido o en otro, estén en la aptitud de realizar los actos necesarios para la defensa de su derecho. El derecho a la motivación es un presupuesto fundamental para el adecuado y constitucional ejercicio del derecho a la tutela procesal efectiva”²⁸⁶.

²⁸⁴ STC. Exp. N° 04348-2005-PA. Fj. 2.

²⁸⁵ STC. Exp. N° 4348-2005-PA/TC.Fj.2.

²⁸⁶ STC. Exp. N° 06712-2005-HC/TC.Fj.10.

d. Derecho a la defensa.

El artículo 139º inciso 14 de la Constitución consagra “el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad”²⁸⁷.

El Tribunal Constitucional define al derecho de defensa como aquel que “protege el derecho a no quedar en estado de indefensión en cualquier etapa del proceso judicial o del procedimiento administrativo sancionatorio. Este estado de indefensión no sólo es evidente cuando, pese a atribuírsele la comisión de un acto u omisión antijurídico, se le sanciona a un justiciable o a un particular sin permitirle ser oído o formular sus descargos, con las debidas garantías, sino también a lo largo de todas las etapas del proceso y frente a cualquier tipo de articulaciones que se puedan promover”²⁸⁸.

El derecho fundamental de defensa “no supone únicamente la asistencia letrada en el juicio, sino a lo largo de toda la actuación, y además requiere para su ejercicio por parte del procesado y de su defensor, del conocimiento de las pruebas obrantes en el trámite para poder controvertirlas, ya criticándolas, ora acreditando su ilegalidad, bien ahondando en ellas (contrainterrogatorio), o aduciendo otros medios de prueba que desvirtúen su valor demostrativo”. Es decir, “el derecho de defensa no se circunscribe a la llamada defensa técnica, es decir, la ejercida por un profesional del derecho, pues como segundo elemento no menos importante se encuentra la defensa material, en virtud de la cual el procesado (...) está facultado para solicitar pruebas, impugnar decisiones, presentar memoriales, intervenir de viva voz en la audiencia pública, examinar el expediente, etc.”²⁸⁹.

²⁸⁷ GUTIERREZ CAMACHO, Walter. Ob. Cit. Pág. 46.

²⁸⁸ STC. Exp. Nº 0090 -2004-AA/TC.Fj.27.

²⁸⁹ STC. Exp. Nº 03361-2007-HC/TC.Fj.3.

Cabe precisar que este derecho tiene una doble dimensión, “una material, referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo; y otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica; esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo que dure el proceso. Ambas dimensiones del derecho de defensa forman parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho en referencia. En ambos casos, se garantiza el derecho a no ser postrado a un estado de indefensión²⁹⁰.

El derecho de defensa forma parte de la tutela procesal efectiva, pues “la defensa de una persona es un elemento también clave de la configuración de la tutela procesal efectiva, puesto que un proceso no puede considerarse como respetuoso de la persona si no se le permite la posibilidad de presentar sus argumentos, estrategia y elementos de respaldo jurídico necesarios. Así, la defensa también es un derecho-regla de la tutela procesal efectiva²⁹¹.

Los instrumentos internacionales ponen énfasis en ámbitos específicos del derecho a la defensa. El artículo 11° de la Declaración Universal de Derechos Humanos insiste en que se aseguren a la persona todas las garantías necesarias para su defensa. A su vez, el artículo 14°, inciso 3, acápite “d” del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos considera pertinente requerir una defensa no sólo realizada a título personal, sino también a través de un abogado. Por su parte, el artículo 8°, inciso 2, acápite c de la Convención Americana sobre Derechos Humanos concede al inculpado el tiempo y medios convenientes para que prepare y realice su defensa²⁹².

²⁹⁰ STC. Exp. N° 6260-2005-HC/TC. Fj.3

²⁹¹ ESTELA HUAMAN, José Alberto. Ob. Cit. pág.92.

²⁹² STC. Exp. N° 6712 -2005-HC/TC. Fj.31.

e. Presunción de inocencia

El artículo 2º inciso 24 literal e) de la Constitución al establecer que “toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”, no hace más que consagrar el derecho a la presunción de inocencia.

El Tribunal Constitucional ha definido la presunción de inocencia como aquel derecho que permite que “a todo procesado se le considera inocente mientras no se pruebe su culpabilidad; vale decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario”²⁹³.

Las dimensiones de la presunción de inocencia han merecido atención del colegiado al señalar que “en el desarrollo del derecho fundamental a la presunción de inocencia, es pertinente hacer algunas precisiones adicionales a efectos de una cabal comprensión y tutela del derecho en mención. En primer lugar, se quiere decir que, como todo derecho fundamental, el derecho a la presunción de inocencia tiene un doble carácter. Esto es, que no solamente es un derecho subjetivo, sino también una institución objetiva dado que comporta determinados valores inherentes al ordenamiento constitucional”²⁹⁴

Sobre la **inversión del principio de inocencia**, el Tribunal señaló que “no existen motivos razonables y proporcionales que justifiquen el dictado de la medida cuestionada [de detención], toda vez, que atribuir el peligro procesal a la gravedad de los hechos imputados y exigirle al procesado la obligatoriedad de recabar con pruebas indubitables que no rehuíra o perturbara su juzgamiento [...] supone invertir el principio de presunción de inocencia por el de criminalidad”²⁹⁵

Así pues, “frente a una sanción carente de motivación, tanto respecto de los hechos como también de las disposiciones legales que habrían sido

²⁹³ STC.Exp.Nº 00618-2005-HC/TC.FJ.21.

²⁹⁴ STC.Exp. Nº 10107-2005-HC/TC.Fj.6

²⁹⁵ STC.Exp. Nº 03014-2006-HC/TC.Fj.12

infringidas por los recurrentes, no puede trasladarse toda la carga de la prueba a quien precisamente soporta la imputación, pues eso significaría que lo que se sanciona no es lo que está probado en el procedimiento, sino lo que el imputado, en este caso, no ha podido probar como descargo en defensa de su inocencia²⁹⁶.

En efecto, la detención preventiva “no puede solo justificarse en la prognosis de la pena que, en caso de expedirse sentencia condenatoria, se aplicará a la persona que hasta ese momento tiene la condición de procesada, pues ello supondría invertir el principio de presunción de inocencia por el de criminalidad”²⁹⁷

En tal sentido, cuando el juzgador invierta la presunción de inocencia atribuyendo responsabilidad a un procesado, antes de haberse expedido sentencia definitiva, se estará frente a un supuesto que ameritará la interposición de la demanda de hábeas corpus, debido a que tal vulneración a la presunción de inocencia acarrea el menoscabo de la libertad personal, en la medida que se funda una resolución en la calidad de responsable del procesado, a pesar de que no existe resolución judicial firme que así lo declare²⁹⁸

6.3.- SOBRE LOS DERECHOS CONEXOS A LA LIBERTAD EN LAS SENTENCIAS PERUANAS.

Podemos encontrar muchos casos similares en la jurisprudencia nacional, pero para no dilucidar el tema analizando la totalidad, tomaremos como ejemplo una de las más mentadas sentencias del Tribunal constitucional peruano: el caso Benites Vásquez, recaída en el EXP. N° 02364-2008-PHC/TC. De la Sentencia desprendemos que la demanda fue declarada improcedente in limine, ya que las objeciones procesales y legales alegadas carecen de

²⁹⁶ STC. Exp. N° 02192-2004-AA/TC.Fj.13

²⁹⁷ STC. Exp. N° 01260-2002-HC/TC.Fj.3

²⁹⁸ ESTELA HUAMAN, José Alberto. Ob. Cit. pág.96.

contenido constitucional pasible de ser amparado mediante el proceso de hábeas corpus. Como bien señala la Constitución, las normas relativas a derechos y libertades se interpretan de acuerdo a los instrumentos internacionales²⁹⁹. Estos instrumentos también han buscado la protección de los derechos fundamentales de la persona, y el caso de la protección de la libertad individual no fue la excepción. “Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales”³⁰⁰. De esta forma es como lo normado por la Constitución con relación al proceso de hábeas corpus, ve complementado su contenido a partir de lo enunciado en el Código Procesal Constitucional, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos³⁰¹.

En la sentencia, se afirma claramente, que la demanda de hábeas corpus no se configura por el hecho de que esta garantía protege el derecho a la libertad. La demandante pretendió configurar que los derechos constitucionales conexos como el debido proceso, tutela efectiva se encontraban en peligro de ser vulnerados. Para poder realizar este deslinde, debemos de utilizar la adecuada interpretación del art. 25º del Código Procesal Constitucional, que menciona (...) procede el hábeas corpus en defensa de los derechos

²⁹⁹ IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución; y artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.

³⁰⁰ Art. 25º.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconoce el derecho a la libertad personal, y ha afirmado que “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.

³⁰¹ ANGELES YANQUI Gerard Henry. Derechos Conexos a la Libertad en los Procesos de Habeas Corpus en el Perú. Pág.3. En <http://blog.pucp.edu.pe/blog/derechoconstitucionalperu/2010/10/14/derechos-conexos-a-la-libertad-en-los-procesos-de-habeas-corpus-en-el-peru/>

constitucionales conexos con la libertad individual, especialmente cuando se trata del debido proceso (...)”³⁰².

6.4. DERECHOS HUMANOS

Pedro Niken, citado por Raúl Chanamé Orbe, en su obra Comentarios a la Constitución, señala que “Los derechos humanos son una conquista moral de la humanidad. Durante milenios, la voluntad de los gobernantes no tuvo restricción alguna. En ese sentido, los derechos humanos tienen doble objetivo de establecer los límites de acción de los poderes de Estado para evitar abusos y proteger la integridad de la persona humana, así como definir las áreas en que la intervención del Estado es prioritaria y obligatoria, con el fin de garantizar el desarrollo integral de los individuos y los pueblos. Los derechos humanos son garantías que, aunque no estuvieran consignados en una Constitución, gozan de reconocimiento universal para que en el ser humano se realice el ideal de libertad, exento de temor y de miseria, dentro de condiciones que le permitan gozar de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”³⁰³.

No todos los derechos humanos están contenidos en la Carta Magna, esto no los excluye o minimiza, por ello el artículo tercero conocido como el artículo de “los derechos innominados” los protege para su exigencia, por el sólo hecho de ser derechos humanos. Los derechos reconocidos que son fundamentales de la persona no excluyen a los demás, que la Constitución garantiza³⁰⁴.

6.4.1. PRINCIPIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Raúl Chanamé Orbe, en su obra Comentarios a la Constitución³⁰⁵, de acuerdo con el magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,

³⁰² ANGLES YANQUI, Gerard Henry. Ob. Cit. pág.4.

³⁰³ CHANAMÉ ORBE, Raúl. Ob. Cit. pág. 184.

³⁰⁴ CHANAMÉ ORBE, Raúl. Ob. Cit. pág. 184.

³⁰⁵ CHANAME ORBE, Raúl. Ob. Cit. pág. 184-185.

Máximo Pacheco Gómez, señala y desarrolla que los derechos humanos responden a los siguientes principios:

a) Universalidad.

El sólo hecho de “ser” hace al hombre conservador de derechos frente a otros hombres o a sus respectivas instituciones representativas; son patrimonio de todo ser humano sin imponer ninguna de las características accidentales de su persona.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 1º, establece que los Derechos Humanos comprenden a “Todos los seres humanos”, haciendo aquí una precisión importante: La Declaración utiliza el término absoluto al referirse al género humano en su conjunto, por lo cual no cabe considerarlo parcialmente.

b) Imprescriptibilidad.

La existencia de los Derechos Humanos, no ha de extinguirse nunca, ya que al ser consustanciales a la existencia humana. Como dice Héctor Gros Espiell, existirán siempre ontológicamente.

c) Irrenunciabilidad e inalienabilidad.

Es decir, no es posible renunciar a ellos como no es posible renunciar a ser humano. Por su parte, la inalienabilidad de los Derechos Humanos reside en que al hallarse más allá de la esfera de manipulación del hombre le es imposible disponer arbitrariamente.

d) Inviolabilidad.

Al respecto, Raúl Chanamé Orbe, cita al profesor Gros Espiel, quien sostiene que es necesario reafirmar la naturaleza irrenunciable y siempre vigente de los Derechos Humanos frente a todo poder, grupo o individuo resaltando la necesidad de protegerlos y garantizarlos en toda circunstancia y en todo momento, sin subordinarlos ni mediatizarlos.

Si los derechos humanos se subordinan a un limitado y amoral poder del Estado y se impone una doctrina referente a la seguridad de éste, los Derechos Humanos podrían viciar su contenido.

e) Efectividad.

Los Derechos Humanos no son aspiraciones o formulaciones principistas, demandando por lo tanto respeto y positivación por parte de la sociedad y el orden jurídico. Por ello, la sociedad debe responder efectivamente a las demanda de sus integrantes, pues ello hará posible su propia existencia.

f) Trascendencia a la norma positiva.

Estos derechos no requieren estar reconocidos expresamente por la legislación interna en un Estado para que sus ciudadanos se vean protegidos a nivel internacional por dichas normas; además, aun cuando el Estado mismo no ase parte de los Pactos y Declaraciones que contienen dichos derechos, la comunidad internacional no duda hoy en considerar a los Derechos Humanos como una opinión jurídica, es decir se encuentran convencidos de su necesaria práctica, más allá del hecho de que se encuentren o no, efectivamente positivados.

g) Interdependencia y complementariedad.

Los Derechos Humanos son un complejo integral e interdependiente, por lo que su real protección demanda, además, hacer ciertamente posible la realización de los derechos civiles y políticos, tanto como los económicos, sociales y culturales.

h) Igualdad.

Los derechos humanos protegen en igual medida a todo ser humano, por lo que haya una identidad absoluta de derechos en todas y cada una de las personas. Este principio que negativamente podemos enunciar, como el de no discriminación se halla en la base misma de la concepción de estos derechos; así, el primer considerando del Preámbulo de la

Declaración Universal de los Derechos Humanos señala: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz del mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.

i) Corresponsabilidad.

Como consecuencia de lo anterior, todos somos responsables en forma individual y colectivamente frente al sujeto de estos derechos.

6.4.2. LAS GENERACIONES DE LOS DECHOS HUMANOS.

a) Primera Generación.

Se ubican en la primera generación, los derechos civiles y políticos, a los que también se les denomina derechos negativos por significar una limitación de un poder sobre los derechos del individuo. El liberalismo considera a estos derechos, como la columna vertebral de los Derechos Humanos, entendiendo que el principal obligado es el Estado³⁰⁶.

b) Segunda Generación.

La segunda generación de derechos son los llamados derechos económicos, sociales y culturales; a ellos se denomina, también, derechos positivos por importar la adopción de una determinada conducta por parte de los obligados, tendiente a la satisfacción de las necesidades de los titulares en alguno de los ámbitos protegidos por estas normas. Las confrontaciones ideológicas en torno a estos derechos son aún muy fuertes, los países desarrollados tienen un particular concepto acerca del interior de casa Estado, pero relativa o totalmente inválidos para el Derecho Internacional. Por el contrario, los países en desarrollo ven ello de una manera de introducir términos

³⁰⁶ CHANAME ORBE, Raúl. Ob. Cit. pág. 185.

y condiciones que hagan más justas las relaciones económicas internacionales³⁰⁷.

c) **Tercera Generación.**

La tercera generación de derechos, llamados también nuevos derechos o derechos de la solidaridad, son aquellos que demandan para su ejecución la de la adhesión de todos. Sólo la identificación con sus preceptos pueden hacerlos realmente vigentes y, en tanto el bien jurídico protegido beneficia directamente a toda la humanidad, podríamos decir, que son derechos de la paz, al desarrollo, a la libre determinación, a un medio ambiente sano, etc.³⁰⁸.

Los derechos fundamentales garantizados por la Constitución son, entre otros, el derecho a la igualdad y no discriminación; el derecho a la vida y a la integridad física, a la libertad religiosa, a la libertad personal, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen, a la libertad de expresión e información, a la libertad de cátedra, a la libertad de reunión, a la libertad de asociación, al libre acceso a cargos y funciones públicas en condiciones de igualdad, a la tutela jurisdiccional efectiva, a la legalidad penal, a la educación, a la libertad de sindicación, y al derecho de petición³⁰⁹.

³⁰⁷ CHANAME ORBE, Raúl. Ob. Cit. pág. 186.

³⁰⁸ CHANAME ORBE, Raúl. Ob. Cit. pág. 186.

³⁰⁹ CHANAME ORBE, Raúl. Ob. Cit. pág. 186.

CAPITULO VII

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

7.1.- ANÁLISIS.

Habiendo realizado un estudio analítico y acucioso de “El Hábeas Corpus contra las Resoluciones Judiciales en el Tribunal Constitucional”, años 2010 - 2012, se advierte que la discusión se centra en determinar si el enunciado proposicional planteado como hipótesis es verdadero o falso. Así, tenemos que la **hipótesis** enunciada es la siguiente:

“Los procesos de Habeas Corpus contra Resoluciones Judiciales interpuestos en protección de la libertad individual y los derechos constitucionales conexos en el Tribunal Constitucional, tienen mínima eficacia. 2010 -2012”.

Analizado desde esta perspectiva, las variables que contiene la hipótesis son las siguientes:

Variables independientes:

V1 = Los procesos de habeas corpus.

V2 = Resoluciones judiciales

Variables dependientes:

V3 = Libertad Individual

V4 = Derechos constitucionales conexos

A efecto de cumplir con el objetivo de la investigación, a continuación se demuestra la validez de la hipótesis enunciada en forma positiva o negativa, basada en la información obtenida a través del análisis documental, aplicada a la muestra de 351 sentencias. Asimismo, se procedió a realizar el análisis estadístico de los datos proporcionados en el instrumento, lo que validó en forma positiva el enunciado proposicional planteado en la hipótesis.

7.1.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.

Cuadro referencial del total de Hábeas Corpus, publicada por el Tribunal Constitucional en su página web de los años 2010 a 2012.

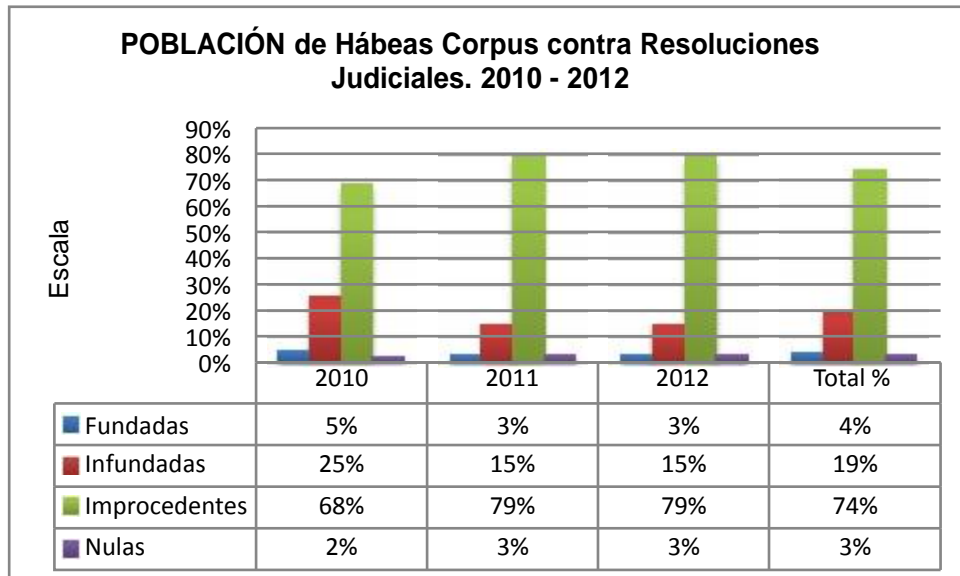
Procesos de H.C	2010	2011	2012	Total
Habeas C. contra libertad	12/ 06 Fund	17/01 Fund	01/01Fund	30 / 8 Fund.
H.C contra Res. Jud.	1152	933	800	2885
Totales	1164	950	801	2915

Tabla nº 1

***Población** de las sentencias de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales publicadas por el Tribunal Constitucional en su página web. 2010 a 2012*

Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales.	2010	2011	2012	Total
Fundadas	59 (5%)	24 (3%)	25 (3%)	108 (4%)
Infundadas	281 (25%)	143 (15%)	118 (15%)	542 (19%)
Improcedentes	786 (68%)	739 (79%)	630 (79%)	2155 (74%)
Nulas	26 (2%)	27 (3%)	27 (3%)	80 (3%)
Totales	1152	933	800	2885

Figura nº 1



Lectura:

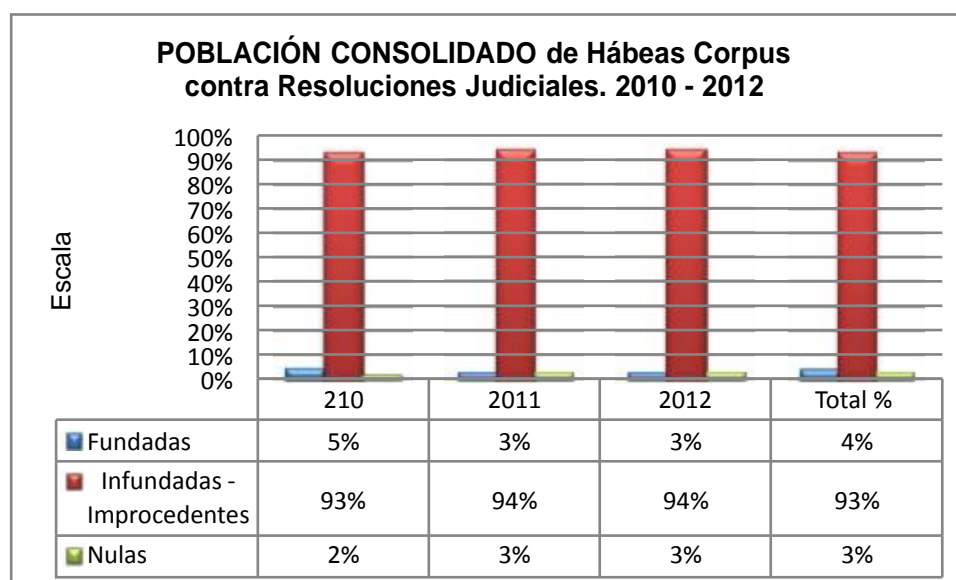
Según la **tabla nº 1** y la **figura nº1**, se tiene que de la **población total** de las **sentencias de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales** publicadas por el **Tribunal Constitucional**, en su página web en los años **2010 a 2012**, que asciende a **2,885**, sólo el **4%** son declarados **fundadas**, el **19%** **infundadas**, el **74%** **improcedentes**, y el **3%** **nulas**.

Tabla nº 2

***Población consolidado**, de las sentencias de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales publicadas por el Tribunal Constitucional, en su página web. 2010 a 2012*

Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales	2010	2011	2012	Total
Fundadas	59 (5%)	24 (3%)	25 (3%)	108 (4%)
Infundadas – Improcedentes	1067(93%)	882 (94%)	748 (94%)	2697 93%
Nulas	26 (2%)	27 (3%)	27 (3%)	80 (3%)
Totales	1152	933	800	2885

Figura nº 2.



Lectura:

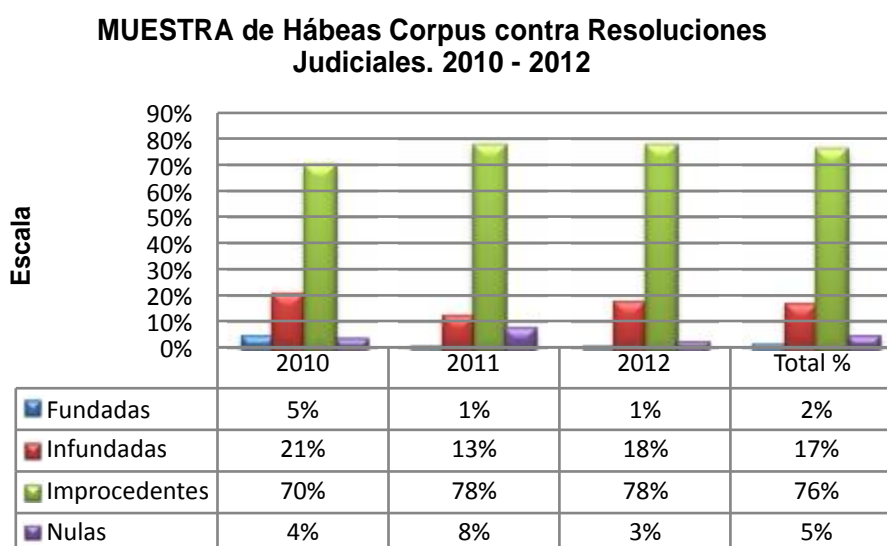
Según la **tabla nº 2** y la **figura nº2**, se tiene que de la **población consolidado** de las **sentencias** de **Hábeas Corpus** contra **Resoluciones Judiciales** publicadas por el **Tribunal Constitucional** en página web, en los años **2010 a 2012**, que asciende a **2,885**, sólo el **4%** son declarados **fundadas**, el **93%** son declarados **infundadas e improcedentes**, y el **3%** **nulas**.

Tabla nº 3

***Muestra** de las sentencias de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales publicadas por el Tribunal Constitucional, publicadas en su página web. 2010 a 2012*

Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales	2010	2011	2012	Total
Fundadas	06 (5%)	01 (1%)	01 (1%)	08 (2%)
Infundadas	24 (21%)	16 (13%)	21 (18%)	61 (17%)
Improcedentes	82 (70%)	91 (78%)	92 (78%)	265 (76%)
Nulas	05 (4%)	09 (8%)	03 (3%)	17 (5%)
Totales	117	117	117	351

Figura nº 3



Lectura:

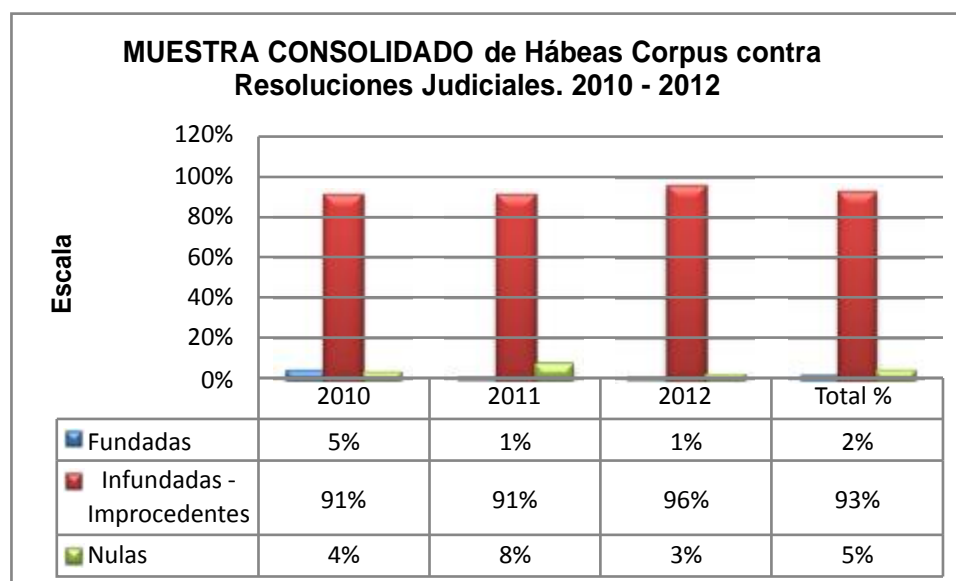
Según la **tabla nº 3** y la **figura nº3**, se tiene que la **muestra** del total de las **sentencias de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales** publicadas por el **Tribunal Constitucional** en página web, los años **2010 a 2012**, son **351** sentencias, de los cuales, sólo el **2%** son declarados **fundadas**, el **17%** **infundadas**, el **76%** **improcedentes**, y el **5%** **nulas**.

Tabla nº 4.

***Muestra consolidado**, de sentencias de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales, publicadas por el Tribunal Constitucional, en su página web. 2010 a 2012*

Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales	2010	2011	2012	Total
Fundadas	06 (5%)	01 (1%)	01 (1%)	08 (2%)
Infundadas-Improcedentes	106 (91%)	107 (91%)	113 (96%)	326 (93%)
Nulas	05 (4%)	09 (8%)	03 (3%)	17 (5%)
Totales	117	117	117	351

Figura nº 4.



Lectura:

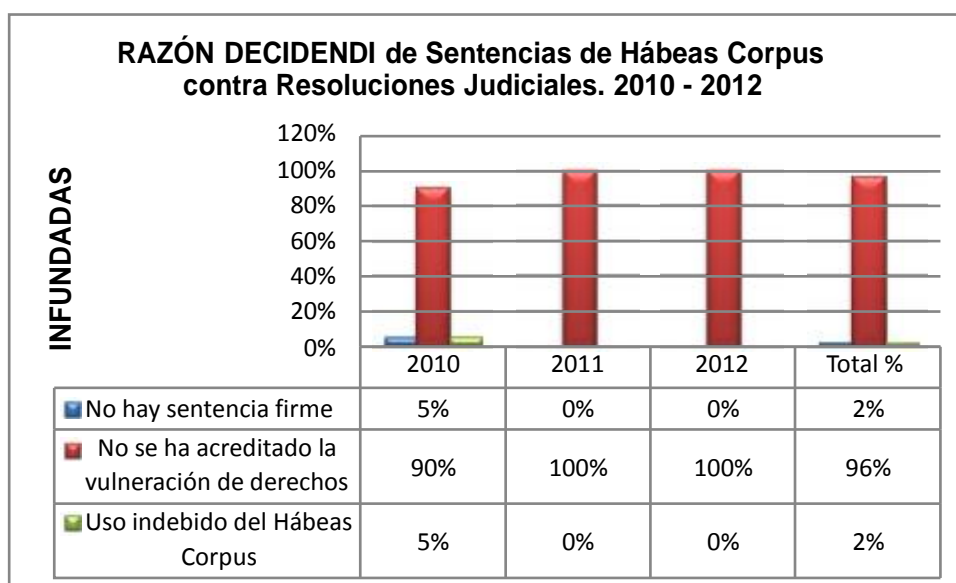
Según la **tabla nº 4** y la **figura nº4**, se tiene que la **muestra consolidado** del total de las **sentencias de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales** publicadas por el **Tribunal Constitucional** en su página web, los años **2010 a 2012**, son **351** sentencias, de los cuales, sólo el **2%** son declarados **fundadas**, el **93%** son declarados **infundadas e improcedentes**, y el **5%** **nulas**.

Tabla nº 5

Ratio decidendi de las sentencias **infundadas** de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales, publicadas por el Tribunal Constitucional, en su página web. 2010 a 2012.

INFUNDADAS	2010	2011	2012	TOTAL
No hay sentencia firme	01 (5%)	00	00	01 (2%)
No se ha acreditado la vulneración de derechos	19 (90%)	14 (100%)	15 (100%)	48 (96%)
Uso indebido del HC.	01 (5%)	00	00	01 (2%)
TOTAL	21	14	15	50

Figura nº 5



Lectura:

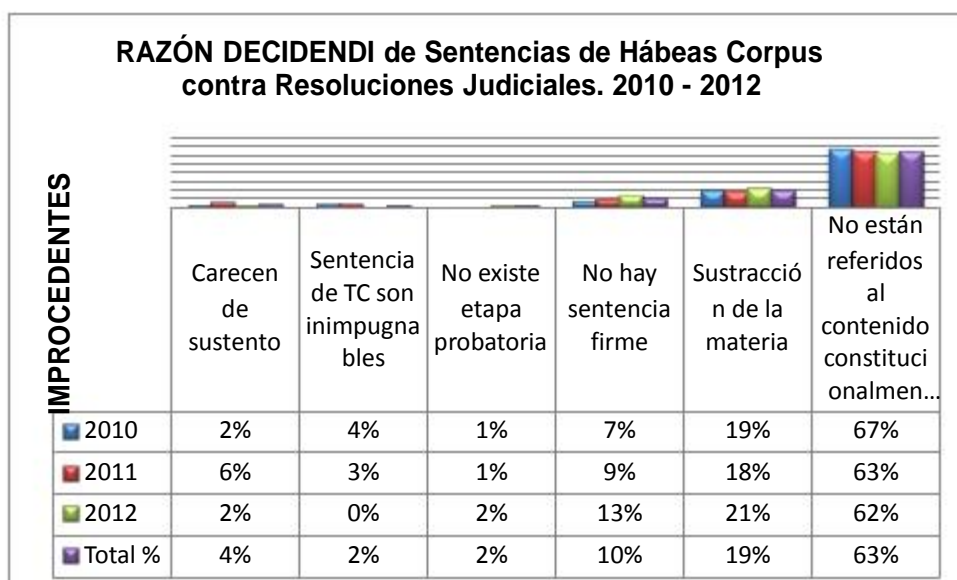
Según la **tabla nº 5** y la **figura nº5**, se tiene que la **Ratio decidendi** de las sentencias **infundadas** de **Hábeas Corpus** contra **Resoluciones Judiciales**, publicadas por el **Tribunal Constitucional**, en su página web. 2010 a 2012, el **2%** se debe a que **no hay sentencia firme**, el **96%** por que **no se ha acreditado la vulneración de derechos**, y el **2%** por el **uso indebido del Hábeas Corpus**.

Tabla nº 6.

Ratio decidendi de las sentencias **improcedentes** de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales, publicadas por el Tribunal Constitucional, en su página web. 2010 a 2012.

IMPROCEDENTES	2010	2011	2012	TOTAL
Carecen de sustento	02 (2%)	06 (6%)	02 (2%)	10 (4%)
Sentencia de TC son inimpugnables	03 (4%)	03 (3%)	00	06 (2%)
No existe etapa probatoria	01 (1%)	01 (1%)	02 (2%)	04 (2%)
No hay sentencia firme	6 (7%)	08 (9%)	13 (13%)	27 (10%)
Sustracción de la materia	16 (19%)	17 (18%)	20 (21%)	53 (19%)
No referidos al contenido constitucionalmente protegido	57 (67%)	58 (63%)	61(62%)	176 (63%)
TOTALES	85	93	98	276

Figura nº 6



Lectura.

Según la **tabla nº 6** y la **figura nº6**, se tiene que la **Ratio decidendi** de las sentencias improcedentes de **Hábeas Corpus** contra **Resoluciones**

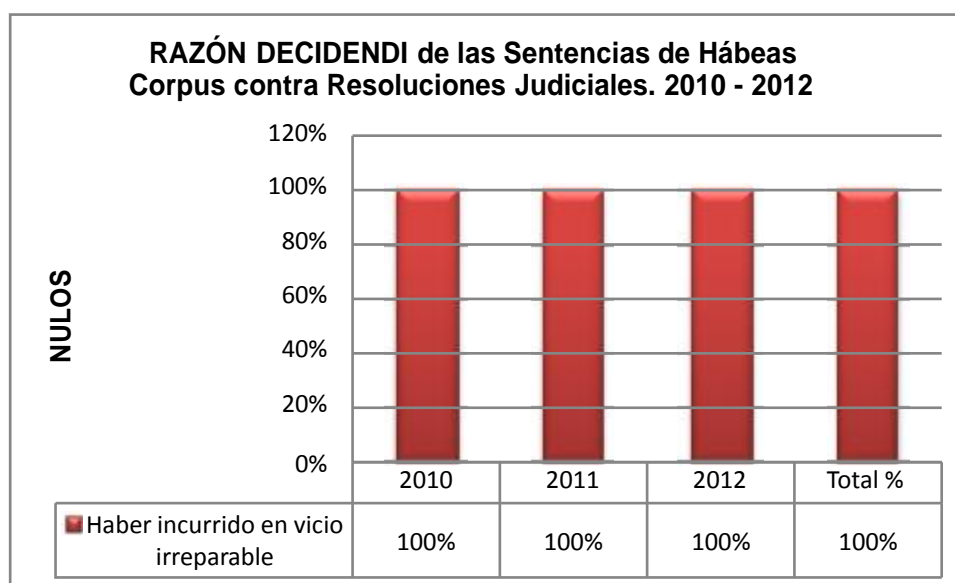
Judiciales, publicadas por el **T.C**, en su página web. 2010 a 2012, el **4%** se debe a que **carecen de sustento**, el **2%** por que la **sentencia de T.C son inimpugnables**, el **2%** porque **no existe etapa probatoria**, el **10%** porque **no se ha interpuesto contra sentencia firme**, el **19%** por **sustracción de materia**, y el **63%** debido a que **no están referidos al contenido constitucionalmente protegido**.

Tabla nº 7.

***Ratio decidendi** de las sentencias **nulas** de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales, publicadas por el Tribunal Constitucional, en su página web. 2010 a 2012.*

NULOS	2010	2011	2012	TOTAL
Incurrido en vicio irreparable	05	09	03	17 (100%)
TOTAL	05	09	03	17

Figura nº 7



Lectura.

Según la **tabla nº 7** y la **figura nº7**, se tiene que la **Ratio decidendi** de las sentencias nulas de **Hábeas Corpus** contra **Resoluciones Judiciales**, publicadas por el **Tribunal Constitucional**, en su página web. 2010 a 2012, el **100%** se debe a que **han incurrido en vicio irreparable**.

7.1.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS.

La hipótesis formulada en la presente investigación, es la siguiente:

Hipótesis.

Los procesos de Habeas Corpus contra Resoluciones Judiciales interpuestos en protección de la libertad individual y los derechos constitucionales conexos en el Tribunal Constitucional, tienen mínima eficacia. 2010 -2012.

De acuerdo a lo descrito en las **tablas nº 1 y nº 2** y las **figuras nº 1 y nº 2**, se observa que de la **población** total y **consolidado** de las **sentencias de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales** publicadas por el **Tribunal Constitucional** en su página web, en los años **2010 a 2012**, que asciende a **2,885** sentencias, sólo el **4%** son declarados **fundadas**; el **19% infundadas**, el **74% improcedentes** (ambos **93%**); y el **3% nulas**.

Del mismo modo, de acuerdo a lo descrito en las **tablas nº 3 y nº 4** y las **figuras nº 3 y nº4**, se observa que de la **muestra** total y **consolidado** de las **sentencias de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales** publicadas por el **Tribunal Constitucional** en página web, los años **2010 a 2012**, de **351** sentencias, sólo el **2%** son declarados **fundadas**; el **17% infundadas**, el **76% improcedentes** (ambos **93%**); y el **5% nulas**.

De lo que se infiere que los procesos de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales, interpuestos en protección de la libertad individual y los derechos constitucionales conexos en el tribunal constitucional, en los años 2010 - 2012, **tienen mínima eficacia**.

7.1.3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.

OBJETIVO PRINCIPAL.

- A. **Analizar en qué medida, el Tribunal Constitucional deniega los procesos de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales, interpuestos en protección de la libertad individual y los derechos constitucionales conexos.**

De acuerdo a lo descrito en las **tablas nº 1 y nº 2** y las **figuras nº 1 y nº 2**, se observa que de la **población total y consolidado** de las **sentencias de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales** publicadas por el **Tribunal Constitucional** en su página web, en los años **2010 a 2012**, que asciende a **2,885** sentencias, sólo el **4%** son declarados **fundadas**; el **19%** de sentencias **infundadas**, el **74%** **improcedentes** (ambos **93%**); y el **3% nulas**.

Así como lo descrito en las **tablas nº 3 y nº 4** y las **figuras nº 3 y nº 4**, se observa que de la **muestra total y consolidado** de las **sentencias de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales** publicadas por el **Tribunal Constitucional** en su página web, los años **2010 a 2012**, de los **351** sentencias, sólo el **2%** son declarados **fundadas**; el **17%** **infundadas**, el **76%** **improcedentes** (ambos **93%**); y el **5% nulas**.

Lo que demuestra que los procesos de Habeas Corpus contra Resoluciones Judiciales, interpuestos en protección de la libertad individual y los derechos constitucionales conexos, población de estudio, en mayor medida son desestimados en alto porcentaje (93%), es decir, infundadas (17%), improcedentes (76%), nulas (5%), y solo el 2% son declarados fundados, convirtiéndose en mínima eficacia la garantía constitucional planteada; con lo que queda probada la hipótesis principal.

OBJETIVOS SECUNDARIOS:

- B. **Analizar las razones, por los que el Tribunal Constitucional, en un alto porcentaje declara infundadas, los procesos de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales, interpuestos en protección de la libertad individual y los derechos constitucionales conexos.**

De acuerdo a lo descrito en la **tabla nº 5** y la **figura nº5**, las sentencias de **Hábeas Corpus** contra **Resoluciones Judiciales**, publicadas por el **Tribunal Constitucional**, en su página web, en los años 2010 a 2012, se observa que las razones (**Ratio decidendi**) por lo que el **Tribunal Constitucional** declara **infundadas**, se debe a que el **2% no hay sentencia firme**, el **96%** porque **no se ha acreditado la vulneración de derechos**, y el **2%** por el **uso indebido del Hábeas Corpus**.

El **2%** de las sentencias de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales, población de estudio, han sido declarados **infundadas**, se debe a que **no hay sentencia firme**, lo que significa que no se ha cumplido con la exigencia establecido en el segundo párrafo del artículo 4º del Código Procesal Constitucional.

El **96%** de las sentencias de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales, población de estudio, han sido declarados **infundadas**, se debe a que **no se ha acreditado la vulneración de derechos**, es decir, no se ha cumplido con las exigencias establecidas en el artículo 2º del Código Procesal Constitucional.

El **2%** de las sentencias de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales, población de estudio, han sido declarados **infundadas**, se debe a que se hace **uso indebido del hábeas corpus**; es decir, los justiciables, en muchos casos, sin el debido criterio o análisis del caso plantean el hábeas corpus contra resoluciones judiciales, como así se advierte del Exp. Nº 05686 -2009-PHC/TC: “La entrega del bien inmueble

materia del delito o el pago de la reparación civil, que son formas de reparar el daño causado, no se amenaza ilegalmente la libertad individual del demandante; como para merecer la protección mediante el hábeas corpus, de conformidad con el inc. 1 del art. 200º de la Constitución Política, por lo que el demandante está haciendo un uso indebido de las instancias constitucionales, por lo que no es amparable su demanda”.

Lo que demuestra, que el motivo principal y en mayor porcentaje (96%) por lo que el Tribunal Constitucional declara infundadas los procesos de hábeas corpus contra resoluciones judiciales, es por no haberse acreditado la vulneración de derechos, en los años 2010 a 2012.

C. Analizar las razones, por lo que el Tribunal Constitucional, en un alto porcentaje declara improcedentes, los procesos de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales, interpuestos en protección de la libertad individual y los derechos constitucionales conexos.

De acuerdo a lo descrito en la **tabla nº 6** y la **figura nº6**, las sentencias de **Hábeas Corpus** contra **Resoluciones Judiciales**, publicadas por el **Tribunal Constitucional**, en su página web, en los años 2010 a 2012, se observa que las razones (**Ratio decidendi**) por lo que el **Tribunal Constitucional** declara **improcedentes**, porque el **4%** de sentencia **carecen de sustento**, el **2%** por que la **sentencia de T.C son inimpugnables**, el **2%** porque **no existe etapa probatoria**, el **10%** porque **no se ha interpuesto contra sentencia firme**, el **19%** por **sustracción de materia**, y el **63%** debido a que **no están referidos al contenido constitucionalmente protegido**.

El **4%** de las sentencias de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales, población de estudio, han sido declarados **improcedentes**,

se debe a que **carecen de sustento**, así como señala el EXP.Nº 00321-2010-PHC/TC, que tal pedido de nulidad debe ser rechazado, puesto que carece de sustento.

El **2%** de las sentencias de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales, población de estudio, han sido declarados **improcedentes**, se debe a que **las sentencias** del Tribunal Constitucional **son inimpugnables**, así como se señala en el EXP. Nº 06079-2008-PHC/TC, que el solicitante pretende la reconsideración y modificación del fallo emitido en la sentencia de autos, lo que no es posible porque las sentencias del Tribunal Constitucional son inimpugnables.

El **2%** de las sentencias de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales, población de estudio, han sido declarados **improcedentes**, se debe a que **no existe etapa probatoria, tal como establece el artículo 9 del Código Procesal Constitucional**, que en los procesos constitucionales no existe etapa probatoria; así como el Exp.Nº 00344-2010-PHC/TC.

El **10%** de las sentencias de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales, población de estudio, han sido declarados improcedentes, se debe a que no hay sentencia firme, es decir, aún no se han agotado los recursos que otorga la ley para impugnar la resolución judicial que agravaría los derechos reclamados, tal como señala el Exp. Nº 06089-2009-PHC/TC, que la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal de improcedencia contenida en el artículo 5º, inciso 1, del Código Procesal Constitucional.

El **19 %** de las sentencias de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales, población de estudio, han sido declarados **improcedentes**, se debe a la **sustracción de materia**, es decir, se encuentran en la causal de improcedencia previsto en artículo 5º, inc. 5) del Código Procesal Constitucional, que establece que es improcedente la demanda

cuando a su presentación ha cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional o se ha convertido en irreparable; implica la sustracción de la materia justiciable, por lo que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el asunto controvertido, como ejemplo señal el EXP. N.º 00409-2010-PHC/TC

El **63 %** de las sentencias de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales, población de estudio, han sido declarados **improcedentes**, se debe a que **no están referidos al contenido constitucionalmente protegido** del derecho tutelado por el hábeas corpus, tal como establece el artículo 5º, *inciso 1* del Código Procesal Constitucional.

Lo que demuestra, que la razón principal y en mayor porcentaje (63%) por lo que el Tribunal Constitucional declara improcedentes los procesos de hábeas corpus contra resoluciones judiciales, es porque no están referidos al contenido constitucionalmente protegido, en los años 2010 a 2012.

Finalmente, se establece que la hipótesis enunciada en el presente estudio, al ser contrastada con el análisis de las sentencias de Hábeas Corpus contra las Resoluciones Judiciales, publicadas por el Tribunal Constitucional, en su página web, en los años 2010 a 2012, población de estudio; así como con la información estadística aplicada, ha sido validada en forma: POSITIVA, ya que de los resultados obtenidos, se tiene que los procesos de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales, interpuestos en protección de la libertad individual y los derechos constitucionales conexos en el tribunal constitucional, en los años 2010 - 2012, tienen mínima eficacia.

CONCLUSIONES:

PRIMERA.- Queda probado que los procesos de hábeas corpus contra resoluciones judiciales interpuestos en protección de la libertad individual y los derechos constitucionales conexos en el tribunal constitucional, tienen mínima eficacia. 2010 -2012. Por cuanto, según las tablas nº 3 y nº 4 y las figuras nº 3 y nº4, muestra total y consolidado de las sentencias de Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales publicadas por el Tribunal Constitucional en página web, los años 2010 a 2012, de 351 sentencias, sólo el 2% son declarados fundadas; el 17% infundadas, el 76% improcedentes (ambos 93%); y el 5% nulas.

SEGUNDA.- Queda probada, que la Ratio decidendi por lo que el Tribunal Constitucional desestima en alto porcentaje los procesos de hábeas Corpus contra resoluciones judiciales, en protección de la libertad individual y los derechos constitucionales conexos, declarando infundadas; se debe a que no hay sentencia firme (2%), no se ha acreditado la vulneración de derechos (96%), y el uso indebido del Hábeas Corpus (2%), tal como se ha descrito en la tabla nº 5 y figura nº 5.

TERCERA.- Queda probado, que la Ratio decidendi por lo que el Tribunal Constitucional desestima en alto porcentaje los procesos de hábeas Corpus contra resoluciones judiciales, en protección de la libertad individual y los derechos constitucionales conexos, declarando improcedentes, se debe a que carecen de sustento (4%), que la sentencia de T.C son inimpugnables (2%), no existe etapa probatoria (2%), no se ha interpuesto contra sentencia firme (10%), por sustracción de materia (19%), no están referidos al contenido constitucionalmente protegido (63%), tal como se ha descrito en la tabla nº y figura nº 6.

RECOMENDACIONES:

- 1.- Se recomienda a los justiciables y a los abogados, que para interponer hábeas corpus contra resoluciones judiciales en protección de la libertad individual y los derechos constitucionales conexos, y tengan eficacia en el Tribunal Constitucional, fundadas en alto porcentaje, cuando sean necesarios, deben obtener **sentencia firme, acreditar la vulneración de derechos constitucionales**; y no incurrir en uso indebido del Hábeas Corpus.
- 2.- Se recomienda a los justiciables y a los abogados, que para interponer hábeas corpus contra resoluciones judiciales en protección de la libertad individual y los derechos constitucionales conexos, y tengan suficiente eficacia en el Tribunal Constitucional, fundadas en alto porcentaje, **se debe analizar detenidamente los criterios de procedencia de hábeas corpus** señalada en los arts. 2º y 4º del Código Procesal Constitucional, y **tener muy en cuenta**, los **causales de improcedencia de hábeas corpus**, establecidos en el art. 5º del Código Procesal Constitucional.
- 3.- Se recomienda al Tribunal Constitucional, y al Poder Judicial, tener muy en cuenta que, **cuando la vulneración de la tutela procesal efectiva y la libertad individual del imputado** contenida en una **resolución judicial, es manifiesta, evidente, patente e indudable**, no debería ser exigible el carácter firme de la resolución para admitir a trámite el Hábeas Corpus.
- 4.- Se recomienda al Tribunal Constitucional, así como al Poder Judicial, tener muy en cuenta, que **el carácter firme de la resolución que vulnera la tutela procesal efectiva y la libertad personal no debería ser exigible en caso de que la vulneración sea manifiesta**, cuando **por caso fortuito o fuerza mayor sea imposible interponer los recursos pertinentes al interior del proceso** o cuando, **no obstante haber interpuesto los recursos impugnatorios, estos no sean resueltos en el plazo previsto por la norma o dentro de un plazo razonable**.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LIBROS:

1. ANGELES GONZALES, Fernando, CARRUITERO LECCA, Francisco y VALLE – RIESTRA, Javier. Código Procesal Constitucional Comentado. Lima. Ediciones Jurídicas. Tomo I y II. 2004.
2. ARTOLA GALLEGU, Miguel. Los Derechos del Hombre. Madrid, Editorial Alianza. 1986. España.
3. ARAGON, Manuel. Constitución y Control del Poder. Buenos Aires. Ediciones ciudad Argentina. 1995. Argentina.
4. BIDART CAMPOS, Germán J. El Derecho de la Constitución y Ordenamiento Jurídico. Buenos Aires, Editorial EDIAR. 1995. Argentina.
5. CASTAÑEDA OTSU, Susana. Comentarios a los Precedentes Vinculantes del Tribunal Constitucional. Lima. Editorial Grijley. 2010.
6. CARRUITERO LECCA, Francisco y GUTIERREZ CANALES, Mario Raúl. El Proceso Constitucional de Habeas Corpus. Lima. Estudio Editores. 2008.
7. CHANAMÉ ORBE, Raúl. Comentarios a la Constitución. Lima. Jurista Editores, Quinta Edición. 2008.
8. DE BERNARDIS, Luis Marcelo. “La garantía procesal del debido proceso”. Cultural Cuzco. Lima, 1995.
9. DANOS, Jorge. Aspectos Orgánicos del Tribunal Constitucional en la Constitución de 1993. Análisis y Comentarios. Lima. Lecturas sobre Temas Constitucionales N° 10, CAJ. 1994.
10. DIAZ ZEGARRA, Walter A. Código Procesal Constitucional Peruano. Lima: ediciones Legales. 2005.
11. ECO, Humberto. Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura. Méjico. Gedisa S.A. 4ta reimpresión. 2007.
12. ESTELA HUAMAN, José Alberto. La Tutela de los derechos conexos a la libertad personal a través del proceso de hábeas corpus. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Programa Cybertesis. Perú.

13. FAURE, Crhistini. Las Declaraciones de los Derechos del Hombre de 1979. México. Editorial, Fondo de Cultura- Económica.1995.
14. GARCIA BELAUNDE, Domingo. El Habeas Corpus en el Perú. Editorial Dirección Universitaria de Biblioteca y Publicaciones. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima. 1979.
15. GARCÍA BELAUNDE, Domingo. Naturaleza Jurídica del habeas Corpus, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En Revista de Derecho y Ciencias Políticas. Vol. 37 N°2. Lima. 1973.
16. LANDA ARROYO, César. Teoría del Derecho procesal Constitucional. Lima, Editorial Palestra, 2004.
17. LEON PASTOR, Ricardo. Manual de Redacción de Resoluciones Judiciales. Academia del a Magistratura. Primera Edición. Julio de 2008.
18. MARCELO DE BERNARDIS, Luis. La garantía procesal del debido proceso. Lima: Cultural Cuzco, 1995.
19. NAVARRA GARMA, Arturo. “Pretensión nulificante de la cosa juzgada fraudulenta en el proceso civil”. En César Castañeda Serrano (comp.). Nulidad de cosa juzgada fraudulenta. 1ra.ed. T. II. Lima, 2001.
20. NOGUERA RAMOS, Iván. Detención y Libertades en el Proceso Penal Peruano. Ediciones Forenses. Lima. 1997.
21. OBANDO BLANCO, Víctor Roberto. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en la jurisprudencia. Lima: Palestra Editores, 2001.
22. ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Jurisdicción y Procesos Constitucionales. Hábeas Corpus y Amparo. Editorial Rodhas, Cuarta Edición. Lima. Julio 2000.
23. PEREIRA CHUMBE, Roberto Carlos, “El hábeas corpus para la defensa de los derechos conexos a la libertad personal”, en Actualidad Jurídica, N° 138, Lima, 2005.
24. QUIROGA LEÓN, Aníbal. El Debido Proceso Legal en el Perú y el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Lima: Jurista Editores, 2003.
25. RAMOS NUÑEZ, Carlos. Cómo Hacer una Tesis en Derecho y no envejecer en el intento. Lima. Segunda Edición, Editorial Gaceta Jurídica. 2002.

26. SÁENZ DÁVALOS, Luis R. "Los Procesos Constitucionales como mecanismos de protección frente a resoluciones judiciales arbitrarias". En Susana Castañeda Otsu (coord.). Derecho Procesal constitucional. 1ra. ed. Lima: Jurista Editores, 2003.
27. SÁNCHEZ VELARDE, Pablo Wilfredo. Manual de Derecho Procesal Penal. Idemsa. Lima 2004.
28. SANCHEZ VIAMONTE, Carlos. El Habeas Corpus. Buenos Aires, 1ª edición, Editorial: Valerio Abeledo. 1927. Argentina.
29. SOLIS ESPINOZA, Alejandro. Metodología de la Investigación Jurídico Social. Lima. 2da. Edición, Editores B y B. 2001.

REVISTAS:

30. AGUIRRE CHUMBIMUNI, Javier Alberto. Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales Penales en el Código Procesal Constitucional. Revista de Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
31. ETO CRUZ, Gerardo. Régimen legal del Hábeas Corpus y Amparo. Revista Jurídica Cajamarca, en [http:// www.derechoycambiosocil.com/RJC/REVISTA4/amparo.htm](http://www.derechoycambiosocil.com/RJC/REVISTA4/amparo.htm).
32. FIX ZAMUDIO, Héctor. La Protección Procesal de las Garantías Individuales en América Latina. En Revista de la Comisión Internacional de Juristas. N° 2 pág. 69-111. Diciembre de 1968.
33. GARCIA CAVERO, Percy. La Relación de Conexidad en el Hábeas Corpus Conexo. Temas Penales en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Anuario de Derecho Penal. 2008.
34. MIXAN MASS, Florencio. Profesor de la Universidad Nacional de Trujillo – Perú. Debate Penal, N° 2, mayo –agosto 1987.
35. ORE GUARDIA, Arsenio. El Proceso de Habeas Corpus. Instituto de Ciencia Procesal Penal. Revista electrónica en: <http://www.incipp.org.pe/media/uploads/doc/procesodehabeascorpuserguardia.pdf>.

36. RAZETO MIGLIARO, Luis (Artículo publicado en la Revista CPU Estudios Sociales, N° 28-29, 1981). <http://www.luisrazeto.net/content/libertad-individual-y-estado>.
37. Revista de Análisis Especializada de Jurisprudencia. RAE. Jurisprudencia Procesal Civil. *La Motivación de Resoluciones Judiciales*. Octubre 2008. Pág.210. En <http://www.raejurisprudencia.com.pe/>

CÓDIGOS:

38. La Constitución Política del Perú de 1979. Ediciones Carpesa. Librería Atlas. 1980.
39. GUTIERREZ CAMACHO, Walter. Constitución y Normas Básicas sobre Procesos Constitucionales. Gaceta Jurídica. 2009.
40. Código Civil, Código Procesal Civil, Código de los Niños y Adolescentes, y otras normas.Grijley. Edición octubre de 2015.
41. Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica Del Poder Judicial y Ley Orgánica del Ministerio Público. Colección Jurídica. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Banco de Crédito –BCP.

DICCIONARIOS:

42. CABANELLAS, Guillermo. *Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual*. 24º ed. T. VII. Buenos Aires: Heliasta, 1996.
43. ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA. Tomo XX. Editorial Driskill S.A. Buenos Aires.1990.

LINCOGRAFÍAS:

44. <http://blog.pucp.edu.pe/blog/derechoconstitucionalperu/2010/10/14/derechos-conexos-a-la-libertad-en-los-procesos-de-habeas-corpus-en-el-peru/>
45. <http://www4.congreso.gob.pe/historico/quipu/constitu/1821b.htm>
46. <http://www.justiciaviva.org.pe/publica/03.pdf>.

ANEXOS

HABEAS CORPUS DECLARADOS FUNDADAS

EXP. N.º 05546-2009-PHC/TC
PIURA
WALTER CRIOLLO ROMERO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los **16 días del mes de agosto de 2010**, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Calle Hayen, Álvarez Miranda y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Enrique José Velásquez Ortiz, abogado defensor de don Walter Criollo Romero, contra la sentencia expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 123, su fecha 14 de octubre de 2009, que declaró infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 28 de agosto de 2009, don Enrique José Velásquez Ortiz interpone demanda de hábeas corpus a favor de don Walter Criollo Romero, y la dirige contra los jueces superiores de la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, a fin de que emita pronunciamiento sobre la excepción de prescripción de la acción penal en el proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas (Exp. N.º 400-1988). Alega la violación de su derecho constitucional al debido proceso, así como amenaza de violación de su derecho a la libertad personal.

Refiere que en mayo de 1988 el Juzgado Penal de Huamachuco dispuso abrir instrucción contra el favorecido por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas (Exp. N.º 52-1988, Juzgado) habiendo sido elevados los actuados a la Sala Penal Superior para el inicio del juicio oral (Exp. N.º 400-1988, Sala), la que ordenó reservar el proceso respecto del beneficiario hasta su ubicación y captura. Agrega que desde la supuesta comisión del delito atribuido hasta la fecha han transcurrido más de 21 años, habiendo sobrepasado en demasía el máximo de la acción penal para este delito, lo que le obligó a que en reiteradas oportunidades solicitara la excepción de la prescripción de la acción penal; que no obstante ello, el órgano jurisdiccional no ha emitido pronunciamiento, dando la impresión de que no se ha encontrado el expediente físico, no siendo ésta una justificación válida para la demora en resolver lo solicitado.

Realizada la investigación sumaria, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, don Jorge Guillermo Morales Galarreta, presenta su descargo y precisa que luego de realizada la búsqueda correspondiente, se ha llegado a determinar que el proceso penal N.º 400-1998 forma parte de la carga procesal del Tercer Juzgado Penal Liquidador de Trujillo, con el N.º 5536-97, por lo que, con fecha 7 de setiembre de 2009 dispuso que en el día, y sin más trámite, se remitan los actuados a dicho Juzgado Penal a efectos de que proceda conforme a sus atribuciones.

El Segundo Juzgado de la Investigación Preparatoria de Piura, con fecha 29 de setiembre de 2009, declaró infundada la demanda por considerar que la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de La Libertad,(...) ha cumplido con derivar los actuados al Tercer Juzgado Penal Liquidador de Trujillo para que este órgano jurisdiccional, en definitiva, resuelva lo solicitado por el favorecido, no habiéndose producido la violación a amenaza de los derechos invocados, (...).

La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura, con fecha 14 de octubre de 2009, confirmó la apelada, por similares fundamentos.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. El objeto de la presente demanda es que la justicia constitucional *ordene* al Órgano Jurisdiccional competente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad que emita pronunciamiento sobre la excepción de prescripción de la acción penal que ha sido solicitada en reiteradas oportunidades por el favorecido Walter Criollo Romero en el proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas (Exp. N° 400-1988). **Se alega la violación del derecho constitucional al debido proceso**, concretamente, a la emisión de las decisiones judiciales dentro de un **plazo razonable**, así como **amenaza al derecho a la libertad personal**.

El hábeas corpus por omisión de actuaciones judiciales

2. El artículo 200, *inciso* 1, de la Constitución establece que el hábeas corpus procede ante el hecho u **omisión**, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos conexos. A su vez, el artículo 2.º del Código Procesal Constitucional señala que el hábeas corpus procede cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por **acción** u **omisión** de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. Cuando se invoque la amenaza de violación, ésta debe ser cierta y de inminente realización.
3. Con lo anterior, cabe resaltar que, es posible cuestionar a través de un proceso de hábeas corpus una omisión de actuación judicial que se considere lesiva de alguno de los derechos que conforman la libertad individual o derechos conexos, supuestos en los que no puede ser exigible, como es obvio, la *firmeza* a que se refiere el artículo 4.º del Código Procesal Constitucional, y ello es así, por cuanto en estos casos no estamos ante una resolución judicial, sea firme o no la que se alega de lesiva de los derechos (expresión de una conducta inconstitucional positiva) sino, más bien, ante una **omisión** en la expedición de una resolución (manifestación de una conducta inconstitucional negativa).
4. Las omisiones judiciales constituyen, en general, actos de incumplimiento del Estado de su obligación de administrar justicia, y en concreto, del Poder Judicial, a través de sus órganos jurisdiccionales, de no resolver de manera diligente, oportuna y adecuada las pretensiones de las partes de un proceso, generando así un retardo en la administración de justicia. Sobre el particular, este Tribunal ha establecido que “tratándose de dilaciones indebidas que inciden sobre el derecho a la libertad, es exigible un especial celo a todo

juez encargado de un proceso en el que se encuentra inmerso un [procesado], pues la libertad es un valor constitucional informador de todo el ordenamiento jurídico (...). Si bien la excesiva sobrecarga que padecen la mayoría de los tribunales (...), puede excusar la mora en las decisiones judiciales, máxime si se presenta un desbordante flujo de recursos razonablemente imposibles de atender, esta justificación es inaceptable si el órgano judicial no observa una conducta diligente y apropiada para hacer justicia, siendo uno de sus aspectos cardinales la expedición oportuna de las resoluciones decisorias”(Exp. N.º 3771-2004-PHC/TC).

Análisis del caso materia de controversia constitucional

5. En el caso, se aprecia que en mayo de 1988, el Juzgado Penal de Huamachuco dispuso abrir instrucción contra el favorecido Walter Criollo Romero por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas (Exp. N.º 52-1988, Juzgado), habiendo sido elevados los actuados a la Sala Penal Superior para el inicio del juicio oral (Exp. N.º 400-1988, Sala), la que ordenó reservar el proceso penal respecto del beneficiario hasta su ubicación y captura (fojas 15). Se advierte también que el favorecido mediante escritos de fecha 16 de octubre de 2008 (fojas 7), 9 de enero de 2009 (fojas 9) y 17 de marzo de 2009 (fojas 11) presentados ante la Sala Superior emplazada, dedujo la excepción de prescripción de la acción penal, alegando que desde la supuesta comisión del delito atribuido hasta la fecha han transcurrido más de 21 años, por lo que ha sobrepasado en demasía el máximo de la acción penal.
6. No obstante lo anterior, se aprecia que pese a que desde la fecha en que el favorecido presentó su primer escrito de excepción de prescripción de la acción penal (16 de octubre de 2008) hasta la fecha en que presentó la presente demanda (28 de agosto de 2009) habían transcurrido más de 10 meses, el Poder Judicial y, en concreto, los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de La Libertad no habían emitido pronunciamiento sobre dicha solicitud. Incluso, se advierte que luego de interpuesta la demanda tal estado de cosas aún pervive, toda vez que, pese a haber realizado las gestiones conducentes a la búsqueda y haber determinado que el proceso penal es parte de la carga procesal del Tercer Juzgado Penal Liquidador de Trujillo, con N.º 5536-97 (fojas 61 a 63), lo que motivó que la Sala Superior emplazada, mediante resolución de fecha 7 de setiembre de 2009, dispusiera remitir en el día el cuaderno de excepción de prescripción de la acción penal, a efectos de que dicho juzgado emita pronunciamiento; no se trataría más que de una omisión de actuación más. Y ello es así porque con anterioridad, esto es, con fecha **20 de enero de 2009**, el secretario del Tercer Juzgado Penal Liquidador de Trujillo informó que dicha instrucción (entiéndase el expediente físico) no había sido ubicada, conforme se aprecia del informe del Presidente de la Sala emplazada (fojas 80), lo cual genera incertidumbre respecto de la situación jurídica del favorecido al no encontrar respuesta a su solicitud de excepción de prescripción de la acción penal.
7. Sobre la base de lo anterior, podemos concluir que la omisión en el pronunciamiento por una eventual falta de ubicación del expediente físico o por una eventual pérdida del mismo, es de exclusiva responsabilidad del órgano jurisdiccional competente, quien no ha actuado con la diligencia debida para custodiar el expediente y tramitarlo de manera

adecuada lo cual, como es evidente, no puede ser imputable al favorecido Walter Criollo Romero, por lo que el Tercer Juzgado Penal Liquidador de Trujillo debe agotar todos los medios idóneos para resolver, en el plazo más breve posible, la excepción de prescripción de la acción penal deducida por el favorecido, valiéndose de la recomposición del expediente, si fuera el caso, bajo responsabilidad. De lo expuesto se colige que se ha producido la violación del derecho al debido proceso, pues la resolución decisoria de la excepción de prescripción no ha sido emitida respetando el *plazo razonable*, así como la amenaza de su derecho a la libertad personal del beneficiario, por cuanto cabe la posibilidad de que sea detenido al existir una orden de captura vigente en su contra, por lo que, la demanda debe ser estimada.

8. No obstante ello, a efectos de dilucidar la responsabilidad funcional respecto de la actuación de los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de La Libertad que habrían propiciado la demora en la resolución de la excepción de prescripción de la acción penal del favorecido, este Tribunal considera pertinente remitir copias certificadas de los principales actuados al Órgano de Control correspondiente, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1. Declarar **FUNDADA** la demanda **al haberse producido la violación del derecho al debido proceso**, concretamente, **del derecho a la emisión de los decisiones judiciales dentro de un plazo razonable**, así como **la amenaza de violación del derecho a la libertad personal del favorecido Walter Criollo Romero**; en consecuencia, **ORDENA** que el Tercer Juzgado Penal Liquidador de Trujillo, en el plazo más breve posible, **emita pronunciamiento sobre la excepción de prescripción de la acción penal**, presentada por el beneficiario en el proceso penal, que se le sigue por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas (actualmente N.º 5536-1997), bajo responsabilidad, teniéndose en consideración los fundamentos de la presente sentencia, dándose cuenta a este Tribunal. Sin que esto implique la anulación de Orden de Captura, Mandato de detención o encarcelación si fuese el caso.
2. **EXHORTAR** a los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de La Libertad que ocasionaron dilatación en el pronunciamiento de la excepción de prescripción de la acción penal solicitada por Walter Criollo Romero que no vuelvan a incurrir, en este caso o en otros futuros, en acciones u omisiones similares a las que motivaron la interposición de la presente demanda, bajo apercibimiento de aplicarse las medidas coercitivas que establece el artículo 22.º del Código Procesal Constitucional.
3. Disponer la remisión de copias certificadas de los principales actuados a la Oficina Control de la Magistratura del Poder Judicial, a efectos de que proceda conforme a lo dispuesto en el fundamento 8 de la presente.

Publíquese y notifíquese.

SS. CALLE HAYEN, ÁLVAREZ MIRANDA, URVIOLA HANI

EXP. N.º 00835-2011-PHC/TC
AREQUIPA
JOSÉ ALBERTO
SOLÍS LINARES

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los **22 días del mes de junio de 2011**, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Eto Cruz y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Alberto Solís Linares contra la sentencia expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 258, su fecha 6 de enero de 2011, que declara infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 31 de agosto de 2010 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra los señores Juan Oswaldo Montoya Concha y Otto Suárez Angles y contra el Alcalde de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, con la finalidad de que se disponga el retiro inmediato de las rejas ubicadas entre el Complejo Habitacional Vinatea Reynoso y el Complejo Habitacional El Corregidor del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero – Arequipa, debiendo disponerse asimismo que se abstengan de colocar las mencionadas rejas, puesto que considera que con ello se está afectando su derecho a la libertad de tránsito.

Refiere que presentó una denuncia ante la Fiscalía de Prevención del Delito por ruidos, obstrucción de la vía pública con rejas y otros hechos que afectan la tranquilidad pública. Agrega que la mencionada fiscalía mediante Resolución N.º 402-2009, de fecha 3 de setiembre de 2009, exhortó a los integrantes de la Junta de Usuarios de la denominada Playa de Estacionamiento del Corregidor y Vinatea Reynoso a efectos de que se abstengan de realizar cobros por concepto de parqueo y se abstengan de realizar cualquier acto que perturbe la vía pública; asimismo exhortó al Alcalde de la Municipalidad emplazada para que dé cumplimiento a la Ordenanza Municipal N.º 077, debiendo en consecuencia disponer el retiro de las rejas instaladas en la vía pública entre los Complejos Habitacionales Vinatea Reynoso y El Corregidor. Finalmente expresa que en cumplimiento de dicha disposición fiscal la municipalidad retiró las rejas, las que fueron reinstaladas por los representantes de la Junta de Usuarios de la Playa de Estacionamiento, y los complejos habitacionales Vinatea Reynoso y El Corregidor, sin que la municipalidad haya realizado acto alguno a efectos de revertir dicho hecho.

Realizada la investigación sumaria los señores emplazados afirmaron no tener la calidad de directivos de la Junta de Usuarios de la Playa de Estacionamiento ni los complejos habitacionales Vinatea Reynoso y El Corregidor.

A fojas 70 obra la declaración del demandado Juan Oswaldo Montoya Concha, quien expresa que ya no tiene calidad de directivo de la Playa de Estacionamiento al que se hace referencia en la demanda, adjuntando copia legalizada de su renuncia.

Asimismo a fojas 130 de autos se encuentra la Resolución N° 7, de fecha 1 de octubre de 2010, mediante la que se solicita al demandante precise quién se encuentra actualmente como Presidente de la Junta de Usuarios de la Playa de Estacionamiento El Corregidor y Vinatea Reynoso. El demandante absuelve la citada resolución y expresa que el actual Presidente de la referida junta de usuarios es Otto Suarez Angles, disponiéndose mediante Resolución N.º 8, de fecha 14 de octubre de 2010, su declaración en calidad de Presidente de la mencionada junta.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Arequipa declaró infundada la demanda, considerando que las rejas tienen como finalidad constituir una medida de seguridad vecinal, finalidad que es constitucional.

La Sala Superior revisora confirma la apelada por similares argumentos.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. La presente demanda **tiene por objeto el retiro de las rejas metálicas instaladas entre los complejos habitacionales Vinatea Reynoso y El Corregidor, del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, puesto que afectaría el derecho a la libertad de tránsito** del accionante.

Cuestión previa

2. Es preciso señalar que si bien el señor Montoya Concha fue inicialmente emplazado con la presente demanda, en su condición de presidente de la junta de usuarios referida, en el transcurso del proceso se estableció que ya no ostentaba tal condición, por lo que se decidió emplazar a la persona que tenía el cargo de Presidente. Por ende el recurrente, al interponer su recurso de agravio constitucional, incurre en un error al seguir considerando al señor Montoya Concha como emplazado, puesto que ya no tiene tal condición en el proceso, razón por la cual los resultados del proceso no le afectarán.

Hábeas corpus de naturaleza restringida

3. En el caso de autos se cuestionan directamente restricciones a la libertad de tránsito o de locomoción presuntamente producidas por haberse instalado en una vía de uso público un sistema de control mediante rejas. Se trata, por consiguiente, no de un supuesto de detención arbitraria frente al que normalmente procede un hábeas corpus de tipo clásico, sino de un caso en el que se denuncia una restricción a la libertad individual distinta a los supuestos de detenciones arbitrarias o indebidas; se configura, por tanto, el supuesto del denominado *hábeas corpus de tipo restringido*.

Los alcances genéricos de la libertad de tránsito o derecho de locomoción

4. El artículo 2º, inciso 11), de la Constitución regula el derecho fundamental a la libertad de tránsito. Esta facultad comporta el ejercicio del atributo *ius movendi et ambulandi*. Es decir, supone la posibilidad de desplazarse autodeterminativamente en función de las propias necesidades y aspiraciones personales a lo largo y ancho del territorio, así como la de ingresar o salir de él, cuando así se desee. Se trata, en suma, de un imprescindible derecho individual y de un elemento conformante de la libertad individual. Más aún, deviene en una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona, toda vez que se presenta como el derecho que tiene ésta para poder ingresar, permanecer, circular y salir libremente del territorio nacional. Sin embargo, este derecho, como todos los demás, no es absoluto, sino que tiene que ejercerse según las condiciones de cada titular del mismo de acuerdo con las limitaciones que la propia Constitución y la ley establecen (Exp. N.º 2876-2005-HC/TC, caso Nilsen Mallqui Laurence).

Las vías de tránsito público y el establecimiento de rejas como medida de seguridad vecinal (Exp. N.º 3482-2005-HC/TC, caso Luis Augusto Brain Delgado y otros)

5. Siendo las vías de tránsito público libres en su alcance y utilidad, pueden sin embargo, en determinadas circunstancias, ser objeto de regulaciones y aún de restricciones. Cuando éstas provienen directamente del Estado, se presumen acordes con las facultades que el propio ordenamiento jurídico reconoce en determinados ámbitos (como ocurre, por ejemplo, con las funciones de control de tránsito efectuadas por los gobiernos municipales); cuando provienen de particulares, existe la necesidad de determinar si existe alguna justificación sustentada en la presencia o ausencia de determinados bienes jurídicos.
6. Justamente en la existencia o reconocimiento del bien jurídico seguridad ciudadana se encuentra lo que, tal vez, constituya la más frecuente de las formas a través de las cuales se ven restringidas las vías de tránsito público. Tras la consabida necesidad de garantizar que la colectividad no se vea perjudicada en sus derechos más elementales frente al entorno de inseguridad recurrente en los últimos tiempos, se ha vuelto una práctica reiterada el que los vecinos o las organizaciones que los representan opten por colocar rejas o mecanismos de seguridad en las vías de tránsito público. Aunque queda claro que no se trata de todas las vías (no podría implementarse en avenidas de tránsito fluido, por ejemplo) y que sólo se limita a determinados perímetros (no puede tratarse de zonas en las que el comercio es frecuente), es un hecho incuestionable que la colocación de los citados mecanismos obliga a evaluar si el establecimiento de todos ellos responde a las mismas justificaciones y si puede exhibir toda clase de características.
7. Este Colegiado ha tenido la oportunidad de precisar que la instalación de rejas como medida de seguridad vecinal no es, *per se*, inconstitucional, si se parte de la necesidad de compatibilizar o encontrar un marco de coexistencia entre la libertad de tránsito como derecho y la seguridad ciudadana como bien jurídico. Lo inconstitucional sería, en todo caso, que el mecanismo implementado o la forma de utilizarlo resulten irrazonable, desproporcionado o simplemente lesivo de cualquiera de los derechos constitucionales que reconoce el ordenamiento. Como lo ha sostenido la Defensoría del Pueblo en el

Informe Defensorial N.º 81 denominado *Libertad de tránsito y seguridad ciudadana. Los enrejados en las vías públicas de Lima Metropolitana*, emitido en el mes de enero de 2004, pp. 42, “No se puede admitir un cierre absoluto de una vía pública, ya que ello afectarían el contenido esencial del derecho al libre tránsito. Consecuentemente, se debe garantizar que los enrejados no sean un obstáculo para el ejercicio del derecho al libre tránsito, sino sólo una limitación razonable y proporcional. Ello quiere decir que dicha medida tiene que estar justificada por los hechos que le han dado origen, el crecimiento de la delincuencia; por la necesidad de salvaguardar un interés público superior, la protección del bien jurídico seguridad ciudadana; y debe ser proporcionada a los fines que se procuran alcanzar con ella”.

Análisis de la controversia

8. En el presente caso el recurrente cuestiona la reinstalación y mantención de rejas metálicas en una vía pública, lo que afectaría el libre tránsito.
9. De fojas 6 se observa la Resolución N.º 402-2009, emitida por el Ministerio Público, por la que dando respuesta a la denuncia presentada por los “*vecinos y propietarios en el CC.HH. Vinatea Reynoso y el Corregidor del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero [que señalan] que vienen siendo coaccionados por los propietarios de todos los vehículos que son guardados en su cuadra [] no tienen tranquilidad ni de día ni de noche, y están enclaustrados porque les cierran las rejas con cadena y candado día y noche*”, exhorta a la Municipalidad emplazada a efectos de que dé cumplimiento a la Ordenanza Municipal N.º 077, debiendo proceder al retiro de las rejas. Es por ello que, conforme se observa de fojas 94, la Municipalidad emplazada emitió la Resolución Gerencial N.º 667-2009/GDU/MDJLByR, por la que dispone, con fecha 18 de noviembre de 2009, el “inmediato retiro de las rejas instaladas en los complejos habitacionales de Vinatea Reynoso y El Corregidor”. Cabe mencionar que del Informe N.º 570-2009/SGOPYL/MDJLByR, de fecha 24 de noviembre de 2009, se extrae que las rejas fueron retiradas anteriormente por la Municipalidad emplazada debido a la denuncia realizada por los vecinos ante el Ministerio Público (fojas 92).
10. A fojas 54 consta el acta de la diligencia de constatación, de fecha 23 de setiembre de 2010, que expresa que entre los complejos habitacionales El Corregidor y Vinatea Reynoso “(...) *existe un espacio que las divide, además existe un portón de rejas tanto en el acceso que colinda con la Av. Estados Unidos, y otro portón de rejas que colinda con la calle Lanificio (...)*”. Asimismo en dicho documento se señala que dichas rejas se encuentran abiertas y que cuentan con vigilantes que se encargan de facilitar el acceso. En tal sentido este Colegiado advierte que las rejas que habían sido retiradas por la Municipalidad emplazada han sido nuevamente colocadas sin autorización municipal, puesto que a fojas 182 se encuentra el Informe N.º 487-2010/SGOPYL/MDJLByR, de fecha 18 de octubre de 2010, en el que expresamente se señala que “la Sub Gerencia de Obras Privadas y licencias NO ha otorgado autorización, para la reinstalación de rejas ubicadas entre los complejos habitacionales Vinatea Reynoso y El Corregidor” (subrayado agregado).
11. Finalmente a fojas 225 se aprecia la copia certificada del acta de constatación, de fecha 7 de diciembre de 2010, elaborada por la Policía Nacional del Perú, en la que se señala

que “(...) existe rejas metálicas con acceso vehicular y peatonal, sin vigilante nocturno, la tripulación observa que la reja metálica ubicada en el pasaje que colinda al ex local de Lanificio, el acceso vehicular y peatonal se encuentra totalmente cerrado y la reja metálica ubicada en la Av. EE.UU se encuentra abierta una puerta para peatones y una puerta para el ingreso de vehículos (...) sin vigilante nocturno (...)”.

12. En conclusión, de autos se evidencia que las rejas ubicadas entre los complejos habitacionales El Corregidor y Vinatea Reynoso, han sido colocadas nuevamente pese a que fueron retiradas por disposición municipal, al haberse constatado, por la denuncia de los mismos vecinos, que dichas rejas ocasionan alteraciones y perjudican la tranquilidad de la colectividad.
13. Acreditándose entonces la afectación del derecho a la libertad de tránsito la demanda debe ser estimada, de modo que la Municipalidad emplazada debe proceder al retiro inmediato de las rejas instaladas, y a realizar periódicamente la supervisión correspondiente de manera que no vuelva a instalarse las rejas metálicas, y se burle así las disposiciones del ente edil. Lo expresado no implica que la Municipalidad emplazada posteriormente –por circunstancias que lo ameriten– expida el permiso para la colocación de rejas.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1. Declarar **FUNDADA** la demanda de hábeas corpus, **al haberse acreditado la afectación del derecho a la libertad de tránsito** del recurrente.
2. **Ordenar** a la Municipalidad emplazada que disponga **el inmediato retiro de las rejas instaladas** entre los complejos habitacionales El Corregidor y Vinatea Reynoso del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, sin perjuicio de las sanciones administrativas que imponga por la instalación de las rejas aludidas en la presente sentencia sin autorización, debiendo realizar supervisiones periódicas a efectos de que no se vuelva a repetir estos actos.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MESÍA RAMÍREZ

ETO CRUZ

URVIOLA HANI

EXP. N.º 01351-2011-PHC/TC
SANTA
MARÍA ISABEL
CASTRO VILLEGAS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los **29 días del mes de marzo de 2012**, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Álvarez Miranda, Urviola Hani, Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos, Calle Hayen y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Isabel Castro Villegas contra la resolución expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Santa, de fojas 31 de enero de 2010, que declaró infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 19 de agosto de 2010 la recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra la Juez del Tercer Juzgado Penal, doña Ángela Luisa Tirado Castillo, y los vocales integrantes de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Santa, con la finalidad de que se declare la nulidad de la resolución de fecha 17 de enero de 2008 y de su confirmatoria de fecha 15 de setiembre de 2008, considerando que se está afectando su derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

Refiere que en el proceso que se siguió contra ella y sus padres por el delito de estelionato, fue condenada a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida en tres años, disponiéndose también el pago de una reparación civil. Señala que los emplazados no han motivado debidamente las resoluciones cuestionadas puesto que no se expresa "*cuál será la responsabilidad de la persona consignada como beneficiaria del anticipo de herencia*". Finalmente, refiere que el anticipo de herencia es un acto voluntario en el que la recurrente no puede intervenir, razón por la que los emplazados deben explicar cuál es el acto concreto realizado por la recurrente para que sea sancionada.

Realizada la investigación sumaria los emplazados expresan que las resoluciones cuestionadas han sido debidamente motivadas.

El Séptimo Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia del Santa declara infundada la demanda considerando que las resoluciones cuestionadas se encuentran debidamente motivadas, habiendo sido emitidas en un proceso regular.

La Sala Superior revisora confirma la apelada por similares fundamentos.

FUNDAMENTOS

Delimitación del Petitorio

1. La presente demanda **tiene por objeto que se declare la nulidad de la resolución** de fecha 17 de enero de 2008 y de su confirmatoria de fecha 15 de setiembre de 2008 (Exp N° 2006-1342-P), **considerando que no se encuentran debidamente motivadas**, puesto que no han expresado *"cuál [es] la responsabilidad de la persona consignada como beneficiaria del anticipo de herencia"*.

Cuestión Previa

2. Es preciso señalar que este Colegiado se pronunciará por la resolución que confirmó la sentencia condenatoria, ya que ésta evaluó y resolvió los cuestionamientos a la decisión del *a quo*, dándole firmeza a dicha resolución. Asimismo este Tribunal solo se pronunciará por la motivación de la resolución que confirmó la sentencia condenatoria, sin ingresar a cuestiones de subsunción o calificación penal, que son competencia exclusiva del juez penal.

Sobre el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales

3. El artículo 139°, inciso 3, de la Constitución establece que son principios y derechos de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional; en consecuencia cuando el órgano jurisdiccional imparta justicia está obligado a observar los principios, derechos y garantías que la Norma Suprema establece como límites del ejercicio de las funciones asignadas.
4. En ese sentido la necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y es, al mismo tiempo, un derecho constitucional de los justiciables. Mediante la motivación, por un lado, se garantiza que la impartición de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículos 45° y 138° de la Constitución) y, por el otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa.

La motivación insuficiente

5. Este Tribunal ya se ha referido, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para considerar que la decisión está debidamente motivada. Si bien no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, solo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo (STC N° 1701-2008-PHC/TC).

El caso de autos

6. El cuestionamiento de la recurrente gira en torno a la insuficiente motivación de las resoluciones judiciales que han determinado su responsabilidad por el delito de estelionato, establecido en el artículo 197°, inciso 4), del Código Penal.
7. Fluye de autos que el proceso penal estuvo seguido contra don Víctor Castro Lino, doña Primitiva Villegas de Castro (padres de la recurrente) y doña María Isabel Castro

Villegas (actual demandante) por el delito de estelionato. Se aprecia del auto de apertura de instrucción que obra a fojas 358 que a los procesados se les imputa los siguientes hechos: “(...) los esposos (denunciados) Víctor Castro Lino y Primitiva Villegas de Castro, con fecha veintitrés de junio del dos mil tres, ante el Notario Público Honorato Campos Iturrizaga, [habrían] transferido el inmueble ubicado en jirón Río Santa N° 159-A, segundo piso-Santa, a favor de su hija (codenunciada) María Isabel Castro Villegas, por Anticipo de Herencia, como es de ver la copia de la partida N° 11001775 de la Oficina Registral – Chimbote, de folios veintiocho, a sabiendas que dicho inmueble fue transferido en venta por los esposos con conocimiento de su nombrada hija al comprador que en vida fuera don Víctor Carbajal Cribillero, mediante contrato de promesa de venta, (...) cancelados por el comprador en armadas conforme el contrato, cuya única heredera legal resulta ser la denunciante doña Delia Morayda Carbajal Monzón (...)”. De la sentencia que condenó a la recurrente se advierte que el argumento principal para condenar a los procesados en el citado proceso penal es “(...) *que los acusados en connivencia a sabiendas de que el padre de la agraviada era prácticamente el propietario del inmueble con documento falso pactaron una transferencia vía anticipo de legítima, pues transfirieron como suyo bien ajeno estableciéndose de esta manera la responsabilidad penal de los acusados (...)*”. Asimismo a fojas 127 de autos corre la resolución que confirmó la sentencia condenatoria, argumentando que “(...) sí se cumplió con la cláusula quinta del contrato preparatorio de compraventa, por lo que no hubo razón para que se firmara el desistimiento; que esta circunstancia se ve reforzada con la pericia grafotécnica de parte (...) que no ha sido cuestionada a lo largo del proceso, lo que le otorga plena validez como prueba objetiva de cargo lo cual demuestra que el padre de la agraviada no firmó ningún documento en el que se desistía de la compra del inmueble, sino que los encausados elaboraron un documento en el que parece que éste se desistía lo cual no fue así, causándole perjuicio a la agraviada, como heredera, con la declaración del procesado Víctor Castro Lino, quien si bien alega que le arrebataron el documento original del desistimiento de compra venta, es por ello que no ha presentado el mencionado documento, también es cierto que sus afirmaciones resultan poco creíbles, (...) de lo que se colige que existen suficientes medios probatorios que demuestran que los procesados tienen responsabilidad en el delito que se les imputa (...)”.

8. De lo expuesto se aprecia que la resolución que confirmó la sentencia condenatoria consideró que ésta se encontraba arreglada a derecho, haciendo referencia de manera general a la responsabilidad de los emplazados (principalmente a los coprocesados de la recurrente en dicho proceso) por el hecho de haber transferido un bien inmueble que había sido vendido, utilizando para ello un documento adulterado. Sin embargo, de tal resolución no se desprende cuáles son los actos concretos realizados por la recurrente (coprocesada) que se subsumen en el tipo penal por el que ha sido condenada. Es decir, del contenido de la resolución cuestionada no se infiere qué conductas pasible de ser sancionada ha realizado la recurrente. Es preciso señalar que este Colegiado exige una debida motivación en atención a que en toda resolución judicial debe explicarse suficientemente las conductas por parte de los procesados que encuadran en el tipo penal, y exponerse la razón por la que van a ser sentenciados, de manera que quien recibe una sanción conoce de manera clara el motivo por el que determinados actos son pasibles de sanción. En el presente caso, se evidencia una motivación insuficiente puesto que la Sala

emplazada ha confirmado la sentencia condenatoria sustentando su decisión principalmente en la conducta de los coprocesados de la recurrente, pero sin explicar ni precisar cuál es el acto concreto realizado por la actora que se subsume en el tipo penal de estelionato, es decir, los emplazados no argumentan cómo el hecho de haber recibido un anticipo de legítima se subsume en el tipo penal por el que la recurrente está siendo condenada, verificándose de tal manera una insuficiente motivación que amerita un nuevo pronunciamiento por parte de la Sala emplazada.

9. Cabe señalar que lo expresado en la presente sentencia no implica de ninguna manera una intromisión de este Colegiado en las competencias del juez penal; es decir, la subsunción de las conductas ilícitas en la norma penal, sino el ejercicio de una competencia del juez constitucional, como lo es el verificar si una resolución judicial está revestida de una motivación que explique y sustente la decisión del juzgador, lo que no se ha cumplido en el caso de autos.
10. Por tanto, la demanda debe ser estimada al haberse acreditado la afectación al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales de la recurrente, y, por consiguiente, disponerse la nulidad de la resolución que confirmó la sentencia condenatoria y la emisión de una nueva resolución con una suficiente motivación, conforme a lo expresado en la presente resolución.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1. Declarar **FUNDADA** la demanda de hábeas corpus **al haberse acreditado la afectación del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales**; en consecuencia, se declara **INAPLICABLE** la Resolución de fecha 15 de setiembre de 2008, recaída en el Exp N.º 2006-1342-P, solo en cuanto a lo referido a la recurrente.
2. **Disponer** que la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Santa **emita una nueva resolución debidamente motivada** conforme a lo expresado en los fundamentos 9 y 10 supra.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ÁLVAREZ MIRANDA

URVIOLA HANI

VERGARA GOTELLI

MESÍA RAMÍREZ

BEAUMONT CALLIRGOS

CALLE HAYEN

ETO CRUZ

HABEAS CORPUS DECLARADOS IMPROCEDENTES

EXP. N.º 03909-2010-PHC/TC
CUSCO
JOHNN ANCHANTE
NARVÁEZ

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima (Arequipa), **1 de diciembre de 2010**

ASUNTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jhon Achahuanco Figuero, a favor de Johnn Anchante Narváez, **contra la resolución** expedida por la **Sala Penal de Apelaciones** de la Corte Superior de Justicia de Cusco de fojas 122, su fecha 13 de octubre de 2010, que declaró improcedente la demanda de autos; y,

ANTENDIENDO A

1. Que con fecha 1 de septiembre de 2010 don Johnn Anchante Narváez interpone **demanda de hábeas corpus** y la dirige **contra el coronel de la Policía Nacional** del Perú, señor Hugo Begazo Bedoya. **Alega vulneración a los derechos al debido proceso administrativo, al plazo razonable y a la libertad individual.**

Refiere que el 14 de junio de 2010, **cuando prestaba servicios en la Comisaría de Cusco como efectivo policial**, fue **comprendido en un procedimiento administrativo disciplinario sancionador** por presunta inconducta funcional de cobro indebido y otros, imponiéndosele como medida preventiva la separación al cargo de Jefe de Logística de la Comisaría. Agrega que al no haber concluido la investigación pese a que se excedió el plazo de 5 días, se ha convertido en una investigación indefinida, ilimitada e indeterminada, vulnerándose así el derecho al debido proceso administrativo, en lo que concierne al plazo razonable.

2. Que la Constitución Política del Perú de 1993, en el artículo 200.º, inciso 1), ha previsto que el proceso de hábeas corpus proceda ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos a ella. A su vez, el Código Procesal Constitucional en el artículo 25º, *in fine*, establece que el hábeas corpus también procede en defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad individual.
3. Que del análisis de lo expuesto en la demanda así como de la instrumental que corre en estos autos, **se advierte que lo que en puridad pretende el accionante es el cese del proceso disciplinario en el que se encuentra comprendido y su restitución en el cargo que venía desempeñando de jefe de Logística de la Comisaría de Cusco**; lo cual, como es evidente, **no puede ser resuelto en este proceso constitucional de la libertad como es el hábeas corpus**, por no ser la vía legal habilitada para ello, y porque, además, **los hechos alegados como lesivos en modo alguno inciden negativamente sobre su derecho a la libertad individual o los derechos conexos a**

ella, siendo ello manifiestamente incompatible con la naturaleza de este proceso constitucional libertario.

4. Que por consiguiente, dado que **la reclamación del recurrente (hecho y petitorio) no está referida al contenido constitucionalmente protegido** del derecho tutelado por el hábeas corpus, **resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional**, por lo que la demanda debe desestimarse.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar **IMPROCEDENTE** la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

VERGARA GOTELLI

ÁLVAREZ MIRANDA

URVIOLA HANI

EXP. N.º 03550-2011-PHC/TC
JUNÍN
DIMAS HUGO
FERNÁNDEZ BARRANTES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 14 de octubre de 2011

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Dimas Hugo Fernández Barrantes **contra la resolución expedida por la Sala de Vacaciones - Sede Central - de la Corte Superior de Justicia de Junín**, de fojas 949 (Tomo II), su fecha 1 de marzo de 2011 y el voto dirimente de fecha 22 de julio del 2011, de fojas 1041 (Tomo III) que declaró improcedente la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que con fecha 21 de octubre de 2010 don Dimas Hugo Fernández Barrantes interpone demanda de hábeas corpus contra don Miguel Ángel Villalobos Caballero, Fiscal Superior en lo Penal de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Huancayo y contra don Frank Almanza Altamirano, Fiscal Adjunto Superior de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Huancayo, **por vulneración de su derecho de ser juzgado en un plazo razonable, libertad individual y el principio de cosa decidida en sede fiscal**. Se solicita que se declare improcedente la reapertura de la investigación fiscal N.º 621-2009.
2. Que el recurrente refiere que por Resolución Fiscal N.º 323-2010 de fecha 28 de setiembre de 2010 se declaró fundada en parte la queja de derecho y se dispuso establecer si los hechos materia de la denuncia corresponden al mismo préstamo que se obtuvo de PNC Bank Nacional Asociación, se realicen nuevas diligencias para lo cual se amplió el plazo de la investigación por treinta días más. Añade que los hechos denunciados corresponden a los mismos hechos que han tenido pronunciamiento en anteriores investigaciones fiscales, en las que se declaró no haber mérito para presentar denuncia en su contra y se desestimaron las quejas de derecho presentadas por la parte denunciante.
3. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º del Código Procesal Constitucional, los procesos constitucionales de la libertad (entre los que se encuentra el hábeas corpus), tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo. En tal sentido, se advierte que la **procedencia del hábeas corpus se supedita a la real existencia de una afectación, o de una amenaza de afectación de la libertad individual o de algún derecho conexo a ella; por lo que si luego de presentada la demanda ha cesado la agresión o amenaza de violación del derecho invocado, no existe la necesidad de emitir un pronunciamiento de fondo, ya que se ha producido la sustracción de materia**.

4. Que en el caso de autos, a fojas 769 (Tomo II) obra la **Resolución** de fecha 30 de diciembre de 2010 que **pronunciándose respecto a lo dispuesto en la Resolución Fiscal N.º 323-2010** (fojas 194 Tomo I) en la Investigación N.º 621-2009, **resolvió no haber mérito a promover acción penal contra el recurrente y otros**. Estando a ello, es evidente que en el caso se ha producido la sustracción de la materia.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar **IMPROCEDENTE** la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

VERGARA GOTELLI
CALLE HAYEN
URVIOLA HANI

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 3 de mayo de 2012

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Javier Chumbes Nicho contra la resolución expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, de fojas 40, su fecha 6 de diciembre de 2011, que declaró improcedente la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que con fecha 17 de octubre el 2011, don Javier Chumbes Nicho interpone demanda de hábeas corpus contra los jueces superiores de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, señores Hinostroza Pariachi y Rojas Sierra, y contra los jueces supremos de la Corte Suprema de Justicia de la República, señores Sivina Hurtado, Ponce de Mier, Urbina Ganvini, Vinatea Medina y Pariona Pastrana, con el objeto de que se declare nula la sentencia que lo condena por el delito de tráfico ilícito de drogas y nula la sentencia que la confirma (Expediente N.º 420-2004). Alega la vulneración de los derechos al debido proceso, a la motivación de resoluciones judiciales y del principio de presunción de inocencia.

Refiere el recurrente que el único indicio para que se dicte la sentencia condenatoria en el proceso que se le siguió fue la declaración de Omar Martínez Sánchez quien lo acusó de ser la persona que lo recibió cuando llegó de Chiclayo y que lo acompañó al lugar donde se acondicionó las cápsulas que contenían clorhidrato de cocaína. Manifiesta que habría sido reconocido mediante la hoja de consulta en línea del RENIEC, lo que vulnera además el *principio de veracidad* por no haber sido reconocido en forma personal; además señala que no se tomó en cuenta la declaración del cosentenciado Rómulo Manuel Barrutia Ángeles, quien señaló que el recurrente sólo le había pedido un favor por el arrendamiento de una habitación al no contar con documento nacional de identidad.

2. Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200º, inciso 1, que el hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que alegue la presunta afectación del derecho a la libertad individual o sus derechos conexos puede dar lugar al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el hábeas corpus, pues para ello debe examinarse previamente si los hechos cuya inconstitucionalidad se denuncia revisten relevancia constitucional, y luego si agravan el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la libertad personal. Es por ello que el Código Procesal Constitucional prevé en su artículo 5º, inciso 1), que “*no proceden los procesos constitucionales cuándo: 1) los hechos y el petitorio de la*

demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado”.

3. Que en el presente caso si bien el recurrente cuestiona las resoluciones que lo condenan por la comisión del delito de Tráfico Ilícito de Drogas (Expediente N.º 420-2004) manifestando que se ha afectado el derecho a la presunción de inocencia y los derechos al debido proceso y a la debida motivación de las resoluciones judiciales, derechos que pueden ser materia de protección en un proceso constitucional de hábeas corpus, fluye del contenido de su demanda que su argumentación está dirigida a que se efectúe una nueva valoración probatoria de los actuados, en especial de la declaración de los cosentenciados Omar Martínez Sánchez y Rómulo Manuel Barrutia Ángeles, pues lo que afirma es que en la resolución cuestionada no se esgrime ningún fundamento sólido que lleve a convencer de su responsabilidad, lo que evidencia que en realidad pretende que este Colegiado se arrogue facultades del juez penal.
4. Que por consiguiente, resulta de aplicación el inciso 1 del artículo 5º del Código Procesal Constitucional, toda vez que **los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido** por el derecho invocado.
5. Que a mayor abundamiento, en reiterada jurisprudencia tiene dicho este Tribunal Constitucional que **el proceso de hábeas corpus no debe ser utilizado como una vía indirecta para revisar una decisión jurisdiccional final que implica un juicio de reproche penal sustentado en actividades investigatorias y en la valoración de pruebas**, actividades que son propias de la jurisdicción ordinaria y no de la constitucional.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar **IMPROCEDENTE** la demanda de hábeas corpus.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ÁLVAREZ MIRANDA
URVIOLA HANI
VERGARA GOTELLI
MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN
ETO CRUZ

HABEAS CORPUS IMPROCEDENTES - INFUNDADAS

EXP. N.º 1017-2010-PHC/TC

LAMBAYEQUE

MARCO ANTONIO

PRECIADO RUIZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los **18 días de mayo de 2010**, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Calle Hayen y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marco Antonio Preciado Ruíz contra la sentencia expedida por la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 99, su fecha 28 de enero del 2010, que declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 17 de diciembre del 2009, don Marco Antonio Preciado Ruíz interpone demanda de hábeas corpus contra don Raúl Alejandro Bazán Choquehuanca, juez del Segundo Juzgado Especializado Penal de Chiclayo, por vulneración de sus derechos constitucionales a la motivación de las resoluciones judiciales, de defensa y al debido proceso, así como del principio de presunción de inocencia. Refiere el recurrente que se le inició proceso penal por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de estafa, pero el Auto Apertorio de Instrucción, Resolución N.º UNO, de fecha 11 de octubre del 2001 (Expediente N.º 2001-5532-0-1706-JR-PE-2), se respalda en pruebas insubsistentes, esto es, sólo se basa en el atestado policial y la declaración de la supuesta agraviada; agrega que no se puede afirmar que su conducta se subsuma en el tipo penal imputado y que el referido auto apertorio carece de motivación.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, con fecha 17 de diciembre del 2009, declaró improcedente la demanda, por considerar que a la fecha el proceso penal seguido al actor se encuentra para sentenciar, por lo que la medida de comparecencia restringida habría cumplido su finalidad y ya no tiene incidencia en la libertad del actor.

La Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque confirmó la apelada, por considerar que lo que se pretende es impedir la culminación del proceso penal contra el recurrente, que se encuentra para dictar sentencia.

FUNDAMENTOS

1. El **objeto** de la presente demanda es que **se declare la nulidad del Auto Apertorio de Instrucción**, Resolución N.º UNO, de fecha 11 de octubre del 2001 (Expediente N.º

2001-5532-0-1706-JR-PE-2) proceso penal seguido contra don Marco Antonio Preciado Ruíz por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de estafa; **por vulneración de sus derechos a la motivación de resoluciones judiciales, de defensa y al debido proceso**, así como del principio de **presunción de inocencia**.

2. El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo declaró improcedente *in limine* la demanda, pronunciamiento que fue confirmado por la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Sin embargo, en atención a los principios de celeridad y economía procesal, este Tribunal considera pertinente emitir un pronunciamiento de fondo, toda vez que en autos aparecen los elementos necesarios para ello.
3. La Constitución Política establece en el artículo 200, inciso 1, que a través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello debe analizarse previamente si los actos denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados.
4. En ese sentido, los argumentos del recurrente sobre la falta de pruebas para procesarlo por el delito de estafa constituyen argumentos de defensa orientados a desvirtuar su presunta responsabilidad en el mencionado delito que sólo corresponden ser valorados en el propio proceso penal y no pueden ser materia de análisis en el presente proceso de hábeas corpus; siendo de aplicación, respecto de este extremo, el artículo 5°, inciso 1) del Código Procesal Constitucional.
5. El Tribunal Constitucional ha señalado que la exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas, conforme al artículo 139°, inciso 5) de la Constitución Política del Perú, garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de impartir justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. En tal sentido, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales implica la exigencia de que el órgano jurisdiccional sustente de manera lógica y adecuada los fallos que emita en el marco de un proceso.
6. Respecto al extremo de la demanda en el que se esgrime la falta de motivación del Auto de Apertura de Instrucción, Resolución N.º UNO, de fecha 11 de octubre del 2001, por el que se le abre instrucción al recurrente por el delito contra el patrimonio en la modalidad de estafa, tal auto debe ser analizado conforme al artículo 77° del Código de Procedimientos Penales, que establece como requisitos para el dictado del auto de apertura de instrucción que de los actuados aparezcan indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la existencia de un delito, que se haya individualizado a los inculpados y que la acción penal no haya prescrito o no concurra otra causa de extinción de la acción penal.

7. En el presente caso, se observa que la resolución cuestionada, obrante a fojas 65, cumple lo previsto en el artículo 77° del Código de Procedimientos Penales; en efecto, en ella se expresa en forma clara cuál es el hecho que determina la imputación penal contra el recurrente, precisándose que “(...) el denunciado se dedicaba a la venta de terrenos, celebró con éste (...) un contrato de compra venta de un lote de terreno (...) habiendo pagado una inicial de trescientos nuevos soles y cuotas de cien nuevos soles mensuales conforme se aprecia de los recibos expedidos (...) ha perjudicado económicamente a la agraviada quien creía que el denunciado efectivamente le vendía un terreno sobre el cual tenía disposición (...)”, por lo que **la alegada falta de motivación resulta desestimable**. Por consiguiente, respecto a este extremo es de aplicación, *contrario sensu*, el artículo 2° del Código Procesal Constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1. Declarar **IMPROCEDENTE** la demanda **respecto a la alegada falta de pruebas** contra el recurrente para el inicio del proceso penal.
2. Declarar **INFUNDADA** la demanda **porque no se ha acreditado la vulneración de los derechos a la motivación de las resoluciones judiciales, de defensa y al debido proceso**, respecto al cuestionamiento del Auto Apertorio de Instrucción, Resolución N.º UNO, de fecha 11 de octubre del 2001.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MESÍA RAMÍREZ
CALLE HAYEN
ETO CRUZ

EXP. N.º 01960-2011-PHC/TC
SANTA
HERIBERTO MANUEL BENITES
RIVAS A FAVOR DE LUIS HUMBERTO
ARROYO ROJAS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los **21 días del mes de setiembre de 2011**, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Álvarez Miranda, Beaumont Callirgos y Calle Hayen, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Humberto Arroyo Rojas contra la resolución expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Santa, de fojas 1288, su fecha 28 de marzo del 2011, que declaró infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 9 de noviembre del 2010, don Heriberto Manuel Benites Rivas interpone demanda de hábeas corpus a favor de don Luis Humberto Arroyo Rojas contra el juez del Juzgado Penal Especializado de Nuevo Chimbote, alegando la vulneración de los derechos al debido proceso, a la debida motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad individual.

El recurrente solicita que se declare nulo y sin efecto jurídico el auto de apertura de instrucción de fecha 12 de octubre del 2010, por el que se abre instrucción contra el favorecido y otros por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en grado de tentativa acabada o delito frustrado, Exp.N.º 000598-2010-0-2506-JR-PE-01, en el que se dictó mandato de comparecencia restringida, lo cual implica una restricción a su derecho a la libertad individual, sin que exista indicio ni elemento probatorio que permita judicializar el tema. Añade el recurrente que el cuestionado auto apertorio no contiene una descripción suficientemente detallada de los hechos considerados punibles y del material probatorio en que se fundamentan, ni la relación entre la conducta del procesado y el hecho punible; tratándose en realidad de una acusación genérica e impersonalizada, por lo que debe archivar definitivamente el proceso penal contra el favorecido.

A fojas 502 obra la declaración del favorecido quien se ratifica en todos los extremos de la demanda y también refiere que se han actuado una serie de pruebas que confirman que el auto apertorio es arbitrario y que amenaza su libertad individual, como la declaración de Hilda Soledad Saldarriaga Bracamonte, quien ha manifestado que no lo conoce y que dio su declaración policial bajo presión y amenaza. Asimismo refiere que el testimonio de la senora Saldarriaga corresponde a la de un testigo indirecto y que no se ha tomado en cuenta la versión del menor P.J.O.R, testigo presencial de los hechos.

A fojas 504 obra la declaración del juez emplazado, en la que señala que el auto apertorio cuestionado se encuentra debidamente motivado, y que el mandato de

comparecencia restringida no amenaza su libertad; asimismo, manifestó que contra este mandato se interpuso recurso de apelación que se encuentra pendiente de resolver(...).

El Procurador Público Adjunto de la Procuraduría del Poder Judicial contesta la demanda y solicita que se la declare improcedente arguyendo que el auto apertorio cuestionado se encuentra debidamente motivado (...).

El Primer Juzgado Especializado en lo Penal de Chimbote con fecha 26 de enero del 2011, declara improcedente la demanda considerando que el mandato de comparecencia ha sido apelado y se encuentra pendiente de resolución; que el auto cuestionado sí se encuentra motivado, y que en este proceso no se puede determinar si existe responsabilidad o no del favorecido respecto de los delitos imputados.

La Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Santa revoca la apelada y declara infundada la demanda estimando que las irregularidades que se hubieran presentado en la investigación preliminar deben ser cuestionadas en el proceso penal; que el auto cuestionado se encuentra debidamente motivado; que el mandato de comparecencia restringido ha sido dictado conforme a ley y que se encuentra pendiente de resolver la apelación.

FUNDAMENTOS

1. El **objeto de la demanda es que se declare nulo y sin efecto jurídico el auto de apertura de instrucción** de fecha 12 de octubre del 2010, por el que se abre instrucción contra don Luis Humberto Arroyo Rojas y otros por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en grado de tentativa acabada o delito frustrado y la nulidad de todo lo actuado en el Proceso Penal, N.º 000598-2010-0-2506-JR-PE-01. **Se alega la vulneración de los derechos al debido proceso, a la debida motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad individual.**
2. El Tribunal Constitucional ya ha señalado en forma reiterada que **el proceso de hábeas corpus no puede servir para determinar la responsabilidad penal de los procesados, ni valorar las pruebas con las que se acreditarían o no su responsabilidad.** En ese sentido, los argumentos expuestos en la demanda, con los que se cuestiona el testimonio de una testigo –supuestamente dado bajo presión–, y el posterior cambio de versión; así como el que las pesquisas realizadas por la policía fueron manipuladas, constituyen argumentos orientados a desvirtuar las pruebas que acreditarían la supuesta participación del favorecido en el delito imputado y que deben dilucidarse exclusivamente en el proceso penal, siendo de aplicación en este extremo el artículo 5º, inciso 1), del Código Procesal Constitucional.
3. La necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas responde a un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y al mismo tiempo es un derecho constitucional de los justiciables. Mediante la motivación, por un lado, se garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículos 45º y 138º de la Constitución Política del Perú) y, por el otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa. Sin embargo, “(...)

la Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y que, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión (Expediente N.º 1230-2002-HC/TC, fundamento 11)”.

4. El artículo 77º del Código de Procedimientos Penales establece como requisitos para el dictado del auto de apertura de instrucción que de los actuados aparezcan indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la existencia de un delito, que se haya individualizado a los inculpados y que la acción penal no haya prescrito o no concurra otra causa de extinción de la acción penal.
5. Desde esta perspectiva constitucional y a tenor de lo dispuesto en el artículo 77º del Código de Procedimientos Penales, que regula la estructura del auto de apertura de instrucción, este Colegiado aprecia que el Auto Apertorio de Instrucción de fecha 12 de octubre del 2010, obrante a fojas 526 de autos, sí se adecua en rigor a lo que estipulan tanto la Constitución como la ley procesal penal citada, ya que de los hechos expuestos en el Considerando Primero se advierte la descripción fáctica del evento delictuoso y la vinculación del favorecido con la comisión del ilícito; es decir, se le acusa al favorecido de ser autor intelectual del atentado en contra de don Ezequiel Dionisio Nolasco Campos por un móvil político, por las denuncias de corrupción en el Gobierno Regional de Áncash, conforme a la declaración de la testigo Saldarriaga Bracamonte, la propia declaración del agraviado que lo acusa de ser autor intelectual del atentado en su contra y las llamadas que desde su celular habría realizado.
6. Además, debe tomarse en cuenta que la finalidad del auto apertorio es dar inicio al proceso penal, por lo que no puede exigirse en dicha instancia el mismo grado de exhaustividad en la descripción de los hechos y el análisis de las pruebas que sí se reclama en una sentencia, que es el momento en el que recién se determina la responsabilidad penal del imputado, luego de haber realizado una intensa investigación y de haber actuado las pruebas presentadas por las partes.
7. Por consiguiente; es de aplicación, *a contrario sensu*, el artículo 2º del Código Procesal Constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1. Declarar **IMPROCEDENTE** la demanda respecto de lo señalado en el fundamento 2; y,
2. Declarar **INFUNDADA** la demanda porque **no se ha acreditado la vulneración de los derechos al debido proceso, debida motivación de las resoluciones judiciales y libertad individual.**

Publíquese y notifíquese.

SS.

ÁLVAREZ MIRANDA, BEAUMONT CALLIRGOS, CALLE HAYEN

EXP. N.º 00229-2012-PHC/TC
LORETO
JHOY JAVIER
VÁSQUEZ ZEVALLOS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los **3 días del mes de mayo de 2012**, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Álvarez Miranda, Urviola Hani, Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos, Calle Hayen y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto singular del magistrado Vergara Gotelli, que se agrega

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jhoy Javier Vásquez Zevallos contra la resolución expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Loreto, de fojas 47, su fecha 21 de octubre del 2011, que declaró improcedente *in límine* la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 5 de octubre del 2011 don Jhoy Javier Vásquez Zevallos interpone demanda de hábeas corpus contra la juez del Cuarto Juzgado Penal de Maynas, doña Alcía García Ruiz y contra los magistrados de la Segunda Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, señores Del Piélagó Cárdenas, García Torres y Sologuren Anchante; por vulneración de los derechos al debido proceso, a la debida motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad individual. Solicita la nulidad del Auto de Apertura de Instrucción, Resolución N° Uno, de fecha 18 de noviembre del 2010.

El recurrente señala que por Auto de Apertura de Instrucción, Resolución N.º Uno, de fecha 18 de noviembre del 2010, se le inició proceso penal con mandato de detención por el delito contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas, favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de tráfico en su modalidad agravada –integrantes de una organización– (Expediente N.º 03250-2010-0-1903-JR-PE-04). El accionante considera que no debió aplicársele el artículo 297º, sino el artículo 296º del Código Penal porque no es integrante de ninguna organización dedicada al tráfico ilícito de drogas y solo tiene un coprocesado. También refiere que el mandato de detención, contenido en el cuestionado auto no se encuentra debidamente motivado pues se ha establecido que no tiene arraigo dentro de la localidad, sin considerar que tiene domicilio conocido, un hogar debidamente constituido y que carece de antecedentes policiales y judiciales; sostiene que, a pesar de ello, los magistrados superiores emplazados tampoco motivaron la Resolución N.º Dos, de fecha 4 de febrero del 2011, que confirmó el mandato de detención.

El Primer Juzgado Penal de Iquitos, con fecha 5 de octubre del 2011, declaró improcedente la demanda al considerar que en el proceso de hábeas corpus no corresponde analizar los tipos penales por los cuales se instruye un proceso penal.

La Sala revisora confirmó la apelada por considerar que el mandato de detención se encuentra conforme al artículo 135º del Código Procesal Penal y que se tiene la vía ordinaria para cuestionar la calificación del delito imputado, la valoración de los hechos y las pruebas del proceso penal.

FUNDAMENTOS

1. El objeto de la demanda es que se declare nulo el auto de apertura de instrucción, Resolución N.º Uno, de fecha 18 de noviembre del 2010, por el que se le inició proceso penal con mandato de detención a don Jhoy Javier Vásquez Zevallos por el delito contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas, favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de tráfico en su modalidad agravada – integrantes de una organización– (Expediente N.º 03250-2010-0-1903-JR-PE-04). Se alega la vulneración de los derechos al debido proceso, a la debida motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad individual.
2. La Constitución Política del Perú establece en el artículo 200º, inciso 1, que a través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a ella. No obstante, debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue *a priori* afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si los actos denunciados afectan el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados.
3. El Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia ha establecido que **no es función del juez constitucional la calificación jurídica de los hechos imputados, la subsunción de la conducta en un determinado tipo penal, la determinación de la inocencia o responsabilidad penal del imputado, la realización de diligencias o actos de investigación, el reexamen o revaloración de los medios probatorios, ni la resolución de los medios técnicos de defensa, pues ello es tarea exclusiva del juez ordinario.**
4. En ese sentido, someter al análisis el argumento de la demanda para solicitar la nulidad del auto de apertura de instrucción por la indebida tipificación del delito imputado, porque don Jhoy Javier Vásquez Zevallos no pertenecería a una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas, excede el objeto de los procesos constitucionales de la libertad y en estricto el contenido de los derechos protegidos por el hábeas corpus, pues aquello es tarea exclusiva del juez ordinario y escapa de las competencias del juez constitucional; por consiguiente resulta de aplicación el artículo 5º, inciso 1, del Código Procesal Constitucional.
5. El Primer Juzgado Penal de Iquitos declaró improcedente *in limine* la demanda, pronunciamiento que fue confirmado por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Loreto. Sin embargo, en atención a los principios de celeridad y economía procesal, este Tribunal considera pertinente emitir pronunciamiento respecto a la supuesta vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, respecto del mandato de detención, toda vez que en autos aparecen los elementos necesarios para ello.
6. El derecho a la libertad personal, como todo derecho fundamental, no es absoluto; el artículo 2º, inciso 24), literales a) y b), de la Constitución Política del Perú establece que está sujeto a regulación, de modo que puede ser restringido o limitado mediante ley. Por ello, este Tribunal ha sostenido en reiterada jurisprudencia que la detención judicial

preventiva es una medida provisional que limita la libertad física, pero no por ello es, *per se*, inconstitucional, en tanto no comporta una medida punitiva, ni afecta la presunción de inocencia que asiste a todo procesado y, legalmente, se justifica siempre y cuando existan motivos razonables y proporcionales para su dictado.

7. La exigencia de la motivación en la adopción o el mantenimiento de la detención judicial preventiva debe ser estricta, pues sólo de esa manera es posible despejar la existencia de arbitrariedad en la decisión judicial, a la vez que con ello se permite evaluar si el juez penal ha obrado de conformidad con la naturaleza excepcional, subsidiaria y proporcional de esta medida. Al respecto, el Tribunal Constitucional (Expediente N.º 1091-2002-HC/TC) ha señalado que la justicia constitucional no es competente para determinar la configuración de cada presupuesto legal que legitima la adopción de la detención judicial preventiva, lo cual es tarea de la justicia penal ordinaria; sin embargo, sí es su atribución verificar que su imposición sea acorde a los fines y al carácter subsidiario y proporcional de dicha institución, lo que debe estar motivado en las resoluciones judiciales que imponen la medida coercitiva de la libertad.
8. En el caso de autos, se observa que la Resolución N.º Dos, de fecha 4 de febrero del 2011 (fojas 15), que confirmó el mandato de detención contenido en el auto de apertura de instrucción, Resolución N.º Uno, de fecha 18 de noviembre del 2010, sí cumple la exigencia constitucional de la motivación debida de las resoluciones judiciales, al señalar en el considerando 2.2, incisos a, b y c, la suficiencia probatoria que vincula al recurrente con el delito imputado; como lo es la ampliación de su declaración en presencia del representante del Ministerio Público, la sindicación en su contra por parte del empleado de la empresa DHL Express Perú SAC y la pericia grafotécnica que concluye que las escrituras en las guías corresponden al recurrente; y, respecto al peligro de fuga, fundamenta su decisión en el considerando 2.3, incisos a y b, señalando que no puede afirmarse que el recurrente tenga arraigo y que en varias oportunidades ha utilizado el nombre de terceras personas con el fin de no ser descubierto, por lo que existe el peligro de evasión de la justicia, siendo de aplicación el artículo 2º, *a contrario sensu*, del Código Procesal Constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1. Declarar **IMPROCEDENTE** la demanda en el extremo referido a la **tipificación del delito**.
2. Declarar **INFUNDADA** la demanda porque **no se ha acreditado la vulneración del derecho a la debida motivación** de las **resoluciones judiciales** en el mandato de detención.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ÁLVAREZ MIRANDA, URVIOLA HANI, MESÍA RAMÍREZ, BEAUMONT CALLIRGOS, CALLE HAYEN, ETO CRUZ

HABEAS CORPUS DECLARADOS INFUNDADAS

EXP. N.º 05766-2009-PHC/TC
HUAURA
HERLADO ERASMO
BLAS FLORES

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los **15 días del mes de enero de 2010**, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Heraldo Erasmo Blas Flores contra la sentencia expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas 157, su fecha 2 de octubre del 2009, en el extremo que declaró infundada la demanda respecto a la vulneración del derecho al libre tránsito.

ANTECEDENTES

Con fecha 13 de agosto de 2009, don Heraldo Erasmo Blas Flores interpone demanda de hábeas corpus a nombre propio y en representación de los señores Miguel Chávez Ramírez, Dionicio Cotrina Muñoz, José Garrido Espinoza, Guzmán Delgado López y Félix Chalco Quispe, miembros de la Asociación de Ganaderos Virgen de Fátima, contra don Alfredo Delgadillo Fernández, como apoderado de la Corporación Agropecuaria Santa María S.A.C., por vulneración de los derechos a la libertad de tránsito y a la inviolabilidad de domicilio; **sostiene que la emplazada ha cerrado la carretera de acceso al domicilio de los residentes de la Asociación de Ganaderos Virgen de Fátima, impidiéndoles el libre ingreso y salida a sus viviendas por haber edificado montículos de arena en la carretera de ingreso a dicha Asociación.**

Realizada la investigación sumaria, los recurrentes señalan que la empresa emplazada levantó un alto de arena de aproximadamente dos metros, con un cargador frontal, el cual cerró el pase de ingreso a su asociación ubicada en la unidad catastral 90401 de San Felipe Alto, Distrito de Vegueta, donde los recurrentes son poseionarios de algunos lotes. De otro lado, la demandada refiere que su empresa es propietaria y poseionaria del terreno cuestionado, siendo su extensión 1,509.4677 Has., y que en dicho terreno no existe ninguna vía pública, que las personas que la habitan son invasores a quienes se les ha respetado su libertad de tránsito, y que siendo así, ellos no pueden condicionar caminos ni carreteras a su antojo, más aún si el ingreso a sus viviendas tiene todos los accesos, al encontrarse el terreno desolado,

El Primer Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Huaura, con fecha 28 de agosto de 2009, declara fundada la demanda en el extremo referido a la vulneración del derecho al libre tránsito de los recurrentes por la colocación de una tranquera en el puente San Felipe Alto, por considerar que luego de la interposición de la demanda

ésta había cesado por actos realizados por los mismos recurrentes; y la declara infundada respecto a la vulneración del derecho al libre tránsito en el extremo de la edificación de montículos de arena en la carretera de ingreso a la Unidad Catastral N.º 90401, por considerar que no se encontraría probado que el demandante haya ordenado *la edificación de montículos de arena*.

La Sala revisora confirma la apelada por los mismos fundamentos, y agrega que no se llegó a determinar por orden de quien se mandó edificar los montículos de arena, pero que al momento de la inspección judicial la jueza ordenó su retiro.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. **El objeto de la demanda es que se disponga retirar el montículo de arena, de aproximadamente dos metros de altura y de una longitud aproximada de 300 metros, que ha cerrado la carretera de acceso a los recurrentes, Asociación de Ganaderos Virgen de Fátima ubicado en la unidad catastral 90401 de San Felipe Alto, Distrito de Vegueta, así como les han restringido el ingreso de la vivienda sufrida** por el recurrente Miguel Chávez Ramírez y que el juez de primera instancia declaró infundada, debe ser entendida como fundada, dado que el juez del Primer Juzgado Penal Liquidador de Huaura ordenó su retiro, lo que además no fue materia de impugnación. Asimismo, respecto a la vulneración del derecho al libre tránsito de los recurrentes por la colocación de una tranquera en el puente San Felipe Alto, este Tribunal no va a emitir pronunciamiento, dado que fue declarada fundada, por la instancia precedente y constituye cosa juzgada.

Análisis del caso de autos

2. La Constitución ha consagrado el proceso de hábeas corpus como la garantía que procede contra el hecho u omisión, de parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos a ella, entre ellos la libertad de tránsito. Así, **el propósito fundamental del hábeas corpus restringido es tutelar el ejercicio del atributo *ius movendi et ambulandi*, que constituye la posibilidad de desplazarse autodeterminativamente** en función a las propias necesidades y aspiraciones personales, a lo largo y ancho del territorio, así como a ingresar o salir de él y en su acepción más amplia en supuestos en los cuales se impide, ilegítima e inconstitucionalmente, el acceso a ciertos lugares, entre ellos, el propio domicilio; no obstante, puede ser condicionado y limitado por ley [Cfr. Sentencia recaída en el caso María Luisa Gaytán Roncal y otra, en la que el Tribunal ha señalado que: *“el derecho a la libertad de tránsito se vulnera no sólo cuando una persona, por sí misma, impide el libre desplazamiento a otra, sino también cuando coloca, injustificadamente, obstáculos materiales que [lo] restringen, (...) [p]or ello, el hábeas corpus restringido (...) también tutela aquellos supuestos en los cuales se impide, ilegítima e inconstitucionalmente, el acceso a ciertos lugares, entre ellos, el propio domicilio”* (STC 07455-2005-HC/TC).

3. En el presente caso, es necesario analizar si el montículo de arena de aproximadamente dos metros de altura y de una longitud aproximada de 300 metros ha cerrado la carretera de acceso a los recurrentes a la unidad catastral 90401 de San Felipe Alto, distrito de Vegueta. Al respecto **se aprecia de los instrumentales y demás actuados que corren en los autos (fs.43-53), que los montículos de tierra estarían ubicados en ambos lados de la vía de acceso, por lo que no se estaría obstruyendo ni cerrando el paso.**
4. Asimismo, respecto a la **alegada obstrucción en el ingreso y salida de las viviendas de los recurrentes**, del acta de diligencia de inspección judicial de fecha 14 de agosto de 2009, **no se aprecia tal restricción**, por lo que debe ser desestimada.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

Declarar **INFUNDADA** la demanda de hábeas corpus de autos.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MESÍA RAMÍREZ

BEAUMONT CALIRGOS

ETO CRUZ

EXP. N.º 02068-2011-PHC/TC
SAN MARTÍN
OSMAR JAIRO CABRERA
CABRERA (REF. EXP. 6060-2009 SALA 2)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los **18 días del mes de julio de 2011**, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Álvarez Miranda, Beaumont Callirgos y Calle Hayen, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Osmar Jairo Cabrera Cabrera contra la resolución expedida por la Sala Mixta de Emergencia de la Corte Superior de Justicia de San Martín, de fojas 173, su fecha 17 de febrero del 2011, que declaró infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 25 de setiembre del 2009, don Osmar Jairo Cabrera Cabrera interpone demanda de hábeas corpus contra el Juez del Primer Juzgado Especializado en lo Penal del Módulo Básico de Justicia- Rioja, don Rigoberto Arturo Campos Salazar, y contra el Fiscal Adjunto Provincial Penal de la Segunda Fiscalía Mixta de Rioja- San Martín, don Juan Carlos Díaz Liza, alegando la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la tutela judicial y a la motivación de resoluciones judiciales, así como de los principios de presunción de inocencia y de legalidad, por lo que solicita la nulidad del Auto Apertorio de Instrucción de fecha 4 de junio del 2009.

El recurrente refiere que la denuncia presentada por el fiscal Díaz fue acogida en su totalidad por el juez emplazado, quien procedió a expedir el auto en cuestión, iniciándosele proceso penal como cómplice primario del delito contra la administración pública en la modalidad de Colusión y como autor del delito contra la Administración de Justicia en la modalidad de Fraude Procesal (Expediente N.º 2009-0255-0-2208-JR-PE-01), con mandato de comparecencia restringida, sin que se haya determinado su presunta vinculación con los delitos imputados.

La demanda fue declarada improcedente *in límine* por el Primer Juzgado Penal de Moyobamba, por Resolución de fecha 25 de setiembre del 2009, en aplicación del artículo 4º del Código Procesal Constitucional al considerar que no existía resolución firme; y la Sala Penal de Moyobamba de la Corte Superior de Justicia de San Martín confirmó la mencionada resolución en aplicación del artículo 5º inciso 2) del Código Procesal Constitucional señalando que “existen vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias”.

El Tribunal Constitucional mediante Resolución de fecha 26 de enero del 2010, declaró improcedente la demanda respecto del fiscal emplazado y nulo todo lo actuado, debiéndose admitirse a trámite la demanda respecto del juez emplazado y del cuestionamiento del Auto Apertorio de Instrucción de fecha 4 de junio del 2009 (fojas 81).

A fojas 110 obra la declaración del juez emplazado, en la que se señala que el auto cuestionado ha sido dictado conforme al artículo 77° del Código de Procedimientos Penales, y que los hechos irregulares o delictuosos los planteó el fiscal ante el resultado de un examen realizado por la Gerencia Zonal Norte de la Contraloría General de la República por cargos formulados por la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca.

El Procurador Público ad hoc para los asuntos constitucionales del Poder Judicial señala que en el proceso penal seguido contra el recurrente se están respetando sus derechos y que el auto de apertura cuestionado ha sido dictado conforme a ley.

A fojas 134 obra la declaración del recurrente, en la que se señala que en el auto cuestionado no se han plasmado los razonamientos que efectivamente lo vinculen con los hechos cuando se desempeñó como asesor legal externo de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca; asimismo, refiere que al ser 18 los procesados es obligatorio describir con precisión los hechos, medios probatorios y participación de cada uno, lo que no sucede en el auto apertorio cuestionado.

El Primer Juzgado Penal Liquidador de Moyobamba, con fecha 6 de diciembre del 2010, declaró infundada la demanda al considerar que el auto apertorio de instrucción cuestionado fue dictado por juez competente y conforme a lo señalado en el artículo 77° del Código de Procedimientos Penales, y agregando que la imputación de los ilícitos penales no vulneraba la presunción de inocencia.

La Sala Mixta de Emergencia de la Corte Superior de Justicia de San Martín confirmó la apelada por similares fundamentos.

FUNDAMENTOS

1. **El objeto de la demanda es que se declare nulo el Auto Apertorio de Instrucción** de fecha 4 de junio del 2009, por el que se inicia proceso penal contra Osmar Jairo Cabrera Cabrera y otros como cómplice primario del delito contra la administración pública en la modalidad de Colusión y como autor del delito contra la Administración de Justicia en su modalidad de Fraude Procesal (Expediente N.º 2009-0255-0-2208-JR-PE-01). **Se invoca la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la tutela judicial y a la motivación de resoluciones judiciales así como los principios de presunción de inocencia y de legalidad.**
2. La necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas responde a un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y al mismo tiempo es un derecho constitucional de los justiciables. Mediante la motivación, por un lado, se garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículos 45° y 138° de la Constitución Política del Perú) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa. Sin embargo, “(...) la Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y que, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión (Expediente N.º 1230-2002-HC/TC, fundamento 11)”.

3. El artículo 77° del Código de Procedimientos Penales establece como requisitos para el dictado del auto de apertura de instrucción que de los actuados aparezcan indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la existencia de un delito, que se haya individualizado a los inculpados y que la acción penal no haya prescrito o no concurra otra causa de extinción de la acción penal.
4. Desde esta perspectiva constitucional y a tenor de lo dispuesto en el artículo 77° del Código de Procedimientos Penales, que regula la estructura del auto de apertura de instrucción, este Colegiado aprecia que el Auto Apertorio de Instrucción de fecha 4 de junio del 2009, a fojas 36 de autos sí se adecua en rigor a lo que estipulan tanto la Constitución como la ley procesal penal citada, al señalar, a fojas 37, numeral 1: “(...)

“(...)1.En la presente investigación se determina que el ex Alcalde (...) y el ex asesor externo de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, inobservaron la normatividad, dando trámite, al Recurso de Apelación, sobre un acto de otorgamiento de la Buena Pro ya consentido otorgándose la misma a la empresa apelante, hecho que ocasionara perjuicio económico a la Entidad por S/. 10 002,17 (...)”. Y a fojas 43 en el literal c, 3) se señala que *“(...) El asesor externo de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, Abogado Osmar Jairo Cabrera Cabrera emitió el Informe Legal N.034-2006-MDNC/ALE del 27NOV2006, opinando que se declare fundado el Recurso de Apelación por las razones expuestas (errores aritméticos de la propuesta económica), expidiéndose la Resolución de Alcaldía N. 229-2006-MDNC del 29NOV2006, resolviéndose declarar fundado el Recurso de Apelación (...)”;* es decir, se advierte la descripción fáctica del evento delictuoso y la vinculación del recurrente con los delitos imputados.

5. Además, debe tomarse en cuenta que la finalidad del auto apertorio es dar inicio al proceso penal, por lo que no puede exigirse en dicha instancia el mismo grado de exhaustividad en la descripción de los hechos que sí es exigible en una sentencia, que es el momento en el que recién se determina la responsabilidad penal del imputado, luego de haber realizado una intensa investigación y de haber actuado las pruebas presentadas por las partes.
6. Por consiguiente; es de aplicación, *a contrario sensu*, el artículo 2° del Código Procesal Constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

Declarar **INFUNDADA** la demanda porque **no se ha acreditado la vulneración de los derechos al debido proceso**, a la tutela judicial y a la motivación de resoluciones judiciales, así como de los principios de presunción de inocencia y de legalidad.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ÁLVAREZ MIRANDA, BEAUMONT CALLIRGOS, CALLE HAYEN

EXP. N.º 00806-2012-PHC/TC
CUSCO
FELICIA CORNEJO ORTIZ
Y OTROS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los **21 días del mes de agosto de 2012**, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Beaumont Callirgos, Vergara Gotelli y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Felicia Cornejo Ortiz contra la resolución expedida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cusco, de fojas 151, su fecha 17 de enero de 2012, que declaró infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 9 de diciembre de 2011 la recurrente en nombre propio y en representación de los propietarios y vecinos de las Urbanizaciones Santa Teresa, Santa Rosa, Marcavalle, Parque Industrial, Los Sauces y Villa Los Periodistas del distrito de Wanchaq, interpone demanda de hábeas corpus contra los señores Clodomiro Caparó Jara, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Wanchaq; Luzgardo Astorga Febres y Edwin Voter Velasco, **con la finalidad de que se paralicen las obras y se ordene la demolición de los avances en la construcción del cerco perimétrico de supuesta seguridad ubicado en la vía pública del Malecón Santa Mónica de acceso al Jirón Ricardo Palma de la Urbanización Santa Mónica, así como se retire cualquier otro elemento que obstaculice el libre tránsito en esta área.**

Sostiene que los demandados actualmente vienen colocando piedras labradas de cimentación para cerrar el único acceso hacia el Jirón Ricardo Palma y la Urbanización Santa Mónica, que viene a ser de libre y natural acceso y circulación de todos los habitantes de las urbanizaciones que existen en ese sector; (...) especialmente de los socios de la Urbanización Santa Teresa.

Realizada la constatación judicial se constata la existencia de un acceso peatonal de aproximadamente 3 metros de ancho que se encuentra al medio de un muro de piedra labrada con gradas de cemento que comunica la Av. Prolongación Túpac Amaru al Óvalo de la Urbanización Santa Mónica. Asimismo se constata que el acceso inspeccionado se encuentra libre de algún tipo de restricción, ya sea reja de seguridad u otro similar.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Cusco, con fecha 26 de diciembre de 2011 declaró infundada la demanda señalando que la refacción del mencionado muro de piedra labrada hecha por los directivos de la Urbanización Santa Mónica no incide directamente en el libre acceso y no ha sido intervenido de modo alguno,

manteniéndose en las condiciones normales para su uso por cualquier persona; no generándose la vulneración del derecho constitucional invocado.

La recurrida confirmó la apelada por similares fundamentos.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. La presente demanda de hábeas corpus **tiene por objeto** que en sede constitucional **la Municipalidad Distrital de Wanchaq y los otros dos demandados paralicen las obras y se ordene la demolición de los avances que se vienen haciendo con el propósito de instalar un cerco perimétrico de supuesta seguridad en la vía pública del Malecón Santa Mónica** de acceso al Jirón Ricardo Palma de la referida urbanización, **alegándose que se está afectando el derecho a la libertad de tránsito de la demandante.**

Análisis del caso materia de controversia constitucional

2. La Constitución establece expresamente en el artículo 200, *inciso* 1, que el hábeas corpus procede cuando se amenace o viole el derecho a la libertad individual a los derechos constitucionales conexos a ella. A su vez, el artículo 2° del Código Procesal Constitucional establece que los procesos constitucionales de hábeas corpus “(...) proceden cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona”.
3. Este Colegiado en las sentencias recaídas en los Expedientes N.º 349-2004-AA/TC, caso *María Elena Cotrina Aguilar* y 3482-2005-PHC/TC, caso *Luis Augusto Brain Delgado y otros* ha señalado que si bien las vías de tránsito público son libres en su alcance y utilidad, pueden sin embargo, en determinadas circunstancias, ser objeto de regulaciones y aun de restricciones. Cuando éstas restricciones provienen de particulares, es necesario que los particulares cuenten con una autorización por parte de la autoridad competente; si bien dicha autorización debería ser obtenida en forma previa por parte de la autoridad competente, es decir, la municipalidad, también es posible considerar que la vulneración del derecho a la libertad de tránsito habría cesado si durante el proceso se obtiene la autorización respectiva.
4. En el presente caso se observa que la recurrente denuncia la amenaza de su derecho al libre tránsito por la reconstrucción de un muro y reposición de unas rejas metálicas que existían con anterioridad y que la Municipalidad de Wanchaq en su momento sacó. Sin embargo, a fojas 47 y 48 se aprecia que la reposición de dichas rejas metálicas ha sido solicitada a la Municipalidad.
5. Por otro lado, analizados los documentos, el acta de constatación y las fotos que obran en autos, se verifica la existencia de una vía peatonal que permite el acceso al Óvalo de la Urbanización Santa Mónica. De esta manera, se acredita que la accionante tiene libertad de tránsito sin algún tipo de restricción entre la avenida Prolongación Tupac

Amaru y la Avenida La Cultura a través de este acceso que permite el paso conjunto de aproximadamente 6 personas. En ese contexto, este Colegiado reconoce que no existe una restricción de la libertad de tránsito de la recurrente.

6. Por último, el artículo 2° del Código Procesal Constitucional establece que el hábeas corpus procede cuando se viole o amenace un derecho fundamental, por lo que llevada esta abstracción normativa al caso concreto se puede concluir que no existe violación a la libertad de tránsito del recurrente, ni mucho menos se le ha puesto bajo amenaza, pues como ya se ha establecido, la reposición de las rejas no afecta el derecho a la libertad de tránsito de la recurrente, por lo que su pretensión no puede ser tutelada.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

Declarar **INFUNDADA** la demanda de hábeas corpus **por no haberse acreditado la vulneración del derecho a la libertad de tránsito.**

Publíquese y notifíquese.

SS.

BEAUMONT CALLIRGOS
VERGARA GOTELLI
ETO CRUZ

HABEAS CORPUS DECLARADOS NULOS

EXP. N.º 03155-2010-PHC/TC

LIMA

HEMBERT VLADIMIR

BARRUTIA BONILLA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 4 de octubre de 2010

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eusebio Alberto Ascoy Nieto, a favor de don Hembert Vladimir Barrutia Bonilla contra la sentencia de la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 2429, su fecha 4 de junio de 2009, que declaró fundada la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que con fecha 3 de febrero de 2010 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra la Juez del Decimoctavo Juzgado Penal de Lima, doña Raquel Beatriz Centeno Huamán, **con el objeto de que se disponga la libertad del favorecido por exceso de detención**, en la instrucción que se le sigue por los delitos de estafa y otros (Expediente N.º 18829-2008-0-1801).

Al respecto afirma que se mantiene al favorecido indebidamente privado de su libertad por más de 21 meses y 11 días, toda vez que el proceso sumario que se le sigue por los delitos de estafa y otros se inició el 22 de abril de 2008 y por tanto ya venció en exceso el plazo de su detención que determina el artículo 137º del Código Procesal Penal. Agrega que la emplazada, fuera del término de los 9 meses de detención cumplida por el favorecido en el proceso sumario, resolvió acumular el citado proceso con el proceso penal N.º 36640-2008 para luego disponer sin razón que el proceso acumulado siga el trámite ordinario, afectando todo ello sus derechos al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva y a la libertad personal.

2. Que la demanda de hábeas corpus de autos fue estimada en doble instancia judicial considerándose, principalmente, que con fecha 21 de enero de 2009 se produjo el vencimiento del plazo de la detención en el proceso sumario 18829-2008 que se sigue en contra del favorecido y por tanto se vulneraron sus derechos al no haber sido excarcelado en dicha fecha, por lo que –conforme a la ley– apercibieron a la demandada para que no vuelva a incurrir en omisiones como la de autos, sin que ello comporte dejar en libertad al favorecido al haber devenido en irreparable el daño *por el tiempo que irregularmente estuvo detenido*, ya que de los autos penales corren resoluciones que lo mantienen sujeto al plazo ordinario de la detención, como lo es el auto de la dúplica de la detención por 36 meses que dejó consentir el procesado.

3. Que conforme lo dispone el **inciso 2 del artículo 202° de la Constitución Política** del Perú, son atribuciones del Tribunal Constitucional “Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de cumplimiento”. De otro lado, el **artículo 18° del Código Procesal Constitucional establece que contra la resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda procede recurso de agravio constitucional** ante el Tribunal Constitucional.
4. Que estando a lo expuesto en el fundamento anterior y considerando que la resolución de las instancias precedentes resulta *apropiada* al caso de autos [Cfr. [STC 2877-2005-PHC/TC](#), párrafo final del fundamento 15.b], **este Tribunal no puede conocer del presente proceso constitucional en tanto no exista una resolución denegatoria de la demanda de hábeas corpus en segundo grado**, como lo exige la citada normatividad constitucional. En consecuencia **se debe declarar la nulidad del concesorio del recurso de agravio constitucional**, y de todo lo actuado con posterioridad a él.

Sin perjuicio de lo anterior expuesto este Colegiado considera oportuno señalar que **la resolución judicial que dispone la acumulación de los procesos no incide de manera negativa y directa en el derecho a la libertad personal**, en tanto tal determinación judicial, en sí misma, no impone restricción a la libertad individual [Cfr. [RTC 06273-2008-PHC/TC](#), [RTC 06107-2008-PHC/TC](#) y [STC 0985-2005-PHC/TC](#), entre otras]. Lo mismo ocurre con la ordinarización del proceso penal ya que dicha determinación judicial no genera un agravio directo y concreto en el derecho a la libertad personal que pueda dar lugar a la procedencia del hábeas corpus.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE

1. Declarar **NULO** el concesorio del recurso de agravio constitucional, de fecha 12 de julio de 2010, obrante a fojas 2464, y **NULO** todo lo actuado en este Tribunal.
2. Disponer la devolución de los autos a la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de que proceda conforme a la ley.

Publíquese y notifíquese.

SS.

VERGARA GOTELLI
ÁLVAREZ MIRANDA
URVIOLA HANI

EXP. N.º 02686-2011-PHC/TC
HUÁNUCO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUÁNUCO

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 31 de agosto de 2011

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fredy Alberto Cárdenas Viviano contra la resolución expedida por la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, de fojas 227, su fecha 2 de junio de 2011, que declaró fundada la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que conforme lo dispone el inciso 2) del artículo 202º de la Constitución Política y el artículo 18º del Código Procesal Constitucional, corresponde al Tribunal Constitucional conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias [infundadas o improcedentes] de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de cumplimiento
2. Que en el presente caso **el recurso de agravio constitucional no reúne los requisitos necesarios establecidos en el artículo 18º del Código Procesal Constitucional**, toda vez que **ha sido planteado por uno de los emplazados** en el presente proceso, don Fredy Alberto Cárdenas Viviano (fojas 233, tomo II), **contra la sentencia de segundo grado que declaró fundada la demanda** a favor de la Municipalidad Provincial de Huánuco, **razón por la cual no procede admitir el presente recurso**, siendo de aplicación lo dispuesto por el artículo 20º del citado Código.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar **NULO** el concesorio del recurso de agravio constitucional a fojas 395 (Tomo II), **IMPROCEDENTE** dicho recurso, **NULO** todo lo actuado después de su interposición y subsistente la sentencia de segunda instancia.

Publíquese y notifíquese.

SS.
ETO CRUZ
VERGARA GOTELLI
URVIOLA HANI

EXP. N.º 05195-2011-PHC/TC
SULLANA
PASCUALA VALDIVIEZO
ASTUDILLO

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 20 de marzo de 2012

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Pascuala Valdiviezo Astudillo contra la resolución expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Sullana, de fojas 24, su fecha 5 de octubre de 2011, que, confirmando la apelada, rechazó liminarmente la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que con fecha 15 de setiembre de 2011, doña Pascuala Valdiviezo Astudillo interpone demanda de hábeas corpus contra doña Consuelo Ojeda Peña, por vulneración de su derecho a la libertad individual. La recurrente refiere que ella, junto con sus hijos, viven en el segundo piso del inmueble ubicado en Parque 41-7 en la ciudad de Talara, y la demandada en el primer piso del mismo inmueble; y que ésta desde el mes de mayo de 2011 vulnera su derecho a la libertad de tránsito, porque deliberadamente ha derribado la escalera de material noble que unía la calle principal con su domicilio.
2. Que, con fecha 16 de setiembre de 2011, el Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Talara rechazó liminarmente la demanda, por considerar que al ser la recurrente y demandada co-vecinas y co-propietarias del inmueble ubicado en Parque 41-7.- Talara, el conflicto de la destrucción de la escalera puede ventilarse en la vía ordinaria para determinarse la servidumbre. La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Sullana confirmó la apelada, por considerar que la discusión tiene una connotación netamente civil y la demandante no ha acreditado que no pueda ingresar a su domicilio.
3. Que la Constitución Política del Perú establece en el artículo 2º, inciso 11) que: “Toda persona tiene derecho a: (...) 11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería”.
4. Que el derecho a la libertad de tránsito es un derecho fundamental que implica la facultad que tiene toda persona de poder desplazarse libremente con absoluta discrecionalidad por todo el territorio nacional, así como salir o ingresar en él.
5. Que en el Expediente N.º 3482-2005-PHC/TC, el Tribunal Constitucional precisa que lo que se busca a través de la protección del derecho a la libertad de tránsito con el hábeas corpus es reconocer que toda persona, ya sea nacional o extranjero “con residencia establecida pueda circular libremente o sin restricciones por el ámbito de nuestro

territorio patrio, habida cuenta de que, en tanto sujeto con capacidad de autodeterminación, tiene la libre opción de disponer cómo y por dónde decide desplazarse, sea que dicho desplazamiento suponga facultad de ingreso hacia e territorio de nuestro Estado, circulación o tránsito dentro del mismo, o simplemente salida o egreso del país”.

6. Que, en el caso de autos, **este Colegiado considera que no se efectuó la investigación necesaria que permita determinar si se ha producido, o no, la alegada afectación del derecho constitucional invocado.** En efecto, la recurrente refiere que la escalera es la única vía de acceso a su vivienda, y si bien el cuestionamiento de su destrucción podría tener naturaleza civil, para llegar a dicha conclusión o determinar si existe la vulneración invocada es necesaria la admisión a trámite de la demanda, con el fin de emitir un pronunciamiento que se sustente en mayores elementos de prueba.
7. Que, en consecuencia, **al haberse incurrido en un vicio procesal insubsanable que afecta trascendentalmente la decisión adoptada en primera y segunda instancia, resulta de aplicación el artículo 20° del Código Procesal Constitucional, que establece que si la resolución impugnada ha sido expedida incurriéndose en un vicio del proceso que ha afectado el sentido de la decisión, debe anularse y ordenarse la reposición del trámite al estado inmediato anterior a la ocurrencia del vicio.**

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar **NULA** la resolución de la la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Sullana, de fojas 24, y **NULO** todo lo actuado, desde fojas 5, a efectos de que prosiga el trámite del presente proceso.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BEAUMONT CALLIRGOS
MESÍA RAMÍREZ
ETO CRUZ